

RESPUESTA CORPOCESAR - TUTELA MARÍA BEATRIZ TORRES DIAZ

Notificaciones Judiciales Corpocesar <notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co>

Lun 4/09/2023 17:42

Para: Juzgado 02 Laboral Circuito - Cesar - Valledupar <j02lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (17 MB)

RESPUESTA CORPOCESAR - TUTELA MARÍA BEATRIZ TORRES DIAZ.pdf;

Señores

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR

Atte. Doctora Katia Rosales Cadavid

Juez

j02lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Presente

Asunto: Contestación Acción de Tutela

Referencia: 20001310500220230029400

Despacho: Juzgado Segundo Laboral Del Circuito De Valledupar

Accionante: Maria Beatriz Torres Díaz

Accionado: CORPOCESAR, Departamento del Cesar,
Agencia Nacional de Tierras -INCODER-, Juzgado Tercero
Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar



BLANCO & DEGIOVANNI

Abogados y Consultores

Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2023

Señores

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR

Atte. Doctora Katia Rosales Cadavid

Juez

j02lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Presente

Asunto: Contestación Acción de Tutela

Referencia: 20001310500220230029400

Despacho: Juzgado Segundo Laboral Del Circuito De Valledupar

Accionante: Maria Beatriz Torres Díaz

Accionado: CORPOCESAR, Departamento del Cesar, Agencia Nacional de Tierras -INCODER-, Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar

GILBERTO AUGUSTO BLANCO ZUÑIGA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado como parece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (en adelante CORPOCESAR), de acuerdo con lo establecido en el poder adjunto; encontrándome dentro de la oportunidad correspondiente, respetuosamente me dirijo ante usted con el fin de pronunciarme frente al Auto del 31 de agosto de 2023, proferido dentro de la acción de tutela con radicado No. 20001310500220230029400, en los siguientes términos:





I. EN CUANTO A LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA ACCIÓN DE TUTELA

Al respecto, se procede a contestar cada uno de los hechos planteados en la acción de tutela de la siguiente manera:

Primero: Es cierto de conformidad con los documentos allegados por la accionante.

Segundo: No me consta, deberá ser probado dentro del proceso.

Tercero: No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por la accionante.

Cuarto: No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por la accionante.

Quinto: No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por la accionante.

Sexto: No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por la accionante.

Séptimo: No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por la accionante.

Octavo: No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por la accionante.

II. CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta los fundamentos fácticos y jurídicos que motivaron la acción de tutela presentada por la señora MARIA BEATRIZ TORRES DÍAZ así como la conducta desplegada por mi representada, es menester, a efectos de dar claridad a los hechos mencionados y



ejercer de Abogados y Consultores el derecho de defensa de la entidad accionada, hacer referencia principalmente a cuatro situaciones a saber: (i) el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) la improcedencia de la acción de tutela cuando no existe un perjuicio irremediable; (iii) el acatamiento a los principios de transparencia y libre concurrencia y (iv) el reparto de acciones de tutela masivas.

⇒ Carácter subsidiario de la acción de tutela

La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 86 la Acción de Tutela como un instrumento de protección de carácter general a disposición de toda persona contra la violación de sus derechos fundamentales, mediante acciones u omisiones de cualquier autoridad pública y contra particulares, este último de manera excepcional.

Con fundamento en lo anterior, vemos como esta acción no está condicionada más que al derecho fundamental cuyo amparo se persigue y por el hecho de que el accionante no disponga de otro medio de defensa, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sumado a lo indicado, la Honorable Corte Constitucional ha señalado, reiteradamente, que dos de las características esenciales de la Acción de Tutela son la subsidiariedad y la inmediatez, así:

“...la primera por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (art. 86, inciso 3°, de la Constitución); la segunda puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustantivo en cuanto a fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces...”



En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que impliquen la trasgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho... así, pues, que la tutela no es factible de ser elegida según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece la acción ordinaria".¹

(Negrilla y cursiva fuera de texto)

En este mismo sentido, en lo que corresponde a la subsidiaridad de la Acción de Tutela, el mencionado órgano colegiado, indicó:

"...Subsidiariedad: A la luz del artículo 86 de la Constitución y del artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por esta razón, solo procede como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto². Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental. También, la procedencia como medio transitorio exige acreditar: (i) la temporalidad, vista como la afectación inminente; (ii) la urgencia de las medidas en la protección del derecho amenazado; (iii) la gravedad en el grado de afectación del derecho; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para garantizar el amparo del derecho..."³

¹ Sentencia C-543 de 1992 (Exp. Expedientes D-056 y D-092), M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.

² 2 Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2016 (expediente T-5.168.539), M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO

³ Sentencia T-296/22 (Expediente T-8.104.419), M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO



Aunado a lo anterior, en lo referente a la no procedencia de la tutela cuando se cuenta con otros medios de protección, la Corte Constitucional ha expuesto:

“...la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce...”⁴

(Negrilla y cursiva fuera de texto).

En consecuencia, en el caso concreto no se logra cumplir con el requisito de subsidiaridad pues como es bien sabido, el ordenamiento jurídico pone a disposición de los ciudadanos diversos mecanismos para la defensa de sus derechos, siendo uno de ellos la acción de tutela, sin embargo, la misma se condiciona al hecho de que el accionante no disponga de otro medio de defensa.

De esta manera, se observa que el medio de defensa principal e idóneo al cual se considera pertinente acudan los accionantes en el caso concreto es, o bien manifestarse dentro del trámite administrativo respectivo, o acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. Al amparo de los medios antes indicados, la accionante puede reclamar la efectividad de los derechos constitucionales y legales que considere vulnerados, teniendo incluso, dentro del trámite jurisdiccional respectivo, la posibilidad de solicitar medidas cautelares y utilizar los demás mecanismos procesales orientados a la satisfacción de sus intereses.

⁴ Sentencia T-882/12 (expediente T-3520653), LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ



⇒ Improcedencia de la acción de tutela cuando no existe un perjuicio irremediable

En este punto, y de cara a lo referente al perjuicio irremediable, es pertinente indicar que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-318 de 2017, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, indicó:

“Frente al particular, esta Corporación, en Sentencia T-494 de 2010, señaló:

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea: (a) cierto e inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consuma un daño antijurídico en forma irreparable.”

Conforme a estos criterios, la Corte ha conceptualizado el perjuicio irremediable, así:

“(…) De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen (…).

En síntesis, la acción constitucional no puede desplazar al juez ordinario y solo subsidiariamente, en eventos excepcionales definidos por la jurisprudencia, aquella puede invocarse para solicitar una protección transitoria, o una protección definitiva. Cuando se invoca el perjuicio irremediable, el peticionario debe acreditarlo o aportar mínimos elementos de juicio que le permitan al juez constitucional comprobar la existencia de este elemento”.

Con fundamento en lo anterior, se encuentra plenamente demostrado que, en relación con la situación aducida por la accionante, no se logró demostrar la existencia de un perjuicio



irremediable, pues, de acuerdo con los hechos y pretensiones expuestas en el escrito de interposición de Acción de Tutela, se considera que las mismas no comportan un impacto que logren afectar inminentemente y con carácter grave sus derechos, requiriendo de la interposición de medidas impostergables que neutralicen la situación.

Aunado a lo anterior, en el caso objeto de pronunciamiento, se considera que no es posible que se dé lugar a la aplicación del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, pues como ya se indicó en la situación concreta no se está ante la presencia de un perjuicio irremediable.

Así las cosas, se evidencia claramente que en el caso objeto de pronunciamiento, la accionante no aportó ningún tipo de material probatorio que permita establecer con certeza y claridad la existencia de un perjuicio irremediable.

⇒ Acatamiento a los principios de transparencia y libre concurrencia

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la convocatoria pública nace como una figura autónoma a partir del artículo 125 de nuestra Constitución Política, según el cual *"...Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público, El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes."* A su turno, el artículo 126 de la misma norma, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015 trae consigo la excepción, de acuerdo con la cual *"...salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedidas de una convocatoria pública reglada por la ley en la se fije o requisitos y procedimientos..."*

Aunado a lo anterior y acorde con los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 909 de 2004, se tienen que las convocatorias



públicas deberán regirse por los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad para el ingreso, publicidad, transparencia en la gestión de los procesos, especialización de los órganos técnicos ejecutores, garantía de imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia.

En este sentido, se observa que la actuación de CORPOCESAR en el marco de la Convocatoria Pública dirigida a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras localizadas en el departamento del Cesar, para participar en la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo 2023 – 2027 fue realizada acorde a los principios previamente mencionados.

Así, vale la pena resaltar que el desarrollo de las actuaciones de CORPOCESAR no restringen de manera alguna la participación en la convocatoria pública en mención, pues la anterior obedece totalmente a sus principios orientadores en la medida que garantiza la libre concurrencia e igualdad en el ingreso al cerciorarse de que aquellos que deseen participar en la convocatoria acrediten los requisitos determinados en la misma.

En línea con lo anterior, se garantiza la confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera en la medida en que CORPOCESAR atiende a lo consignado por el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.8.5.1.2.5⁵, tan es así que diversas convocatorias públicas relativas a la participación de las Comunidades Negras en la participación de la

⁵ “ARTÍCULO 2.2.8.5.1.2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos: a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal; b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción; c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.”



elección de un representante principal y su respectivo suplente ante los Consejos Directivos las Corporaciones Autónomas Regionales de diversos departamentos, exigen como requisito el aquí reprochado por la accionante, pues precisamente, éste es ordenado en cumplimiento al artículo 2.2.8.5.1.2. del precitado Decreto.

Aunado a lo anterior se considera que vale la pena traer a colación que, CORPOCESAR en aras de garantizar y propender por un adecuado ejercicio de inclusión y participación de las comunidades negras, cuenta con un Consultivo del Nivel del Cesar de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, siendo éste el señor JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO, de ello da cuenta la Certificación proferida por el Ministerio del Interior el día 16 de marzo de 2023. Así las cosas, se recuerda que conforme al Decreto 1640 de 2020, la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, es una instancia de diálogo e interlocución entre éstas y el Gobierno nacional, en aras de adelantar el seguimiento y aplicación efectiva de las disposiciones normativas de la Ley 70 de 1993 *“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”* y sus decretos reglamentarios.

Siendo así las cosas, el precitado Decreto 1640 de 2020 establece dentro de las funciones de la comisión consultiva de Alto Nivel, la siguiente:

“ARTÍCULO 2.5.1.1.3. Funciones de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. *La Comisión Consultiva de Alto Nivel tendrá las siguientes funciones:*

(...)

5. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades y entidades nacionales y territoriales, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades que representan.

(...)”



De manera que, como se ha demostrado, CORPOCESAR ha obrado no únicamente con total apego al marco normativo que regula la materia y a los principios orientadores de las convocatorias públicas sino que además de ello, sus actuaciones son garantistas y de ninguna manera restrictivas, bajo el entendido de que se encuentran coordinadas de la mano del señor JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO, en su calidad de miembro de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras como ha dado cuenta de ello el derecho de Petición del día 12 de julio de 2023 interpuesto por aquel, en el cual se solicita a CORPOCESAR *“convocar únicamente a los consejos comunitarios que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 1523 de 2003”*⁶. De manera que no es dable sostener que han sido cercenados los derechos al debido proceso; autodeterminación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; acceso a las representaciones, igualdad, entre otros, como pretende hacerlo ver la accionante.

Finalmente, se considera prudente poner de presente que de no exigirse el requisito reprochado por la accionante en el marco de la convocatoria pública, CORPOCESAR no solamente estaría incurriendo en violación directa de una disposición normativa, sino que además se encontraría incurso en una vía de hecho administrativa, pues se encontraría tomando una decisión que, en términos de la Sentencia T-682 de 2015⁷, *“(...)lo hace de forma arbitraria y con fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico.”*

⁶ “Artículo 2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos: a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal; b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción; c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.”

⁷ Sentencia T-682/15 (expediente T- 4.412.740), JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.



Sobre el particular, se trae a colación lo establecido por el Decreto 1834 de 2015, del cual se procede a trasuntar:

“ARTÍCULO 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.

A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia.

Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación.”

(Subrayado fuera de texto.)

Así las cosas, se tiene que uno de los momentos procesales oportunos para tramitar un asunto de tutela masiva es el escenario en el que nos encontramos actualmente, es decir, la contestación de la tutela. Se trae éste tema a colación, en aras de ponerle de presente al juez de conocimiento del caso, que se encuentra en un escenario de tutela masiva.

Lo anterior, sustentado en que existen diversas acciones de tutela que:

- Persiguen la protección de los mismos derechos fundamentales presuntamente vulnerados que, en este caso corresponden al debido proceso, a la participación, a la igualdad, a elegir y ser elegido, a la autodeterminación de la etnia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y demás.



- Fundamento de la presunta amenaza o vulneración de derechos por una sola y misma acción de una autoridad pública, la cual, en lo que nos atañe, se trata de la Convocatoria Pública del día 02 de agosto de 2023 abierta por CORPOCESAR, la cual se dirige a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo 2023 - 2027.

Las mencionadas tutelas han sido presentadas por el señor HERMES LEONIDAS MOLINA OSORIO en su calidad de representante legal del Consejo Comunitario Caño Candela, a la cual le está dando trámite el Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril – Cesar y cuenta con radicado 200454089001-2023-00242-00; por el señor JAIME LUIS CUADRO a la cual le está dando trámite el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiriguaná – Cesar y cuenta con radicado 2017831040022023000010-00 y; por el señor JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO a la cual le está dando trámite el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento De Chiriguaná – Cesar y cuenta con radicado 20178-31-04-001-2023-00059-00.

De manera que como se observa, señor juez, no es la primera vez que se aborda sobre el particular en CORPOCESAR, razón por la que se le pone en conocimiento de la situación, en aras de cumplir cabalmente con las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1834 de 2015 igual que las contenidas en el Decreto 1382 de 2000 y en aras de garantizar los principios de celeridad, eficacia, prevalencia de lo sustancial sobre las formas y acceso oportuno a la administración de justicia del trámite de tutela, pues en estos casos, como lo señala el Auto 492 de 2018 de la Honorable Corte Constitucional⁸: *“los jueces están llamados a observar y cumplir en debida forma los términos procesales consagrados en el artículo 86 de la Carta, para decidir las solicitudes de amparo constitucional puestas en su conocimiento”*, razón por la cual se solicita amablemente, remitir el expediente para su conocimiento y trámite al Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril – Cesar, pues fue este quien avocó en primer lugar el conocimiento de

⁸ Auto 492/2018. (Expediente ICC-3390). CARLOS BERNAL PULIDO.



III. PETICIÓN

Con fundamento en lo expuesto, se solicita declarar como improcedente el amparo del derecho fundamental al debido proceso, participación, a la igualdad, a elegir y ser elegido, alegado por parte de la accionante, en razón a que, en lo que corresponde a las disposiciones tomadas y actuaciones ejecutadas por CORPOCESAR y que son materia de reproche, se circunscriben a: (i) decisiones que se encuentran debidamente soportadas en las normas aplicables al caso; (ii) no comportan una vulneración a derecho fundamental alguno y; (iii) no causan un perjuicio irremediable que merezca ser objeto de protección por medio del presente amparo constitucional.

IV. PERSONERÍA

Respetuosamente solicito al señor juez, recocerme personería para actuar en los términos del poder que me ha sido conferido y que se anexa a la presente contestación, con miras a que se realice la debida y eficaz defensa técnica de mi prohijado.

V. PRUEBAS Y ANEXOS

Para los fines pertinentes, se aportan los siguientes documentos:

1. Poder debidamente conferido por parte de CORPOCESAR.
2. Certificación proferida por el Ministerio del Interior del día 16 de marzo de 2023, en la cual consta que el señor JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO ejerce como Consultivo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, como representante



BLANCO & DEGIOVANNI

del departamento del Cesar; con un periodo vigente hasta el 11 de octubre del 2026.

3. Derecho de Petición del día 12 de julio de 2023 enviado por el señor JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO en calidad de Alto Consultivo de las comunidades negras en el Nivel del Cesar al Director General de CORPOCESAR.
4. Copia del correo electrónico enviado por el juzgado Promiscuo Municipal de Becerril – Cesar el día 14 de agosto de 2023 a CORPOCESAR, contentivo de la tutela interpuesta por el señor HERMES LEONIDAS MOLINA OSORIO, sus anexos y el auto admisorio de dicha tutela, proferido el 07 de agosto de 2023.
5. Copia de los documentos allegados en el correo electrónico mencionado en el numeral anterior.
6. Copia del correo electrónico enviado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiriguaná – Cesar, contentivo de la tutela interpuesta por el señor JAIME LUIS CUADRO, sus anexos y el auto admisorio de dicha tutela, proferido el día 11 de agosto de 2023.
7. Copia de los documentos allegados en el correo electrónico mencionado en el numeral anterior.
8. Copia del correo electrónico enviado por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento De Chiriguaná – Cesar contentivo de la tutela interpuesta por el señor JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO sus anexos y el auto admisorio de dicha tutela, proferido el día 18 de agosto de 2023.
9. Copia de los documentos allegados en el correo electrónico mencionado en el numeral anterior.

VI. NOTIFICACIONES

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, recibirá notificaciones a través del correo electrónico notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co

El suscrito las recibirá en la ciudad la ciudad de Bogotá, en la Calle 94ª No 11ª - 39 Edificio Consorcio Inmobiliario Oficina 308, Tel. 315-7599041. De igual forma podrá ser notificado en las siguientes direcciones de





BLANCO & DEGIOVANNI

correo electrónico: Abogados y Consultores

gblanco@bdabogados.com.co

ecorrea533@yahoo.com

gilbertoblancoz@yahoo.com

sarai232009@hotmail.com

y

Del señor Juez,

Atentamente,

GILBERTO AUGUSTO BLANCO ZÚÑIGA

C.C. No. 7.144.767

T.P. 113.284 del C. S de la J.

Apoderado - CORPOCESAR



Señores

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR

Atte. Doctora Katia Rosales Cadavid

Juez

j02lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Presente

PROCESO:	ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE:	MARIA BEATRIZ TORRES DÍAZ
ACCIONADO:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-, DEPARTAMENTO DEL CESAR, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -INCODER-, JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES DE VALLEDUPAR
RADICADO No:	20001310500220230029400

JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.092.664 expedida en Valledupar, en mi condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cesar – CORPOCESAR-, designado a través de Acuerdo 008 del 26 de octubre de 2021, con dirección electrónica notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co por medio del presente escrito, confiero poder especial al doctor **GILBERTO BLANCO ZUÑIGA**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, en su condición de representante legal de la firma BLANCO & DEGIOVANNI ABOGADOS Y CONSULTORES y abogado principal, y a la doctora **SARAI JOSEPHINE MOW PEREZ**, mayor de edad, identificada como aparece al pie de su firma, en su condición de abogada sustituta; lo anterior, para que representen los intereses de la entidad en la acción de tutela adelantada en su despacho bajo el radicado No. 20001310500220230029400.

Los apoderados quedan facultados para conciliar, presentar, solicitar, aportar, tachar y solicitar toda clase de prueba, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, y en general todas aquellas facultades de ley, que sean inherentes para el cabal cumplimiento de este mandato.

En consecuencia, solicito amablemente se les reconozca la personería adjetiva en la oportunidad que legalmente corresponda, en los términos y para los fines señalados en el presente mandato procesal, el cual, se confiere conforme a lo indicado en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 *“Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”*, y las normas que lo sustituyan, por tanto, no requiere de presentación personal o reconocimiento notarial o judicial.



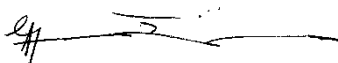
En el presente poder se indica expresamente la dirección del correo electrónico del poderdante y de los respectivos apoderados.

Atentamente,



JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO
C.C. 77.092.664 expedida en Valledupar
Director General – CORPOCESAR
notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co

Acepto,



GILBERTO BLANCO ZUÑIGA
C.C. No. 7.144.767 de Santa Marta
T.P. No. 113.284 del C.S.J.
REPRESENTANTE LEGAL - BLANCO & DEGIOVANNI ABOGADOS Y
CONSULTORES
Teléfono: 3157599041 - gilbertoblancoz@yahoo.com

Sarai Mow Pérez

SARAI JOSEPHINE MOW PEREZ
C.C. No. 1.015.474.112
T.P. No. 355.403 del C.S.J.
ABOGADA SUSTITUTA - BLANCO & DEGIOVANNI ABOGADOS Y
CONSULTORES
Teléfono: 3162695912 - sarai232009@hotmail.com



ACUERDO No 008
CONSEJO DIRECTIVO
(octubre 26 de 2.021)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"**

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "Corpocesar", en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios, la Resolución 1308 de septiembre 13 de 2.005 (ESTATUTOS), y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 24 de la Ley 99 de 1993 define los órganos de administración y dirección de las Corporaciones, a saber: La Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo, y el Director General.

Que el artículo 27 literal (j) define dentro de las funciones del Consejo Directivo la de nombrar al Director General de la Corporación.

Que el artículo 34 literal j) de la Resolución 1308 de septiembre 13 de 2.005 (ESTATUTOS) establece dentro de las funciones del Consejo Directivo la de nombrar al Director General de la Corporación.

Que mediante Acuerdo No 008 del 20 de septiembre de 2.019, se reglamentó el procedimiento interno para la designación del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - **CORPOCESAR**- para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023".

Que mediante Acuerdo 009 de fecha 24 de octubre de 2019, el Consejo Directivo designó al señor JOHN VALLE CUELLO como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023.

Que a través de providencia de fecha 04 de marzo de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado con ponencia de la magistrada ROCIO ARAUJO OÑATE, declaró LA NULIDAD de la elección del señor JOHN VALLE CUELLO como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), contenida en el acuerdo No. 009 de 2019 del Consejo Directivo de la misma entidad.





Que el Consejo de Estado en la providencia SU-2015-00029-00¹, de la Sección Quinta, indicó los efectos de las sentencias que declaran la nulidad del acto de elección por expedición irregular, como en el *sub judice*, precisando:

“...Si la irregularidad no afecta todo el procedimiento de elección, y se puede establecer concretamente el momento a partir del cual se ocasionaron las irregularidades, podría, ante la falta de un pronunciamiento en la sentencia:

1. *Retomarse el procedimiento justo en el momento antes de que se presentó la irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza que parte de la actuación no estuvo viciada.*
2. *Llevarse a cabo un nuevo procedimiento y una nueva convocatoria, siempre y cuando no se desconozcan derechos adquiridos. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que la lista de elegibles es inmodificable una vez ha sido publicada y está en firme, toda vez que los aspirantes que figuran en dicho listado no tienen una mera expectativa de ser nombrados sino que, en realidad, son titulares de derechos adquiridos, empero en aquellos casos en los cuales solo se ha adelantado la etapa de inscripción, no puede hablarse de derechos adquiridos, porque hasta ese momento solo se tiene una mera expectativa de participar y eventualmente de acceder al cargo al que se postula”.*

Que, en este orden de ideas, según la mencionada sentencia, en los eventos en que la decisión que pone fin al proceso no haga pronunciamiento expreso sobre los efectos de la declaración de nulidad, quien se sujeta a ella, bien puede continuar el proceso inicial en lo no afectado por los vicios que devinieron en la declaratoria de ilegalidad del acto o abrir una nueva convocatoria.

Que el día de hoy previa convocatoria realizada por la Dirección General en cumplimiento del artículo 38 de la Resolución 1308 de 2005, se llevó a cabo reunión ordinaria del Consejo Directivo de CORPOCESAR, dentro de la cual, en el punto “proposiciones y varios”, se realizó el análisis del acto administrativo de calendas 15 de octubre de 2021, donde la Procuraduría General de la Nación resolvió rechazar las recusaciones presentadas contra ocho (08) miembros del Consejo Directivo.

Que el inciso segundo de la Resolución 1308 de 2005, establece “**...En las sesiones ordinarias se podrá tratar cualquier asunto de los que legal y estatutariamente le corresponde**”

¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, Sentencia del 26 de mayo de 2016, Rad 2015-00029-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Que, previa proposición del Consejero DIDIER UBALDO URAN TORRES, y en atención a lo expuesto anteriormente con relación a los efectos de la sentencia de nulidad electoral, se decidió retomar el proceso eleccionario determinado en el Acuerdo 008 de 2019, expedido por el Consejo Directivo de esta Corporación Autónoma, la cual se sometió a votación y fue aprobada con un total de Ocho (8) votos a favor y tres (3) en contra.

Posteriormente una vez realizada la postulación a cargo del mismo Consejero, se realizó la votación por parte de los miembros del Consejo Directivo, partiendo del listado definitivo de aspirantes contenido en el acta de fecha 16 de octubre de 2019, resultando elegido el señor **JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 77.092.664 de Valledupar, con un total de ocho (8) votos de los once (11) miembros presentes al momento de la votación, cumpliendo con el requerimiento establecido en el artículo 42 de los Estatutos de CORPOCESAR.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Desígnese al señor **JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO** identificado con cedula de ciudadanía No 77.092.664 de Valledupar, en el cargo de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", para el restante período institucional de 2020 al 31 de diciembre de 2023".

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia del presente Acuerdo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Subdirección General Área Administrativa y Financiera de CORPOCESAR, para lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Dado en Valledupar, a los veintiséis (26) días del mes octubre de 2.021.



MANUEL GUTIERREZ VILLALOBOS
Presidente Consejo Directivo



JAIME ARAUJO CASTRO
Secretario Consejo Directivo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTION DE TALENTO HUMANO FORMATO ACTA DE POSESIÓN FUNCIONARIOS	PCA-01-F-68
		VERSIÓN: 1.0
		FECHA: 02/05/2017

ACTA DE POSESION

En Bogotá, departamento de Cundinamarca a los tres (3) día del mes de noviembre de 2021, se presentó ante el señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado, doctor **CARLOS ALBERTO FRASSER ARRIETA**, el señor **JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 77.092.664 expedida en Valledupar, departamento del Cesar, con el fin de tomar posesión como **DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"**, elegido para tal cargo para el restante periodo 2.020 al 31 de diciembre de 2.023; según Acuerdo No. 008 del 26 de octubre de 2021, emanado del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar, de acuerdo a lo establecido en el artículo (49) de la Resolución 1308 de 2.005 (Estatutos); el posesionado presentó el Acuerdo de nombramiento. Además de los siguientes documentos:

Original de la cédula de ciudadanía No. 77.092.664 expedida en Valledupar.

Otros documentos:

Hoja de Vida, certificado de antecedentes disciplinarios, certificado de responsabilidad fiscal, certificado de antecedentes judiciales, diploma de pregrado y postgrado entre otros.

Cumplido así los requisitos legales, el señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado, le recibió al compareciente el juramento de rigor, bajo cuya gravedad prometió cumplir fielmente con los deberes de su cargo, siendo respetuoso de los estatutos de la Corporación, obedecer, y hacer respetar la Constitución, las Leyes de la República y Acuerdos.

La presente Acta surte efectos fiscales a partir del 3 de noviembre de 2021, y para constancia se firma la presente en original y dos (2) copias del mismo tenor en Bogotá, a los tres (3) día del mes de noviembre de 2021.


CARLOS ALBERTO FRASSER ARRIETA

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado


JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO

Posesionado.



MINISTERIO DEL INTERIOR

Bogotá, D.C., martes 16 de marzo de 2023

El Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

CERTIFICA QUE:

El señor **JOSÉ ARMANDO MENDOZA SARMIENTO**, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.065.570.246 expedida en Valledupar Cesar, ejerce como Consultivo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, como representante del departamento del Cesar; con un periodo vigente hasta el 11 de octubre del 2026 y con las funciones que se relacionan de conformidad con el Decreto 1640 del 14 de diciembre del 2020 así:

ARTÍCULO 2.5.1.1.3. Funciones de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. La Comisión Consultiva de Alto Nivel tendrá las siguientes funciones:

1. *Servir de instancia de diálogo e interlocución entre las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el Gobierno nacional, para el seguimiento, la reglamentación y la aplicación efectiva de las disposiciones previstas en la Constitución Política y la Ley 70 de 1993, en el marco de su competencia.*
2. *Servir como mecanismo de difusión de la información hacia las comunidades que representan y de interlocución con niveles directivos del orden nacional, sin perjuicio de los demás espacios e instancias de participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.*
3. *Promover, impulsar y hacer seguimiento a las normas que desarrollen los derechos de las comunidades que representan.*
4. *Contribuir a la solución de los problemas de tierras que afectan a las comunidades que representan del territorio nacional, impulsando los programas de titulación colectiva que se adelanten en favor de esta población.*
5. *Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades y entidades nacionales y territoriales, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades que representan.*
6. *Preparar un estimativo de los costos por períodos anuales de las actividades programadas, de acuerdo con las funciones de la comisión, señalarlos presupuestos necesarios para cada una de las vigencias fiscales y enviarlo al Gobierno nacional para su consideración en el proyecto de ley definitivo sobre rentas y gastos de la Nación.*

7. *Efectuar las recomendaciones a los proyectos de reglamentación o modificación de la Ley 70 de 1993, que serán consultados a través del Espacio Nacional de Consulta Previa de medidas administrativas y legislativas de amplio alcance.*
8. *Establecer los lineamientos para que la Comisión de Estudios formule el Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades Negras, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 70 de 1993, previo al proceso de consulta previa que de conformidad con el artículo 2.5.1.4.4 del presente Decreto se hará por el Espacio Nacional de Consulta Previa.*
9. *Designar, por consenso o votación por mayoría de sus miembros, a los representantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ante los espacios de representación institucional nacional que requieran de su nominación o designación.*
10. *Rendir informes periódicos a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sobre su gestión, los avances en la implementación de la Ley 70 de 1993, proponiendo alternativas para superar los obstáculos que se presenten en su desarrollo.*
11. *Las demás señaladas en la ley o que en el reglamento interno se determinen.*

Lo anterior no genera ningún vínculo laboral, ni contractual con el Ministerio del Interior.

La presente se expide a petición del interesado, se firma en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de marzo de 2023.



Víctor Hugo Moreno Mina
Director de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras



Documento emitido por el Ministerio del Interior. [URL de verificación:](https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=UewmoiPUmVdgXq1Yi08+pQ==)
<https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=UewmoiPUmVdgXq1Yi08+pQ==>

Valledupar - Cesar 12 julio de 2023.

Señor:

JORGE LUIS FERNANDEZ OSPINO

Director General de Corpocesar.

atencionalciudadano@corpocesar.gov.co

E. S. D.

REF: Derecho de Petición Artículo: 23 de la C.N

JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO, mayor de edad identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma en el presente escrito, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Nacional y Artículos 13 y ss. Del CPACA, reglamentarias, presentó ante su despacho **ESCRITO DE PETICION** por las razones de hecho y Derecho que a continuación me permito exponer.

REFERENTES CONCEPTUALES

TIERRAS DE COMUNIDADES NEGRAS.

La Ley 70 de 1993, en el Artículo 1, establece que el principal objetivo de dicha norma es reconocer el derecho a la propiedad que tienen las Comunidades Negras sobre las tierras baldías que vienen ocupando en las zonas rurales y ribereñas, en donde estas comunidades realizan sus prácticas tradicionales de producción.

Desde sus inicios, desde el cimarronaje, la formación de las Comunidades Negras está asociada con la tierra, como medio para el desarrollo económico y de la vida a través de la práctica de actividades productivas agrícolas, pecuarias, pesqueras, mineras, madereras, entre otras.

Es por ello que, el reconocimiento en la Constitución Política de 1991 de la existencia de las Comunidades Negras (Artículo 55 Transitorio), está debidamente motivado por:

- a. La tierra como fuente principal de ingreso de las Comunidades Negras.
- b. Arraigo de estas comunidades con la tierra.
- c. Existencia de una riqueza cultural, impulsada por tradiciones y costumbres.
- d. Peligro de la desaparición de esta riqueza cultural, forzado por el desarraigo y la dispersión de las familias por no contar con el espacio natural para su desarrollo social y económico.

Es esto último el espíritu de la Ley 70 de 1993, que es proteger el factor esencial de la existencia de las Comunidades Negras, es decir, proteger la tierra de estas comunidades.

Las Comunidades Negras, por años o siglos, en muchos casos, han venido ocupando tierras en las cuales desarrollan sus prácticas tradicionales de producción. Estas tierras cumplen al menos dos características:

1. Son tierras baldías¹

2. Estas tierras están ubicadas en zonas rurales ribereñas² de los ríos de la Cuenca del Pacífico y de otras zonas del país que presentan similares condiciones.

Debe notarse que se trata de tierras que se han venido ocupando, sobre las cuales el estado debe garantizar la propiedad colectiva.

Ese “venir ocupando”, el Numeral 4, Artículo 2, de la Ley 70 de 1993, lo denomina

“**Ocupación Colectiva**” y lo define de la siguiente manera:

“Es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tierras para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción”.

Respecto a las Prácticas Tradicionales de Producción, el Numeral 7, Artículo 2, de la Ley 70 de 1993, expresa:

¹ **Tierras Baldías.** Son los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que pertenecen al estado y que carecen de otro dueño, y los que, habiendo sido adjudicados con ese carácter, deban volver a dominio del estado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la ley 110 de 1913, y las normas que lo adicionen, desarrollen o reformen (**Ley 70 de 1993, Artículo 2, Numeral 4**)

² **Zonas rurales ribereñas.** Son los terrenos aledaños a las riberas de los ríos (...) que están por fuera de los perímetros urbanos definidos por los Concejos Municipales de los municipios del área en consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el Código del Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986), y en las normas que lo adicionen, desarrollen o reformen, y en las cuales se encuentre asentada la respectiva comunidad (**Ley 70 de 1993, Artículo 2, Numeral 3**)

“Son las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente³ las comunidades negras para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible”.

Es sobre esas tierras, las que cumplen las anteriores características, las que el estado adjudicará a las Comunidades Negras la propiedad colectiva, tal como lo señala el Artículo 4 de la Ley 7 de 1993. En su segundo párrafo, este Artículo expresa:

*“Los terrenos respecto de los cuales se determine el derecho a la propiedad colectiva se denominarán para todos los efectos legales **“Tierras de las Comunidades Negras”**.”*

En resumen, son “Tierras de Comunidades Negras”:

- a. Las tierras baldías, rurales y ribereñas
- b. Que han venido ocupando las comunidades negras
- c. Sobre las cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales

producción

- d. Y se determine sobre ellas el Derecho a la Propiedad Colectiva

Es preciso observar que las “Tierras de las Comunidades Negras” no comprenden:

- a. El dominio sobre los bienes de uso público (escuelas, parques, vías públicas -calles, carreras, carreteras-, centros de salud, edificios públicos, entre otros).
- b. Las áreas urbanas de los municipios (esto incluye los caseríos y centros poblados cuyas casas son de propiedad privada).
- c. Los recursos naturales renovables y no renovables (ríos, ciénagas, canteras, minas, entre otros).
- d. Las tierras de resguardos indígenas legalmente constituidos.

³ **Consuetudinario:** Dícese de lo que es tradición, costumbre o convencional en una persona o sociedad determinada (Wikipedia)

- e. El subsuelo
- f. Los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular conforme a la ley 200 de 1936.
- g. Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional.
- h. Áreas del sistema de Parques Nacionales.

En atención a lo anterior, solo es posible la creación de consejos comunitarios en territorio baldíos sustentables de titulación colectiva, pues la esencia de esta organización es la administración y control de los territorios que solicita en propiedad colectiva. Son irregulares, ilegales e inexistentes los consejos comunitarios que se creen sin el lleno de estos requisitos y condiciones

MOTIVOS

En mi calidad de Alto Consultivo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras del Departamento del Cesar, y amparado en el numeral 5° del artículo 2.5.1.1.3 decreto 1640 del 2020, me permito ponerlo en conocimiento, que en el Departamento del Cesar, se ha estado constituyendo consejos comunitarios de comunidades negras, con la única finalidad de participar en la convocatoria, donde se elige al representante de las comunidades negras del departamento del cesar, ante el consejo directivo de la corporación autónoma del cesar Corpocesar, sin el lleno de los requisitos legales establecido en el artículo 20 del decreto 1745 de 1995, y mucho menos del decreto 1523 de 2003, más exactamente en su artículo Nro.2, que textualmente dice lo siguiente;

Artículo 2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos:

a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal;

b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;

c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.

En atención a que se aproxima la fecha de convocar a los Consejos Comunitarios de comunidades negras, que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, para el periodo comprendido entre el 1º. De enero de 2024 al 31 de diciembre del 2027, en aras de garantizarles a las comunidades negras el debido proceso de elegir y ser elegida en igualdad de condiciones, me permito solicitar lo siguiente;

PETICIONES.

- 1)** Señor Director, le solicito muy respetuosamente que en cumplimiento al marco normativo que regula o rige la participación de las comunidades negras del Departamento del Cesar, ante el Consejo Directivo de la Corporación, convocar únicamente a los consejos comunitarios que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en el artículo No 2 del decreto 1523 de 2003.
- 2)** Sirva solicitarle a la Agencia Nacional de Tierra como entidad competente, el listado de oficial de los consejos comunitarios que, a la fecha tienen Títulos Colectivos o se encuentran en trámite de adjudicación en el Departamento del Cesar
- 3)** Solicito señor Director, que en la Comisión Evaluadora de la documentación aportadas por los Consejos Comunitarios que llenen los requisitos de Ley, se hace necesario que dicha comisión, esté acompañada o integrada por un funcionario de la Defensoría del Pueblo y dos Delegados de la Consultiva Departamental del Cesar, en aras de garantizar la participación legítima de los consejos comunitarios que pretendan participar.

NOTIFICACIONES.

Las recibiré en la Manzana 9 casa 29 Barrio Los Coco Valledupar, Cesar. Celular: 3116695243
E-mail: afrovic2016@gmail.com

De Usted Atentamente.



JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO

C.C. N° 1.065.570.246 Expedida en Valledupar-Cesar.
Alto Consultivo de Las Comunidades Negras.....

Anexo: Certificación que me Acredita mi Condición de Consultivo de Alto Nivel del Cesar.



Al responder cite este número:

OFI2022-11946-DCN-2300

Bogotá D.C. martes, 7 de junio de 2022

Señor

HENRY ROYERO PARRA

Valledupar, Cesar

raizalnegro@gmail.com

Asunto: Respuesta “Derecho de Petición Artículo: 23 de la C.P.”

Referencia: Correo electrónico 5 de junio de 2022

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de la referencia, por la cual allega derecho de petición a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de manera atenta y en el término conferido para ello, nos permitimos dar respuesta atendiendo a su requerimiento, el cual se cita a continuación:

Certifíqueme por favor si en algún momento el acta, expediente o carpeta de constitución del consejo comunitario Caño Candela, constituido supuestamente en el Corregimiento la Guajirita Jurisdicción del Municipio de Becerril - Cesar, fue enviada alguna copia a sus despacho en cumplimiento establecidos en el inciso 1° del parágrafo 1° de artículo 9° del decreto 1745 de 1995.

Verificado el archivo físico y documental que reposa en esta Dirección se pudo constatar que en efecto el Consejo Comunitario Caño Candela ubicado en jurisdicción del Municipio de Becerril, Cesar, a la fecha no se encuentra inscrito en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base del Ministerio del Interior.

No obstante lo anterior, se logró evidenciar que el Consejo Comunitario en mención mediante radicado numerado con el consecutivo EXT_S19-00004542-PQRSD-004542-PQR del 16 de marzo de 2019, realizó solicitud de inscripción en el Registro Único de Consejos Comunitarios y Organización de Base, para ese entonces, la cual fue negada por falta de requisitos formales exigidos en el 2.5.1.1.15 del Decreto 1066 de 2015.

Así las cosas, remitimos para su conocimiento y fines pertinentes copia de la solicitud antes mencionada, en la cual se incluye la Resolución No. 0250 del 26 de diciembre de 2014, por medio de la cual se reconoce y se inscribe la junta directiva del Consejo Comunitario Caño Candela, de la Comunidad Negra, Afrocolombiana y Raizal del Corregimiento de la Guajirita del Municipio de Becerril, expedida por la Alcaldía Municipal de Becerril, Cesar.

Cualquier duda con gusto será atendida.

Cordialmente,



JUDITH ROSINA SALAZAR ANDRADE

Directora de Asuntos para Comunidades Negras

[CODIGO-QR]

Documento emitido por el Ministerio del Interior. Verifique su autenticidad en:
[URL-DOCUMENTO]

Anexo (s): Petición EXT_S19-00004542-PQRSD-004542-PQR del 16 de marzo de 2019

Proyectó: Lorena Andrea Varon- Contratista

Revisó: Nur Fannery Valencia- Contratista

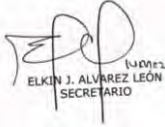
Aprobó: Judith Salazar Andrade – Directora

República de Colombia



Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril - Cesar

INFORME SECRETARIAL. - Becerril –Cesar hoy lunes siete (7) de agosto de 2023 pasa Despacho la acción de tutela impetrada por HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO como representante legal del Consejo Comunitario Caño Candela contra CORPOCESAR, la cual le correspondió el radicado No. 2023-00242-00, y consta de 5 archivos en PDF. Tiene medida cautelar. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


ELKIN J. ALVAREZ LEÓN
SECRETARIO

República de Colombia



Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril - Cesar

Becerril, lunes siete (7) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

<i>Radicación.</i>	200454089001-2023-00242-00
<i>Accionante:</i>	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO como representante legal del Consejo Comunitario Caño Candela
<i>Accionada:</i>	CORPOCESAR y el MUNICIPIO DE BECERRIL
<i>Der. f/les reclamados</i>	Salud, mínimo vital y derecho a la vida digna

Atendiendo el informe que antecede, y por encontrarse todos los requisitos exigidos por el Decreto 2591 de 1991 el Despacho decide AVOCAR competencia de la Acción de Tutela incoada por HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO como representante legal del Consejo Comunitario Caño Candela contra CORPOCESAR y el MUNICIPIO DE BECERRIL, lo anterior debido a que el petente considera que se le está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y a la vida en condiciones dignas, entre otros.

En cuanto a la medida provisional solicitada, se debe resaltar que dichas decisiones son adoptadas de manera excepcional cuando existe una inminente puesta en peligro de los derechos fundamentales, pero además que existan elementos que indiquen la premura, así las cosas, se advierte que la solicitud de la medida provisional no es otra que la pretensión principal, el accionante no logra demostrar el daño inminente e irremediable que requiera la intervención las medidas urgentes e impostergable, ya que las mismas serán ventiladas o resueltas en la sentencia; cabe recordar al accionante que la tutela por ser un instrumento constitucional tiene un trámite preferencial en relación a los términos para dictar una decisión de fondo, en ese orden de ideas, el accionante no logro demostrar a esta Judicatura, que se le ocasionaría

República de Colombia



Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril - Cesar

un perjuicio irremediable desde el momento de la presentación de la tutela, hasta la sentencia, en corolario el Despacho se abstiene de concederlas.

En consecuencia, désele el trámite correspondiente de conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y normas concordantes. Oficiesse

Para tal efecto practíquese las siguientes diligencias:

- 1.-) Comuníquesele el inicio de la presente Acción de Tutela al accionante.
- 2.-) Córrasele traslado a la entidad accionada, envíesele copia de esta, para que en el término perentorio de DOS (2) DÍAS siguiente a la notificación del presente rindan las explicaciones pertinentes.
- 3.-) Téngase como pruebas las documentales allegadas por el accionante.
- 4.-) Conformar a partir de la fecha el litis consorte necesario para resguardar el derecho de defensa de todos aquellos cointeresados.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



ELAINE ONATE FUENTES
JUEZA

Se suscribe con firma escaneada, por salubridad pública
(Art. 11, decreto 491 de 2020)

Señores

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE – CESAR

E.

S.

D.

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA

ACCIONANTE: HERMES LEONIDAS MOLINA OSORIO, representante legal del Consejo Comunitario Caño Candela.

ACCIONADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO Y ”, MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR, REPRESENTADO POR RAUL MACHADO LUNA.

HERMES LEONIDAS MOLINA OSORIO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de representante legal del consejo comunitario **CAÑO CANDELA**, ubicado en el corregimiento de la guajirita, municipio de Becerril – Cesar, con todo respeto me permito manifestar que interpongo **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO Y ”, MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR, REPRESENTADO POR RAUL MACHADO LUNA**, en razón a que me han vulnerado mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, **AUTODETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL Y PALENQUERA**, a la igualdad, a elegir y ser elegido, al acceso a representación públicas en conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial en consecuencia, pretendo obtener el amparo de mis derechos fundamentales invocados y el de las comunidades del departamento del cesar, en cabeza de los consejos Comunitarios, que me han sido conculcados por la autoridad accionada.

HECHOS

1. El día 02 de Agosto del año 2023, se abrió convocatoria pública, dirigida a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras localizados en el departamento del Cesar, para participar en la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2023 - 2027.
2. Dicha convocatoria hace exigible aportar todos los requisitos y en especial el siguiente: —“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT según Decretos 2363 y 2365 de 2015), sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”
3. Mediante Fallo de Acción de Tutela de fecha 24 de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar, bajo radicado: 20001-40-71-003-2019-00259-00, decidió tutelar los derechos fundamentales a la **—IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA** deprecados por MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ y en consecuencia ordenó al entonces Director de CORPOCESAR, que dentro del término de 48 horas hábiles siguientes a la notificación del fallo, proceda a decretar la nulidad de toda actuación al interior del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA, para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023 y se realice una nueva garantizando la participación de los Consejos Comunitarios que cumplan con los requisitos.

En cuya decisión se estableció que con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha establecida para la reunión de elección, se deben radicar los siguientes documentos:

- a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.
- b) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la Comunidad postulado como candidato.

Nota: Se omite el requisito establecido en el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2.015: —b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.” Lo anterior en cumplimiento del fallo de Tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal para la Adolescencia con funciones de Control de Garantías de Valledupar de fecha dos (2) de diciembre de 2.019.

4. Esto en cuanto a los argumentos tenidos en cuanto por el fallo de tutela que garantizo nuestra participación en la referida connotaría: Reitero que debido a lo anterior manifestado y la garantía de derechos fundamentales antes tutelados, Ha expuesto la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T-576/14 Referencia: expediente T-3482903 Acción de tutela promovida por Moisés Pérez Casseres contra el Ministerio del Interior. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, lo siguiente:—3.8. De conformidad con lo expuesto en las líneas anteriores, la Sala pudo establecer que la participación de las comunidades negras en la elección de los integrantes del espacio nacional que las representarían para efectos de la consulta previa de las medidas de amplio alcance que pudieran afectarlas no podía supeditarse a que contaran con un título colectivo adjudicado por el Incoder ni a ningún criterio que limitara su derecho a autodeterminarse y a reivindicar, en ejercicio de su identidad diversa, su status como titulares de derechos étnicos.
5. En esta misma línea, mediante Sentencia, El Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018) bajo radicación número: 11001-03-28-000-2017-00031-00 y acumulado: 11001-03- 28-000-2017-00038-00 1100, dejo claro que: —(.) NO SE PUEDE EXIGIR UN TÍTULO COLECTIVO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.
6. Por otro lado, la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T681/16 Referencia: expediente: T-5.723.146 Acción de tutela interpuesta por María Dolores Lenis Hernández contra la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, ha explicado que: —5.1 La excepción de inconstitucionalidad se erige a partir del artículo 4º de la Constitución Política que establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se emplearan las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.
7. Así lo interpretó la Corte Constitucional en la Sentencia T-576 De 2014, Corporación que analizó la exigencia que hizo el Ministerio del Interior a las comunidades afrodescendientes, consistente en poseer un título colectivo de adjudicación para participar en la elección de los integrantes del Espacio Nacional de Delegados, en cuanto sostuvo que —PREENDER QUE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEPENDA DE UN TÍTULO FORMAL QUE, ADEMÁS, CERTIFICA UNA RELACIÓN CON LA TIERRA, RESULTA A

TODAS LUCES IRRAZONABLE, sobre todo, si se tiene en cuenta la manera en que las comunidades negras del país han sido despojadas de sus territorios y lo complejo que, en sí mismo, resulta el trámite de titulación colectiva. En el mismo sentido cito la primera edición del año 2004, del libro la diversidad étnica en Colombia de la procuraduría general de la nación expresa —(...) tramite de solicitud de titulación colectiva de las tierras de las comunidad negra, una vez que la comunidades interesadas presentan la solicitud de titulación, comienza la competencia procesal del INCORA, entidad que por mandato del artículo 11 de la ley 70 de 1993, tiene la responsabilidad institucional de adelantar el trámite de las solicitudes de titulación colectiva de las tierras de las comunidades negras.(...)”

8. De igual manera me permito referirme a una decisión judicial donde precisamente es dirigida contra la Empresa Prodeco y otros, en donde se tramita esta Acción de Tutela, sin mayores requisitos que el reconocimiento local emitido por la Alcaldía Municipal, debido que al igual que nosotros en consejo comunitario tutelante no cuenta con el reconocimiento o certificación del Ministerio del Interior, no obstante puede ejercer sus derechos en garantía de las personas afrocolombianos que agrupa, esto en consonancia con el marco jurídico antes referido, tan como se refleja en la decisión emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR SALA CIVIL – FAMILIA –LABORAL PROCESO: ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA RADICADO: 20-178- 31-05-001-2020-00146-01 ACCIONANTE: CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MENDOZA —OCONEBO” DEL CORREGIMIENTO DE BOQUERÓN, LA JAGUA DE IBIRÍCO – CESAR ACCIONADO: LA AGENCIA NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE COMUNIDADES NEGRAS Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ÓSCAR MARINO HOYOS GONZÁLEZ Valledupar, nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2.021).
9. En este orden de ideas la Sentencia T-733/17, se pronunció frente al hecho de que una comunidad étnica sin registro en el ministerio puede interponer acción de tutela, por consulta previa la cual a su tenor dice: —Problema jurídico si comunidades negras sin registro pueden interponer accion de tutela en pro de su comunidad. 2.4.2 Legitimación activa en supuestos de resguardos en vía de constitución o consejos comunitarios no registrados. La Carta Política reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, así como el carácter democrático, participativo y pluralista del Estado Social de Derecho¹⁷⁶, aspectos que resultan determinantes a la hora de examinar aquellos casos en los que se condiciona la protección de comunidades étnicas a una certificación o registro administrativo. Sobre este punto, la Sala destaca que tal condicionamiento contraría la especial protección que deben el Estado y los particulares a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Argumentar lo contrario conduciría a un resultado inadmisibles: la eficacia de la consulta previa, el derecho a poseer un territorio, la facultad de autogobernarse y administrar justicia, la defensa de sus tradiciones, religión y cultura, entre otros, quedarían supeditados a la expedición de un acto administrativo o su inclusión en un registro gubernamental.
10. G. En tal sentido, se referencia la Sentencia T-425 de 2014, en la cual se protegió el derecho al reconocimiento de la comunidad INGA de la ciudad de Villavicencio, en atención a que la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior había negado su condición de población indígena. En esta oportunidad, la Corte sostuvo que el proceso de constitución de una comunidad como resguardo, no tiene incidencia alguna en su reconocimiento como cabildo indígena ni en la posibilidad de ejercer sus derechos constitucionales. De tal manera, sostuvo —N necesariamente debe constituirse un resguardo, para que existan dentro de una organización o parcialidad indígena, cabildos y se ejerza el derecho propio, a partir de lo cual puede considerarse, por ejemplo, el caso de las comunidades indígenas

urbanas. (...) Se puede concluir que la relación de los pueblos indígenas con su herencia cultural no se pierde ni se limita al factor territorial específico, como un resguardo, pues esta se encuentra en su identidad étnica”. Además, enfatizó que no puede condicionarse la salvaguarda de una población indígena a la expedición de un acto administrativo por parte del Ministerio del Interior, dado que éste —~~tiene~~ tiene un efecto declarativo y no constitutivo”177. Por otra parte, el fallo T-660 de 2015 amparó el derecho fundamental a la participación de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal, SUTO GENDE ASE NGANDE de Guacamayal, de Prado Sevilla, 16 de Julio de Sevilla, Tucurínca, jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación y Algarrobo, a pesar que el Ministerio del Interior había certificado su ~~no~~ existencia”. Debido a lo anterior, la Corte precisó: —La comprobación de la presencia de una comunidad indígena o afrodescendiente en una determinada zona no depende solamente de un acto de las autoridades públicas, como ocurre con las certificaciones que expide el Ministerio del Interior sobre la existencia de grupos culturalmente diversos en determinadas zonas del país, pues puede ocurrir, tal como sucedió en el presente caso, que tales documentos no coincidan exactamente con lo que realmente acontece. En esta oportunidad, dichas certificaciones sobre la no existencia de las comunidades, se contradicen con lo que advirtieron la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo”.

11. Es preciso decir que de 60 consejos comunitarios solo podrían participar

LISTADO DE CONSEJOS COMUNITARIOS				
ITEM	NOMBRE Y APELLIDO- EL PRESIDENTE	CONSEJO COMUNITARIO ASOCIACIÓN	CORREGIMIENTO	MUNICIPIO
1		LOS CENAGUEROS	BITO NUEVO	TAMALAMEQUE
2	LUIS ALFONSO BELEÑO HERNÁNDEZ	ALFONSO BELEÑO	TAMALAMEQUE	TAMALAMEQUE
3	FABIAN GARCIA MENESES	EL VIEJO CELESTE	LOS CERRAJONES- VEREDA	CHIRIGUANA
4	ASTRITH MARTINEZ ORTIZ	JUAN CHAGA DE MIRANDA	COSTILLA	PELAYA
5	JESUS MARIA VANEGAS MOREGA	SALVADOR VANEGAS	PUERTO BOCAS	TAMALAMEQUE
6	ASORIBAL LUNA JIMENEZ	EL PATO VUVO	SAN BERNARDO	PELAYA
7	PAUL CALDERON	COACNEJA	LA JAGUA BRICO DE BRICO	LAS JAGUA BRICO DE BRICO
8	VICTOR CEFERINO LOPEZ MORENO	COAFROPAL	La Palma	LA JAGUA DE BRICO
9	WALTER MONICA	ALEJO DURAN	EL PASO	EL PASO
10	JAME JOSE FIGUEROA ARZUAGA		EL VALLITO	EL PASO
11	FRELL BELEÑO SAMPAYO	LA QUEBRADA DE ARICÓN	ARICÓN	ASTREA
12	CRISTOBAL GOMEZ	EUSEBIO AYALA	CARACOLI	VALLEDUPAR
13	AROLDO MIRAMON	MANUELA SALVADOR SUAREZ	LOS VENADOS	VALLEDUPAR
14	JOSE ISMAEL QUIROZ	MARCELINO OCHOA	GUAYMARAL	VALLEDUPAR
15		CARLOTA REYNOLDO DE AVILA	EL PERRO	VALLEDUPAR
16	ALGENIRO QUIROZ	LOS CARDONALES	GUACOCHE	VALLEDUPAR
17	PICARDO ROMERO	ARCILA CARDON Y TUNA	EL ACOCITO	VALLEDUPAR
18	MILDON MANUEL CABANA CARRILLO	GRACILIANO GUILLEN	ALTO DE LA VUELTA	VALLEDUPAR
19	MARIA DEL PILAR AVILA S	CONESICE	LA SIERRA-EL CRUCE LA ESTACION	CHIRIGUANA
20	FULGENIO CABALLERO PERTUZ	ALTAGRACIA MEJIA	AGUA FRIA	CHIRIGUANA
21	ARNALDO LUIS MERCADO GARCIA	CAÑO CANDELA	LA GUARITA	BECEPIL
22	FRANKLIN DAZA	JOSEFRUENDINCO PADILLA	EL DILLITO	VALLEDUPAR

12.

26	ALVARO PALOMINO	ROBERTO CARVAJAL MEDINA	SALDA	CHIMICHAGUA
27	LUC ANGELA BUSTAMANTE	LA DIVINA PASTORA	ULERASCA	CODAZZI
28	ALAN MARTINEZ PAVARES	JOSE TEHERAN RAMOS	CASACARA	CODAZZI
29	ADEL TOLOZA		LA MATA	CHIMICHAGUA
30	JOSE CRISTOBAL TOPRES	LOS PAISES BAJOS	SABANAGRANDE Y GUAMARAL	CURUMANI
31	ELISEO HERRERA Y SINTH DITTA	FRANCISCA LOPEZ FERNANDEZ	FINCONHONDO	CHIRIGUANA
32	NEREIDA PALOMINO CERPA	"AMADA CABAS GUTIERREZ"	SEMPEGUA	CHIMICHAGUA
33	ZENITH CASTILLEJO CARRANZA	"FRANCISCO COLANTE CARVAJAL"	ULTIMO CASO	CHIMICHAGUA
34	YIDIS MARIA PARRA ROYERO	"AIDE ISABEL MEJIA CASTRILLO"	LAS VEGAS	CHIMICHAGUA
35	CLAUDIA DE LA ROSA CORDOBA	"DIOMEDES RODRIGUEZ SALAS"	LAS RAICES	VALLEDUPAR
36	ALVARO JESUS CUELLO CUELLO	EL ACEITUNO - COON	LA VEGA ARRIBA	VALLEDUPAR
37	MANUEL POLO VEGA	CONSEJO COMUNITARIO	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	LA JAGUA DE IBIRICO
38	FLOWER ARIAS	popovvmb	BOQUERON	LA JAGUA DE IBIRICO
39	JOSE DANIEL CASTILLEJO	"LA CEJA"	SAN MARTIN DE GUILLIN	CHIMICHAGUA
40	ADRIANA OCHOA TEJEDA	"JOSELITO /IMBRECHETH OCHOA"	LA AURORA	CHIRIGUANA
41	HENRY ROYERO PARRA	"ERNESTO GUILLEN BENJUMEA"	CHINELA Y CHAMPAN	CURUMANI
42	CECILIO GONZALES	"LA NEGRA CIPRIANA"	CUATRO VIENTOS	EL PASO
43	RAMIRO ROSADO	"ANGELA OLANO PEREZ"	EL GUAMO	CHIMICHAGUA
44	JUBERNEL CAMARGO	"MARTIN ASATH GARCIA MORENO"	SOLEDAD	CHIMICHAGUA
45	CARLOS JAVIER AGUDELO DIAZ	CCON SAN RAMON	SAN RAMON	CODAZZI
46	GUIDO MONICA CORREA	CCAFRODESCENDIENTE "FELICIANO PEREZ BARRAZA"	EL CARMEN	EL PASO
47	RAFAEL MORENO MIELES	C.C.C.N "APONIDA"	VEREDA ARENAS BLANCAS	CHIRIGUANA
48	EUFROSINA VEGA	C.C.C.N JULIO CESAR ALTAMAR MUÑOZ	LA LOMA	EL PASO
49	SANDRA OTTAI VARF7	MARTIN PESCADOR	GAMARRA	GAMARRA
50	EL MELLO - ES EL PRESIDENTE	CONSEJO COMUNITARIO	POPOVTE	CHIRIGUANA
51	ADALBERTO NAVARRO MATUTE	"GERTRUDIS MEJIA DE GARCIA"	MANDINGULLA	CHIMICHAGUA
52	FAUSTO ROQUE QUIROZ	Consejo Comunitario	NINGULLO	LA PAZ
53	NEFTALI AFANADOS	CONSEJO COMUNITARIO - EL GUTIERREZ	LA FLORESTA	PAILLITAS
54	NIXA ESTHER BUSTAMANTE	CONSEJO COMUNITARIO NIKO SURMAI-	PALESTINA	PAILLITAS
55	ALBERT YESIT MARTINEZ MENDOZA	CONSEJO COMUNITARIO LUIS ARNAGHE SALINAS	RIVERA	PAILLITAS
56	MAYERLIS MORA	CONSEJO COMUNITARIO RAMIRO MORA	EL BURRO	PAILLITAS
57	ELIS ALBERTO MIRANDA MARTINEZ	CONSEJO COMUNITARIO "ANADA JULIA GUILLEN ACONCHA"	VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA Y LOS DAF	CHIMICHAGUA
58	RAFAEL FAJARDO	CONSEJO COMUNITARIO DE VALENCIA DE JESUS	VALENCIA DE JESUS	VALLEDUPAR
59	GUSTAVO GUERRA AÑEZ	CONSEJO COMUNITARIO "EL VIEJO PEDRO GUERRA"	PATILLAL	VALLEDUPAR
60	FERNELLY JOSE PUELO MORALES	Consejo Comunitario "Juana Caro"	Vereda La Nueva Victoria	CHIMICHAGUA
61	MANUELA CAMARGO SOSA	JOSE PRUDENCIO PADILLA	Vereda La Estación	ASTREA
62	MARITZA OROZCO NIAESTRE	Consejo Comunitario "Las casitas"	Vereda Las Casitas	VALLEDUPAR
63	MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ	CONSEJO COMUNITARIO "EULEMA HINOJOSA GONZALEZ"	Veredas (la Firma, El Guaimaro y otras) perta	Valledupar

12. Precisamente la anterior es la relación de los consejos comunitarios del departamento del cesar, que ningún consejo comunitario en el cesar tiene territorio colectivos hay 12 que tiene certificación del ministerio, lo cual posiblemente signifique que estos tienen titulación en trámite lo cual hay que verificar con un informe que presente la agencia de tierras, lo cual indicaría que solo una minoría representaría o tendría la posibilidad de tener voz y voto, lo cual dicha minoría no recogería el sentir de las consejos comunitarios del departamento del cesar máxime en un

departamento que tiene varios espejos de aguas – cenagosos y una minería voraz que impacta el medio ambiente, los consejos comunitarios con certificación del ministerio son : —Corregimiento de Guacochito - Valledupar. Corregimiento de Badillo - Valledupar. Corregimiento de los Venados - Valledupar. Corregimiento de Guacoche - Valledupar. Corregimiento del Perro - Valledupar. Corregimiento de Guaymaral — Valledupar. Corregimiento de La Victoria de San Isidro — La Jagua de Ibirico. Corregimiento de la Palmita — La Jagua de Ibirico. Territorio de Varias Veredas pertenecientes a la Jagua de Ibirico "Coacneja". Corregimiento de La Loma — El Paso. El "Alejandro Duran"— El Paso. Corregimiento de La Sierra — Chiriguana”.

13. Es importante decir que el proceso de recepción de las personas desinadas para elegir y ser elegidos, en ningún momento la normatividad que regula este espacio de participación determina hay una etapa de revisión de propuestas solo un convocatoria para la referida postulación y la etapa de elección, lo cual implica que la corporación esta incluyendo requisitos o procedimientos adicionales a los que establece la normatividad vigente al respecto lo que se convierte en una violación flagrante al debido proceso, es así como el decreto **DECRETO 1523 DE 2003**, en su Artículo 1º. A su tenor refiere: *–Convocatoria.* Para la elección del representante y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Director General de la respectiva Corporación formulará invitación pública a los respectivos Consejos Comunitarios, en la cual se indicarán los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, fecha y hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia circulación regional o nacional con treinta (30) días de anterioridad a la fecha de realización de la elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o televisivo”.

14. Como lo manifesté en el hecho anterior en la convocatoria realizada por la corporación incluyo una etapa adicional la cual no está incluida en el decreto que regula **DECRETO 1523 DE 2003**, esta etapa la denomino **REVISION Y EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA**, en donde textualmente refiere: “ el comité constituido para la revisión y evaluación de los documentos presentados por las comunidades negras elaborara un informe de resultados que será divulgado mediante su publicación en la sede de **CORPOCESAR** y en la página web de esta entidad hasta el día 3 de septiembre de 2019”.

Precisamente el decreto 1523 del 2003, en su **Artículo 3º**. Refiere:” *Revisión de la documentación.* La Corporación Autónoma Regional revisará los documentos presentados y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Posteriormente, elaborará un informe al respecto, el cual será presentado el día de la reunión de elección”. Se ratifica este mismo decreto en su **Artículo 6º**. *Trámite de la elección.* El trámite será el siguiente: a) El Director General de la Corporación Autónoma Regional instalará la reunión para elección dentro de la hora fijada en la convocatoria pública y procederá a dar lectura del informe resultante de la revisión de la documentación aportada por los Consejos Comunitarios participantes. Los representantes legales de los Consejos Comunitarios que hayan cumplido los requisitos consignados en el presente decreto tendrán voz y voto, en la reunión de elección del representante y suplente;...”En este orden de ideas queda claro que corpocesar incluyo una etapa adicional al proceso la cual no está contemplada en el marco normativo que regula la materia, y que efectivamente rayan con los principios y derechos fundamentales como debido proceso, transparencia, moralidad pública entre otros.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

En el caso de la procedibilidad de la acción de tutela para el cumplimiento de fallos judiciales, la corte constitucional ha enfatizado en Sentencia T-005/15 que *El primer estudio que debe llevar a cabo el juez constitucional cuando resuelva una tutela cuya pretensión principal radique en el cumplimiento de una providencia judicial, es determinar el tipo de obligación que consagra la orden del fallo. Ahora bien, lo anterior no significa que la acción de tutela siempre proceda para ordenar el cumplimiento de una sentencia que contiene una obligación de hacer; la naturaleza subsidiaria de la acción constitucional siempre prevalece y, por esa razón, además de la naturaleza de la obligación, debe constatarse que existe un riesgo cierto para los derechos fundamentales del accionante o el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable. Aceptar una tesis distinta implicaría admitir que la tutela opera como un mecanismo ordinario dentro de los procesos judiciales, desnaturalizando así la acción. Este postulado cobra mayor fuerza cuando la obligación de hacer que se pretende hacer cumplir, tiene un carácter netamente monetario; en estos casos la Corte no puede admitir la procedencia automática de la acción de tutela, toda vez que hacerlo desnaturalizaría la acción. En consecuencia, al igual que en cualquier otra circunstancia puesta en conocimiento del juez constitucional, es menester realizar un estudio para determinar la real afectación de los derechos.*

MEDIDA CAUTELAR

Solicito que previo a la admisión de la tutela, se ordene al director de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**, que se decrete la suspensión de la convocatoria publicada el día 2 de agosto del 2023, que tiene como fin, la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2024 – 2027.

DECRETO 2591 DE 1991.

ARTICULO 7º-Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.

La suspensión provisional se gobierna actualmente por lo dispuesto en el artículo 231 del C.P.A.C.A. en estos términos: **-Artículo 231.-**

Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se *realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (...)*” Según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los efectos jurídicos de los actos administrativos de naturaleza electoral, cuando se cumplan las siguientes exigencias: (i) que así lo pida la parte actora en la demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; y, (iii) que para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado.

Por otra parte, la realización de esta convocatoria bajo los postulados, o requisitos exigidos por la normatividad vigente máxime cuando este hecho excluye la participación de diferentes consejos que tendrían todo el derecho de participar, no tendría sentido de limitarlo a una minoría y sin el lleno de los requisitos, coartando el derecho a elegir y ser elegidos de la comunidad afro del departamento de Cesar, que han venido realizando los diferentes trámites para tener la oportunidad de ejercer sus derechos de representación, máxime cuando los nuevos pronunciamientos de los jueces, al respecto no se entiendo cuál es el de realizar un proceso sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2015, lo que generaría un desequilibrio jurídico, debido a que no quedaría definido el marco jurídico aplicable en este tipo de elecciones.

Es preciso manifestar la necesidad y urgencia, que se pueda decretar esta medida que garantice la participación de todas las comunidades negras del departamento del Cesar, de conformidad con los hechos de la presente Acción de Tutela, porque se generaría una medida irremediable que esta convocatoria finalice bajo estos requisitos y no puedan participar los consejos comunitarios del Cesar que solo tienen el reconocimiento local de la Alcaldía, con esta situación se está generando un desaliento que socaban los cimientos de las comunidades que no son tenidas en cuenta en los procesos participativos, al final tendremos todo tipo de desinformación que no garantizan, la unidad de criterios y la realización de trámites al interior de los consejos comunitarios para garantizar su participación como votantes y candidatos, si generamos esta suspensión del proceso garantizaríamos la participación organizativa de las comunidades y evitar desgastes innecesarios.

En concordancia con lo anterior es menester precisar que si no se fijan parámetros, que la convocatoria anterior no se respetaron los tiempos, realizados en las diferentes formas de realización del proceso de elección, solo usted como **Juez** de la república puede dar garantías en este proceso de elección, garantizando la suspensión del mismo, para que de fondo se genere una nueva convocatoria dando garantías a todas las comunidades del Cesar.

PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN

Prevalido de que se administre justicia y en procura de que las prerrogativas del debido proceso administrativo, igualdad, elegir y ser elegido, acceso a las representaciones en conexidad con los principios de la transparencia, objetividad e imparcialidad, consagrados en la Carta Política, las leyes y la jurisprudencia se respete, llevo en **ACCIÓN DE**

TUTELA, para que cese la vulneración de los derechos fundamentales que me fueron violados con la decisión omisiva adoptada por la accionada.

Con fundamento en lo anterior y en aras de que se me garantice de manera plena y se me restablezcan de forma efectiva mis derechos fundamentales deprecados, solicito respetuosamente los siguientes:

PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales, de los consejos comunitarios del departamento del Cesar, al debido proceso, participación, a la igualdad, a elegir y ser elegido, a la Autodeterminación de la Etnia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenquera, a la representación que tenemos dentro del consejo directivo de CORPOCESAR.

SEGUNDO: Solicitamos se ordene a la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**, dejar sin efecto convocatoria publicada el día 2 de agosto del 2023, que tiene como fin, la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2024 – 2027, eliminando el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076/15, que a su tenor dice –Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción”.

TERCERO: se ordene a la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**, se genere una nueva convocatoria donde se incluyan todos los consejos comunitarios con voz y voto que tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en trámite o adjudicada.

CUARTO: se ordene al director de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE EL **CESAR - JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**, la **eliminación de la etapa y** en su defecto al comité de revisión y evaluación.

QUINTO: Se ordene al **MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR, REPRESENTADO POR RAUL MACHADO LUNA**, se generen las acciones pertinentes para Garantizar la Participación en estos espacios de partición, en especial en este Municipio que tiene tantos impactos ambientales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACION

Fundo las pretensiones que anteceden, con sustento en los artículos 13, 29, 86 y 228 de La Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 y 306 de 1992.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 de Constitución Nacional: –Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares en los casos señalados por el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela.

- La ley 70 de 1993 ordeno a través de su artículo 56, que las corporaciones autónomas regionales deben tener dentro de sus juntas directivas un

representante de los consejos comunitarios de las comunidades negras donde se tenga influencias; que dicho artículo posteriormente fue reglamentado por el decreto 1523 del 2003, el cual estableció los requisitos y condiciones sobre la elección y la participación de las comunidades en dicho espacio.

- La constitución política de Colombia en su **ARTICULO 7o**. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, es de anotar que el requisito que exige el decreto 1076 del 2015 en su artículo 2.2.8.5.12, contaría la ley 70 de 1993, que ninguno de sus artículos establece que solo tendrán derechos a la participación o representación las comunidades negras, que se registren como consejos comunitarios ante el ministerio del interior con resolución de título colectivo, o solicitud en trámite.
- La constitución política de Colombia en su **ARTÍCULO 13**. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

SEÑOR JUEZ; el convenio 169 de la OIT de 1989 en sus artículos 6 y 7 define los siguiente;

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
 - a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
 - b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
 - c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

—esto significa que uno de los criterios fundamental que se pretende proteger dicho pueblo es la autoidentificación y otros, como las formas tradicionales de vida cultura y cosmovisión, practica de producción, idioma, costumbres, organización social, religión y leyes tradicionales propias)”.

3. La constitución política de Colombia en su **ARTÍCULO 40** superior Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. **Elegir y ser elegido.**

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

4. Que el decreto 1745 de 1995, en su artículo 3 define lo siguiente;

Artículo 3º. Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.

En los términos del numeral 5º, artículo 2º de la Ley 70 de 1993, Comunidad Negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario.

En su **Artículo 4º.** La Asamblea General. Para los efectos del presente Decreto, la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo interno.

La Asamblea se reunirá ordinariamente cada año para la toma de decisiones, para el seguimiento y evaluación de las labores de la Junta del Consejo Comunitario y para tratar temas de interés general y, extraordinariamente, cuando vaya a solicitar el título colectivo o cuando lo estime conveniente.

La Asamblea en la cual se elija la primera Junta del Consejo Comunitario, será convocada por las organizaciones comunitarias existentes reconocidas por la comunidad. En adelante, convoca la Junta del Consejo Comunitario, si ésta no lo hiciera oportunamente, lo hará la tercera parte de los miembros de la Asamblea General de acuerdo con el sistema de derecho propio de la misma. Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación. La toma de decisiones en la Asamblea General del Consejo Comunitario se hará, preferiblemente, por consenso. De no lograrse éste, se procederá a decidir por la mayoría de los asistentes.

Artículo 7º. La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le

asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste.

Artículo 9º. Elección. La elección de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por mayoría de los asistentes a la Asamblea General del Consejo Comunitario. La elección se llevará a cabo en la primera quincena del mes de diciembre, de la cual se dejará constancia en el acta respectiva.

Sus miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.

Parágrafo 1º. Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal.

5. La ley 70 de 1993 en su **ARTÍCULO 3** establece lo siguiente; La presente ley se fundamenta en los siguientes principios:

1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza.

6. En la sentencia T-576 del 2014, dice: en cuanto al reconocimiento y certificación si un sujeto pertenece o no a una minoría étnica, —ninguna autoridad pública, ni siquiera el juez constitucional, puede definir si un sujeto hace parte o no, de una minoría étnica, pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de pertenencias, en ejercicio de su autonomía, por eso, en este tipo de debates. No es posible exigir pruebas distintas a la compactibilidad entres los atributos de una persona y los criterios que la comunidad haya establecido en el ejercicio de su autogobierno”.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del Juramento manifiesto que no se ha interpuesto Acción de Tutela por los mismos hechos y derechos ante autoridad jurisdiccional alguna.

PRUEBAS ALLEGADAS

Me permito solicitarle a este honorable despacho, se sirva tener y decretar como tales las siguientes:

- Documento en el que se demuestra la existencia de nuestro consejo comunitario y que yo funjo como representante legal.
- Copia de la convocatoria pública de fecha 02 de Agosto de 2023.
- Acciones de Tutelas

ANEXOS

Me permito anexar los documentos relaciones en el acápite de pruebas.

COMPETENCIA

Artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que consagra “ARTÍCULO 1.Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. Modificase el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales..."

Además de lo consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991:

“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.

De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.”

NOTIFICACIONES

El representante legal de la Corporación o quien haga sus veces en la entidad accionada puede notificarse en el Kilómetro 2 vía a La Paz, Lote 1, U.I.C —Casa e Campo”, de la Ciudad de Valledupar - Cesar.

Con dirección electrónica: notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co
directorgeneral@corpocesar.gov.co.

Al accionado: Municipio de Becerril – Cesar alcaldia@becerril-cesar.gov.co

Accionante: Dirección electrónica: consejoafrodelaguajirita2014@gmail.com

Con todo respeto,


HERMES LEONIDAS MOLINA OSORIO
No. 12.565.619 DECERRIL – CESAR
Representante Legal Consejo Comunitario Caño Candela

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**DISTRITO JUDICIAL DE
VALLEDUPAR JUZGADO
SEGUNDO PENAL DEL
CIRCUITO CHIRIGUANÁ,
CESAR.**

Chiriguaná -Cesar-, once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Asunto: ADMISIÓN ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: JAIME LUIS CUADRO VASQUEZ
Accionado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR –
CORPOCESAR Y MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR
Radicado: 2017831040022023000010-00

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que el presente escrito reúne los requisitos exigidos por el Decreto 2591 de 1991, es del caso admitirla y darle un trámite preferencial y sumario como también ordenar la notificación personal al Representante de la Entidad tutelada y al interesado.

En mérito de lo anteriormente expuesto el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la presente Acción de Tutela instaurada por el ciudadano JAIME LUIS CUADRO VASQUEZ.

SEGUNDO: Notificar al extremo accionado para que dentro del término de dos (2) días se pronuncie sobre la demanda de tutela, mediante informe en los términos del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y, ejerza su derecho de contradicción y defensa. Entéresele con agregación de copia de la solicitud de amparo para que dentro del mismo lapso remita copia digital de las piezas procesales que considere pertinentes en relación con los hechos de la misma.

TERCERO: Vincúlese al presente trámite constitucional a la Agencia Nacional De Tierras a fin de que se pronuncie sobre los hechos que componen la presente acción de tutela en el término de dos (2) días.

CUARTO: se ORDENA a la Corporación Autónoma Regional Del Cesar – CORPOCESAR para que en el término de un (1) día publique en su página web la presente decisión, en el mismo sentido NOTIFIQUE a las *comunidades negras domiciliadas en el área de jurisdicción de CORPOCESAR* que hicieron parte de la convocatoria que tiene como fin *la elección de un (1) representante miembro principal y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR" para el periodo comprendido del 1*

de enero del 2.024 al día 31 de diciembre del año 2.027; con el objeto de que, quien se crea con interés en el presente tramite constitucional allegue el pronunciamiento respectivo en el termino de dos (2) días. De lo anterior debe remitirse al despacho constancias del cumplimiento de lo ordenado.

TERCERO: En cuanto a la solicitud de medida provisional, esta instancia judicial no encuentra sustento en los hechos narrados que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional preventivamente, adicionalmente de acuerdo a los anexos aportados la elección del miembro principal ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR" tendrá lugar el 15 de septiembre de 2023, contando este despacho con término prudencial entre la notificación de la presente acción a las entidades convocadas y la fecha en mención, para tomar la decisión que derecho corresponda. En consecuencia, se negará la medida provisional solicitada por no haberse cumplido los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia del H. Corte Constitucional.

CUARTO: Notifiquese por el medio más expedito.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luis Felipe Maestre Bello', is written over a light, textured background.

LUIS FELIPE MAESTRE BELLO
JUEZ

Señores

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR
E. S. D.

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA

ACCIONANTE: JAIME LUIS CUADRO VASQUEZ

ACCIONADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO Y ”, MUNICIPIO DE DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR, REPRESENTADO POR OVELIO JIMENEZ MACHADO.

JAIME LUIS CUADRO VASQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de presidente y representante legal del consejo comunitario Los Negritos, ubicado en el municipio de **LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR**, con todo respeto me permito manifestar que interpongo **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO Y ”, MUNICIPIO DE DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR, REPRESENTADO POR OVELIO JIMENEZ MACHADO**, en razón a que me han vulnerado mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, **AUTODETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL Y PALENQUERA**, a la igualdad, a elegir y ser elegido, al acceso a representación públicas en conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial en consecuencia, pretendo obtener el amparo de mis derechos fundamentales invocados y el de las comunidades del departamento del cesar, en cabeza de los consejos Comunitarios, que me han sido conculcados por la autoridad accionada.

HECHOS

1. El día 02 de Agosto del año 2023, se abrió convocatoria pública, dirigida a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras localizados en el departamento del Cesar, para participar en la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2023 - 2027.
2. Dicha convocatoria hace exigible aportar todos los requisitos y en especial el siguiente: —“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT según Decretos 2363 y 2365 de 2015), sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”
3. En la ultimo proceso de elección pudimos participar, garantizando nuestros derechos a elegir y ser elegidos, mediante Fallo de Acción de Tutela de fecha 24 de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar, bajo radicado: 20001-40-71-003-2019-00259-00, de, cidió tutelar los derechos fundamentales a la —IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA deprecados por MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ y en consecuencia ordenó al entonces Director de CORPOCESAR, que dentro del término de 48 horas hábiles siguientes a la notificación del fallo, proceda a decretar la nulidad de toda actuación al interior del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA, para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023 y se realice una nueva

garantizando la participación de los Consejos Comunitarios que cumplan con los requisitos.

En cuya decisión se estableció que con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha establecida para la reunión de elección, se deben radicar los siguientes documentos:

- a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.
- b) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la Comunidad postulado como candidato.

Nota: Se omite el requisito establecido en el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2.015: —b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.” Lo anterior en cumplimiento del fallo de Tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal para la Adolescencia con funciones de Control de Garantías de Valledupar de fecha dos (2) de diciembre de 2.019.

4. Esto en cuanto a los argumentos tenidos en cuanto por el fallo de tutela que garantizo nuestra participación en la referida connotaría: Reitero que debido a lo anterior manifestado y la garantía de derechos fundamentales antes tutelados, Ha expuesto la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T-576/14 Referencia: expediente T-3482903 Acción de tutela promovida por Moisés Pérez Casseres contra el Ministerio del Interior. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, lo siguiente:—3.8. De conformidad con lo expuesto en las líneas anteriores, la Sala pudo establecer que la participación de las comunidades negras en la elección de los integrantes del espacio nacional que las representarían para efectos de la consulta previa de las medidas de amplio alcance que pudieran afectarlas no podía supeditarse a que contaran con un título colectivo adjudicado por el Incoder ni a ningún criterio que limitara su derecho a autodeterminarse y a reivindicar, en ejercicio de su identidad diversa, su status como titulares de derechos étnicos.
5. En esta misma línea, mediante Sentencia, El Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018) bajo radicación número: 11001-03-28-000-2017-00031-00 y acumulado: 11001-03- 28-000-2017-00038-00 1100, dejo claro que: —(.) NO SE PUEDE EXIGIR UN TÍTULO COLECTIVO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.
6. Por otro lado, la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T681/16 Referencia: expediente: T-5.723.146 Acción de tutela interpuesta por María Dolores Lenis Hernández contra la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, ha explicado que: —5.1 La excepción de inconstitucionalidad se erige a partir del artículo 4º de la Constitución Política que establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se emplearan las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.
7. Así lo interpretó la Corte Constitucional en la Sentencia T-576 De 2014, Corporación que analizó la exigencia que hizo el Ministerio del Interior a las comunidades afrodescendientes, consistente en poseer un título colectivo de adjudicación para participar en la elección de los integrantes del Espacio Nacional de Delegados, en cuanto sostuvo que

—PREENDER QUE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEPENDA DE UN TÍTULO FORMAL QUE, ADEMÁS, CERTIFICA UNA RELACIÓN CON LA TIERRA, RESULTA A TODAS LUCES IRRAZONABLE, sobre todo, si se tiene en cuenta la manera en que las comunidades negras del país han sido despojadas de sus territorios y lo complejo que, en sí mismo, resulta el trámite de titulación colectiva.En el mismo sentido cito la primera edición del año 2004, del libro la diversidad étnica en Colombia de la procuraduría general de la nación expresa —(...) tramite de solicitud de titulación colectiva de las tierras de las comunidad negra, una vez que la comunidades interesadas presentan la solicitud de titulación, comienza la competencia procesal del INCORA, entidad que por mandato del artículo 11 de la ley 70 de 1993, tiene la responsabilidad institucional de adelantar el trámite de las solicitudes de titulación colectiva de las tierras de las comunidades negras.(...)”

8. Es preciso decir que de 60 consejos comunitarios solo podrían participar

LISTADO DE CONSEJOS COMUNITARIOS				
ITEM	NOMBRE Y APELLIDO-RL O PRESIDENTE	CONSEJO COMUNITARIO ASOCIACION	CORREGIMIENTO	MUNICIPIO
1		LOS OENAGUEROS	BITO NUEVO	TAMALAMEQUE
2	LUIS ALFONSO BELEÑO HERNANDEZ	ALFONSO BELEÑO	TAMALAMEQUE	TAMALAMEQUE
3	FABIAN GARCIA MENESES	EL VIEJO CELESTE	LOS CERRAJONES - VEREDA	CHIRIGUANA
4	ASTRITH MARTINEZ ORTIZ	JUAN CHAGA DE MIRANDA	COSTILLA	PELAYA
	JESUS MARIA VANEGAS MOREGA	SALVADOR VANEGAS	PUERTO BOCAS	TAMALAMEQUE
	ASORIBAL LUJA JIMENEZ	EL PATO YUVO	SAN BERNARDO	PELAYA
	PAUL CALDERON	COACNEJA	LA JAGUA BRICO DE BRICO	LA JAGUA BRICO DE BRICO
	VICTOR CEFERINO LOPEZ MORENO	COAFROPAL	La Palma	LA JAGUA DE BRICO
	WALTER MONICA	ALEJO DURAN	EL PASO	EL PASO
	JAME JOSE FIGUEROA ARZUAGA		EL VALLITO	EL PASO
	FRELL BELEÑO SAMPAYO	LA QUEBRADA DE ARJONA	ARJONA	ASTREA
	CRISTOBAL GOMEZ	EUSEPIO AYALA	CARACOLI	VALLEDUPAR
	ARCILLO MIRAMON	MANUELA SALVADOR SUAREZ	LOS VENADOS	VALLEDUPAR
	JOSE ISMAEL QUIROZ	MARCELINO OCHOA	EL VAY MARAL	VALLEDUPAR
		CARLOS ARENDO DE AVILA	EL PERRO	VALLEDUPAR
	ALGERICO QUIROZ	LOS CARDONALES	GUACOCHE	VALLEDUPAR
	PICARDO ROMERO	ARCILA CARDON Y TUNA	GUACOCITO	VALLEDUPAR
	WILSON MANUEL CABANA CARRILLO	GRACILIANO GUILLEN	ALTO DE LA VUELTA	VALLEDUPAR
	MARIA DEL PILAR AVILA S	CONESICE	LA SIERRA-EL CRUCE LA ESTACION	CHIRIGUANA
	FULGENIO CABALLERO PERTUZ	ALTAGRACIA MEJIA	AGUA FRIA	CHIRIGUANA
	ARNALDO LUIS MERCADO GARCIA	CAÑO CANDELA	LA GUARITA	BECEPIL
	FRANKLIN DAZA	JOSE FRUENDICIO PADILLA	BAJILLO	VALLEDUPAR

26	ALVARO PALOMINO	ROBERTO CARVAJAL MEDINA	SALDA	CHIMICHAGUA
27	LUC ANGELA BUSTAMANTE	LA DIVINA PASTORA	LERASCA	CODAZZI
28	ALAN MARTINEZ PAVARES	JOSE TEHERAN RAMOS	CASACARA	CODAZZI
29	ADEL TOLOZA		LA MATA	CHIMICHAGUA
30	JOSE CRISTOBAL TOPRES	LOS PAISES BAJOS	SABANAGRANDE Y GUANAPAL	CURUMANI
31	ELISEO HERRERA Y SINTH DITTA	FRANCISCA LOPEZ FERNANDEZ	FINCOMONDIO	CHIRIGUANA
32	NEREIDA PALOMINO CERPA	"AMADA CABAS GUTIERREZ"	SEMPEGUA	CHIMICHAGUA
33	ZENITH CASTILLEJO CARRANZA	"FRANCISCO COLANTE CARVAJAL"	ULTIMO CASO	CHIMICHAGUA
34	VIOLETA MARIA PARRA ROYERO	"AIDE ISABEL MEJIA CASTRILLO"	LAS VEGAS	CHIMICHAGUA
35	CLAUDIA DE LA ROSA CORDOBA	"DIOMEDES RODRIGUEZ SALAS"	LAS RAICES	VALLEDUPAR
36	ALVARO JESUS CUELLO CUELLO	EL ACEITUNO - COON	LA VEGA ARRIBA	VALLEDUPAR
37	MANUEL POLO VEGA	CONSEJO COMUNITARIO	LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	LA JAGUA DE IBIRICO
38	FLOWER ARIAS	popovvmb	BOQUERON	LA JAGUA DE IBIRICO
39	JOSE DANIEL CASTILLEJO	"LA CEJA"	SAN MARTIN DE GUILLIN	CHIMICHAGUA
40	ADRIANA OCHOA TEJEDA	"JOSELITO /IMBRECHETH OCHOA"	LA AURORA	CHIRIGUANA
41	HENRY ROYERO PARRA	"ERNESTO GUILLEN BENJUMEA"	CHINELA Y CHAMPAN	CURUMANI
42	CECILIO GONZALES	"LA NEGRA CIPRIANA"	CUATRO VIENTOS	EL PASO
43	RAMIRO ROSADO	"ANGELA OLANO PEREZ"	EL GUAMO	CHIMICHAGUA
44	JUBERNEL CAMARGO	"MARTIN ASATH GARCIA MORENO"	SOLEDAD	CHIMICHAGUA
45	CARLOS JAVIER AGUDELO DIAZ	CCON SAN RAMON	SAN RAMON	CODAZZI
46	GUIDO MONICA CORREA	CCAFRODESCENDIENTE "FELICIANO PEREZ BARRAZA"	EL CARMEN	EL PASO
47	RAFAEL MORENO MIELES	C.C.C.N "APONIDA"	VEREDA ARENAS BLANCAS	CHIRIGUANA
48	EUFROSINA VEGA	C.C.C.N JULIO CESAR ALTAMAR MUÑOZ	LA LOMA	EL PASO
49	SANDRA OTTAI VARF7	MARTIN PESCADOR	GAMARRA	GAMARRA
50	EL MELLO - ES EL PRESIDENTE	CONSEJO COMUNITARIO	POPOVTE	CHIRIGUANA
51	ADALBERTO NAVARRO MATUTE	"GERTRUDIS MEJIA DE GARCIA"	MANDINGULLA	CHIMICHAGUA
52	FAUSTO ROQUE QUIROZ	Consejo Comunitario	NINGULLO	LA PAZ
53	NEFTALI AFANADOS	CONSEJO COMUNITARIO - EL GUTIERREZ	LA FLORESTA	PAILLITAS
54	NIXA ESTHER BUSTAMANTE	CONSEJO COMUNITARIO NIKO SURMAI-	PALESTINA	PAILLITAS
55	ALBERT YESIT MARTINEZ MENDOZA	CONSEJO COMUNITARIO LUIS ARNAGHE SALINAS	RIVERA	PAILLITAS
56	MAYERLIS MORA	CONSEJO COMUNITARIO RAMIRO MORA	EL BURRO	PAILLITAS
57	ELIS ALBERTO MIRANDA MARTINEZ	CONSEJO COMUNITARIO "ANADA JULIA GUILLEN ACONCHA"	VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA Y LOS DAF	CHIMICHAGUA
58	RAFAEL FAJARDO	CONSEJO COMUNITARIO DE VALENCIA DE JESUS	VALENCIA DE JESUS	VALLEDUPAR
59	GUSTAVO GUERRA AÑEZ	CONSEJO COMUNITARIO "EL VIEJO PEDRO GUERRA"	PATILLAL	VALLEDUPAR
60	PERNELLY JOSE PUELO MORALES	Consejo Comunitario "Juana Caro"	Vereda La Nueva Victoria	CHIMICHAGUA
61	MANUELA CAMARGO SOSA	JOSE PRUDENCIO PADILLA	Vereda La Estación	ASTREA
62	MARITZA OROZCO NIAESTRE	Consejo Comunitario "Las casitas"	Vereda Las Casitas	VALLEDUPAR
63	MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ	CONSEJO COMUNITARIO "EULEMA HINOJOSA GONZALEZ"	Veredas (la Firma, El Guaimaro y otras) perta	Valledupar

9. Precisamente la anterior es la relación de los consejos comunitarios del departamento del cesar, que ningún consejo comunitario en el cesar tiene territorio colectivos hay 12 que tiene certificación del ministerio, lo cual posiblemente signifique que estos tienen titulación en trámite lo cual hay que verificar con un informe que presente la agencia de tierras, lo cual indicaría que solo una minoría representaría o tendría la posibilidad de tener voz y voto, lo cual dicha minoría no recogería el sentir de las consejos comunitarios del departamento del cesar máxime en un

departamento que tiene varios espejos de aguas – cenagosos y una minería voraz que impacta el medio ambiente, los consejos comunitarios con certificación del ministerio son : —Corregimiento de Guacochito - Valledupar. Corregimiento de Badillo - Valledupar. Corregimiento de los Venados - Valledupar. Corregimiento de Guacoche - Valledupar. Corregimiento del Perro - Valledupar. Corregimiento de Guaymaral — Valledupar. Corregimiento de La Victoria de San Isidro — La Jagua de Ibirico. Corregimiento de la Palmita — La Jagua de Ibirico. Territorio de Varias Veredas pertenecientes a la Jagua de Ibirico "Coacneja". Corregimiento de La Loma — El Paso. El "Alejandro Duran"— El Paso. Corregimiento de La Sierra — Chiriguana”.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

En el caso de la procedibilidad de la acción de tutela para el cumplimiento de fallos judiciales, la corte constitucional ha enfatizado en Sentencia T-005/15 que *El primer estudio que debe llevar a cabo el juez constitucional cuando resuelva una tutela cuya pretensión principal radique en el cumplimiento de una providencia judicial, es determinar el tipo de obligación que consagra la orden del fallo. Ahora bien, lo anterior no significa que la acción de tutela siempre proceda para ordenar el cumplimiento de una sentencia que contiene una obligación de hacer; la naturaleza subsidiaria de la acción constitucional siempre prevalece y, por esa razón, además de la naturaleza de la obligación, debe constatarse que existe un riesgo cierto para los derechos fundamentales del accionante o el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable. Aceptar una tesis distinta implicaría admitir que la tutela opera como un mecanismo ordinario dentro de los procesos judiciales, desnaturalizando así la acción. Este postulado cobra mayor fuerza cuando la obligación de hacer que se pretende hacer cumplir, tiene un carácter netamente monetario; en estos casos la Corte no puede admitir la procedencia automática de la acción de tutela, toda vez que hacerlo desnaturalizaría la acción. En consecuencia, al igual que en cualquier otra circunstancia puesta en conocimiento del juez constitucional, es menester realizar un estudio para determinar la real afectación de los derechos.*

MEDIDA CAUTELAR

Solicito que previo a la admisión de la tutela, se ordene al director de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**, que se decrete la suspensión de la convocatoria publicada el día 2 de agosto del 2023, que tiene como fin, la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2024 – 2027.

DECRETO 2591 DE 1991.

ARTICULO 7º-Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.

La suspensión provisional se gobierna actualmente por lo dispuesto en el artículo 231 del C.P.A.C.A. en estos términos: **-Artículo 231.-** Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se *realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (...)* Según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los efectos jurídicos de los actos administrativos de naturaleza electoral, cuando se cumplan las siguientes exigencias: (i) que así lo pida la parte actora en la demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; y, (iii) que para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado.

Por otra parte, la realización de esta convocatoria bajo los postulados, o requisitos exigidos por la normatividad vigente máxime cuando este hecho excluye la participación de diferentes consejos que tendrían todo el derecho de participar, no tendría sentido de limitarlo a una minoría y sin el lleno de los requisitos, coartando el derecho a elegir y ser elegidos de la comunidad afro del departamento de Cesar, que han venido realizando los diferentes trámites para tener la oportunidad de ejercer sus derechos de representación, máxime cuando los nuevos pronunciamientos de los jueces, al respecto no se entiendo cuál es el de realizar un proceso sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2015, lo que generaría un desequilibrio jurídico, debido a que no quedaría definido el marco jurídico aplicable en este tipo de elecciones.

Es preciso manifestar la necesidad y urgencia, que se pueda decretar esta medida que garantice la participación de todas las comunidades negras del departamento del Cesar, de conformidad con los hechos de la presente Acción de Tutela, porque se generaría una medida irremediable que esta convocatoria finalice bajo estos requisitos y no puedan participar los consejos comunitarios del Cesar que solo tienen el reconocimiento local de la Alcaldía, con esta situación se está generando un desaliento que socaban los cimientos de las comunidades que no son tenidas en cuenta en los procesos participativos, al final tendremos todo tipo de desinformación que no garantizan, la unidad de criterios y la realización de trámites al interior de los consejos comunitarios para garantizar su participación como votantes y candidatos, si generamos esta suspensión del proceso garantizaríamos la participación organizativa de las comunidades y evitar desgastes innecesarios.

En concordancia con lo anterior es menester precisar que si no se fijan parámetros, que la convocatoria anterior no se respetaron los tiempos, realizados en las diferentes formas de realización del proceso de elección, solo usted como **Juez** de la república puede dar garantías en este proceso de elección, garantizando la suspensión del mismo,

para que de fondo se genere una nueva convocatoria dando garantías a todas las comunidades del Cesar.

PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN

Prevalido de que se administre justicia y en procura de que las prerrogativas del debido proceso administrativo, igualdad, elegir y ser elegido, acceso a las representaciones en conexidad con los principios de la transparencia, objetividad e imparcialidad, consagrados en la Carta Política, las leyes y la jurisprudencia se respete, llego en **ACCIÓN DE TUTELA**, para que cese la vulneración de los derechos fundamentales que me fueron violados con la decisión omisiva adoptada por la accionada.

Con fundamento en lo anterior y en aras de que se me garantice de manera plena y se me restablezcan de forma efectiva mis derechos fundamentales deprecados, solicito respetuosamente los siguientes:

PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales, de los consejos comunitarios del departamento del Cesar, al debido proceso, participación, a la igualdad, a elegir y ser elegido, a la Autodeterminación de la Etnia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenquera, a la representación que tenemos dentro del consejo directivo de CORPOCESAR.

SEGUNDO: Solicitamos se ordene a la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**, dejar sin efecto convocatoria publicada el día 2 de agosto del 2023, que tiene como fin, la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2024 – 2027, eliminando el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076/15, que a su tenor dice –Gertificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción”.

TERCERO: se ordene a la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR “CORPOCESAR” JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**, se genere una nueva convocatoria donde se incluyan todos los consejos comunitarios con voz y voto que tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en trámite o adjudicada.

CUARTO: Se ordene al **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR, REPRESENTADO POR OVELIO JIMENEZ MACHADO**, se generen las acciones pertinentes para Garantizar la Participación en estos espacios de partición, en especial en este Municipio que tiene tantos impactos ambientales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACION

Fundo las pretensiones que anteceden, con sustento en los artículos 13, 29, 86 y 228 de La Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 y 306 de 1992.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 de Constitución Nacional: –Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares en los casos señalados por el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela.

- La ley 70 de 1993 ordeno a través de su artículo 56, que las corporaciones autónomas regionales deben tener dentro de sus juntas directivas un representante de los consejos comunitarios de las comunidades negras donde se tenga influencias; que dicho artículo posteriormente fue reglamentado por el decreto 1523 del 2003, el cual estableció los requisitos y condiciones sobre la elección y la participación de las comunidades en dicho espacio.
- La constitución política de Colombia en su **ARTICULO 7o.** El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, es de anotar que el requisito que exige el decreto 1076 del 2015 en su artículo 2.2.8.5.12, contaría la ley 70 de 1993, que ninguno de sus artículos establece que solo tendrán derechos a la participación o representación las comunidades negras, que se registren como consejos comunitarios ante el ministerio del interior con resolución de título colectivo, o solicitud en trámite.
- La constitución política de Colombia en su **ARTÍCULO 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

SEÑOR JUEZ; el convenio 169 de la OIT de 1989 en sus artículos 6 y 7 define los siguiente;

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
 - a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
 - b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
 - c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas

regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

—esto significa que uno de los criterios fundamental que se pretende proteger dicho pueblo es la autoidentificación y otros, como las formas tradicionales de vida cultura y cosmovisión, practica de producción, idioma, costumbres, organización social, religión y leyes tradicionales propias)”.

3. La constitución política de Colombia en su **ARTÍCULO 40** superior Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. **Elegir y ser elegido.**

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

4. Que el decreto 1745 de 1995, en su artículo 3 define lo siguiente;

Artículo 3º. Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.

En los términos del numeral 5º, artículo 2º de la Ley 70 de 1993, Comunidad Negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario.

En su **Artículo 4º.** La Asamblea General. Para los efectos del presente Decreto, la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo interno.

La Asamblea se reunirá ordinariamente cada año para la toma de decisiones, para el seguimiento y evaluación de las labores de la Junta del Consejo Comunitario y para tratar temas de interés general y, extraordinariamente, cuando vaya a solicitar el título colectivo o cuando lo estime conveniente.

La Asamblea en la cual se elija la primera Junta del Consejo Comunitario, será convocada por las organizaciones comunitarias existentes reconocidas por la comunidad. En adelante, convoca la Junta del Consejo Comunitario, si ésta no lo hiciera oportunamente, lo hará la tercera parte de los miembros de la Asamblea General de acuerdo con el sistema de derecho propio de la misma. Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación.

La toma de decisiones en la Asamblea General del Consejo Comunitario se hará, preferiblemente, por consenso. De no lograrse éste, se procederá a decidir por la mayoría de los asistentes.

Artículo 7º. La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste.

Artículo 9º. Elección. La elección de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por mayoría de los asistentes a la Asamblea General del Consejo Comunitario. La elección se llevará a cabo en la primera quincena del mes de diciembre, de la cual se dejará constancia en el acta respectiva.

Sus miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.

Parágrafo 1º. Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal.

5. La ley 70 de 1993 en su **ARTÍCULO 3** establece lo siguiente; La presente ley se fundamenta en los siguientes principios:

1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza.

6. En la sentencia T-576 del 2014, dice: en cuanto al reconocimiento y certificación si un sujeto pertenece o no a una minoría étnica, —ninguna autoridad pública, ni siquiera el juez constitucional, puede definir si un sujeto hace parte o no, de una minoría étnica, pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de pertenencias, en ejercicio de su autonomía, por eso, en este tipo de debates. No es posible exigir pruebas distintas a la compactibilidad entres los atributos de una persona y los criterios que la comunidad haya establecido en el ejercicio de su autogobierno”.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del Juramento manifiesto que no se ha interpuesto Acción de Tutela por los mismos hechos y derechos ante autoridad jurisdiccional alguna.

PRUEBAS ALLEGADAS

Me permito solicitarle a este honorable despacho, se sirva tener y decretar como tales las siguientes:

- Documento en el que se demuestra la existencia de nuestro consejo comunitario y que yo funjo como representante legal.
- Copia de la convocatoria pública de fecha 02 de Agosto de 2023.
- Acciones de Tutelas

ANEXOS

Me permito anexar los documentos relaciones en el acápite de pruebas.

COMPETENCIA

Artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que consagra “ARTÍCULO 1.Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. Modificase el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales..."

Además de lo consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991:

“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.

De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.”

NOTIFICACIONES

El representante legal de la Corporación o quien haga sus veces en la entidad accionada puede notificarse en el Kilómetro 2 vía a La Paz, Lote 1, U.I.C —@sa e Campo”, de la Ciudad de Valledupar - Cesar.

Con dirección electrónica: notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co
directorgeneral@corpocesar.gov.co.

Al accionado: Municipio de la Jagua de Ibérico – Cesar : Alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co, notificacionjudicial@lajaguadeibirico-cesar.gov.co.

Accionante: Dirección electrónica: orianisamaya01@gmail.com

Con todo respeto,



JAIME LUIS CUADRO VASQUEZ

CC. 12.524.475

Presidente y representante legal del consejo comunitario Los Negritos



República de Colombia
Distrito Judicial de Valledupar
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
Calle 16 N° 9-30, Quinto Nivel, Edificio Caja Agraria. Tel: 095-5747656
Valledupar-Cesar.

VALLEDUPAR SEPTIEMBRE VEINTICUATRO (24) DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).

REF:	ACCIÓN DE TUTELA.
Accionantes:	MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ
Accionada:	CORPORACION AUTONOMA DEL CESAR - CORPOCESAR
Der. Vulnerados:	IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y AUTODETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS RAIZAL Y PALENQUERA
Radicación:	20001-40-71-003-2019-00259-00.

1. OBJETO A DECIDIR.

Siendo el momento oportuno se procede a tomar la decisión que en derecho corresponda, estando dentro del término legal en ésta ACCIÓN DE TUTELA, impetrada por **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ** en contra de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales antes enunciados.

2. HECHOS RELEVANTES.

MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ, en virtud del Decreto 2591 de 1991, instaura la presente acción constitucional, basada en los siguientes supuestos fácticos¹:

- Que esa comunidad se encuentra organizada a través de un consejo de comunidades, tal como lo establece la Ley 70 de 1993, y el Decreto 1745 de 1993, significando ello que existe un pleno reconocimiento, por parte de la Alcaldía Municipal de este grupo étnico.
- Que de sesenta (60) consejos comunitarios solo podrían participar 12, del Departamento del Cesar máxime en un departamento que tiene varios espejos de aguas – cenagosos y una minera voraz que impacta el medio ambiente, los consejos comunitarios con certificación del Ministerio son:

Corregimiento de Guacochito – Valledupar,
Corregimiento de Badillo – Valledupar,
Corregimiento de los Venados – Valledupar,
Corregimiento El Perro – Valledupar,
Corregimiento de Guaymaral – Valledupar
Corregimiento de la Victoria de San Isidro – La Jagua de Ibirico,
Corregimiento de la Palmita – La Jagua de Ibirico,
Territorio de Varias Veredas pertenecientes a la Jagua de Ibirico “Coacneja”,
Corregimiento de la Loma – El Paso,
El “Alejandro Duran” – El Paso,
Corregimiento de la Sierra – Chiriguaná.

Que el 31 de julio de 2019, el Director de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CESAR “CORPOCESAR”, realiza la convocatoria por medio el periódico el pilón, donde dice: “a los

¹ Ver Folios 1 al 6 de la tutela; **HECHOS**

consejos comunitarios de las comunidades negras de área de jurisdicción de CORPOCESAR, a la reunión que se llevará el 13 de septiembre de 2019, 2:30 p.m., en la sala de Juntas de Corpocesar, frente a la feria Ganadera, con el fin de elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Que en dicha convocatoria se hace exigible aportar un requisito que vulnera los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos cual hace que ellos, no puedan participar del proceso, consistiendo en lo siguiente: *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”*

Resalta que el requisito anterior fue solicitado en la convocatoria de la corporación autónoma de la Guajira, en el cual, mediante acción de tutela de fecha 24 de septiembre de 2015, del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha – La Guajira, fue suprimida de dicha convocatoria, el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076, que dice: *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción”*, debido a que es excluyente frente a los consejos comunitarios que solo tienen reconocimiento municipales y frente a quienes tienen certificado del Ministerio del Interior y no tienen territorios colectivos adjudicados o en trámites de adjudicación esto por situaciones imputables a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

Que el proceso en ningún momento regula la etapa de revisión de propuestas solo una convocatoria para la referida postulación y la etapa de elección, lo cual implica que la corporación está incluyendo requisitos o procedimientos adicionales a los que establece la normatividad vigente, lo que se convierte en una violación flagrante al debido proceso, que el Decreto 1523 de 2003, en su artículo 1º refiere:

“Convocatoria. Para la elección del representante y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, el director General de la respectiva Corporación formulará invitación pública a los respectivos Consejos Comunitarios, en la cual se indicaran los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, fecha y hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia circulación regional o nacional con treinta (30) días de anterioridad a la fecha de realización de la elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o televisivo”.

Que el Decreto 1523 de 2003, en artículo 3, refiere: *“Revisión de la documentación. La Corporación Autónoma Regional revisará los documentos presentados y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Posteriormente elaborará un informe al respecto, el cual será presentado el día de la reunión de elección”*. Que se ratifica este mismo decreto en su artículo 6, que contiene el trámite de la elección, expuesto así: *“a) El Director General de la Corporación Autónoma Regional instalará la reunión para elección dentro de la hora fijada en la convocatoria pública y procederá a dar lectura del informe resultante de la revisión de la documentación aportada por los Consejos Comunitarios participantes. Los Representantes Legales de los Consejos Comunitarios que hayan cumplido los requisitos consignados en el presente decreto tendrán voz y voto, en la reunión de elección del representante y suplente”*.

Insiste en considerar que la accionada incluyó una etapa adicional al proceso, la cual no está contemplada en el marco normativo que regula la materia, *“y que efectivamente rayan con los principios y derechos fundamentales como debido proceso, transparencia, moralidad pública y otros”*.

3. PETICIONES.

Con fundamento a la relación fáctica dada a conocer por la accionante **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ**, actuando como representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la regio del Cerro de la Falta y el Carbonal “**ENUEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ**” Corregimiento de PATILLAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, en su escrito de tutela, solicita lo siguiente:²

- Se ordene al Director de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – JULIO SUAREZ LUNA**, que se les permita a todos los consejos comunitarios a elegir y ser elegidos de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, con voz y voto que no tengan títulos colectivos o en trámite a inscribirse y participar en la escogencia del representante de la Etnia de las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizal y Palanquera del Departamento del Cesar, ante la Junta Directiva de la Corporación – CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.
- Se ordene a la demandada, que se realice una nueva convocatoria donde se incluyan todos los consejos comunitarios con voz y voto que tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en tramites o adjudicada.
- Se ordene a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR, que de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política se puedan incluir a las convocatorias otras formas organizativas de las comunidades negras a la respectiva corporación caso específico de las organizaciones de base.

4. ACTUACIÓN PROCESAL.

Dentro del trámite de la presente acción de tutela se ordenó oficiar al Representante Legal de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR**, para que en el término de dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, enviara a este juzgado respuesta sobre los hechos alegados por la accionante. Igualmente, se ordenó tener como prueba las copias de los documentos enunciados y aportados por la parte accionante en el acápite correspondiente y los demás que se aportaran a este trámite. Por último, se ordenó notificar por el medio más expedito al Representante Legal de la accionada, a la accionante y a todo aquel que tenga un interés directo en el resultado de la misma.

La parte accionante solicita medida provisional, la cual el Despacho se abstuvo de decretar, en razón a que de los documentos aportados como pruebas, no se desprende la existencia de un peligro inminente, perjuicio irremediable en contra de la accionante, lo cual quedaba sujeto a la decisión de fondo que haya de emitirse en su debido momento.

5. CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACCIONADA³

5.1. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR

Mediante escrito, remitido el 16 de agosto de 2019, por correo electrónico, **JULIO RAFAEL SUAREZ LUNA**, en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, se pronuncia con relación a los hechos y pretensiones expuestos por la demandante, en los siguientes términos:

² Ver Folio 5 de la tutela. **PETICION**.

³ Ver folio 19 al 23

- Que mediante convocatoria pública, se realizó invitación a las comunidades negras, domiciliadas en el área de jurisdicción de CORPOCESAR, - todo el Departamento del Cesar – a participar en la elección de un (1) representante miembro principal y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023.
- Que en esa convocatoria se estableció, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección de su representante ante el Consejo Directivo, allegaran a la CORPOCESAR, con anterioridad mínima de quince (15) días, a la fecha establecida para la reunión de elección, los siguientes documentos:
 - a). *Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la Inscripción de la Junta y de su representante legal.*
 - b). *Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (Agencia Nacional del Tierras), sobre la existencia de territorio s colectivos legalmente titulados o en tramites*
 - c). *Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.*
- Que en procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, fue reglamentado inicialmente a través del Decreto 1523 de 2003, cuyo artículo establece los mismos requisitos antes descritos.
- Que no es procedente, por ser contrario a la Ley, la pretensión de la accionante, en el sentido de ordenar al director de CORPOCESAR, permitir a todos los consejos comunitarios a elegir y ser elegidos, sin acreditar títulos colectivos o en trámites de inscripción, y participar en la escogencia del representante de la etnia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal palanquera del Departamento del Cesar ante la Junta directiva de CORPOCESAR, teniendo en cuenta que los requisitos establecidos deben acreditarse en su totalidad.
- Que en el presente caso, las condiciones dispuestas en la Convocatoria Pública demandada, no vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y la participación de la parte accionante, ni mucho menos, figuran discriminación étnico racial y territorial, en tanto en la referida convocatoria se establecieron unos mismos requisitos para todos los Consejos Comunitarios del Departamento del Cesar, los cuales se encuentra debidamente soportados en el ordenamiento legal.

6. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde determinar al Juzgado, si **LA CORPORACION AUTONOMA DEL CESAR – CORPOCESAR**, le está vulnerando los derechos fundamentales a la señora **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ**, representante legal del Consejo Comunitario de comunidades negras raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Región del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”**, los derechos fundamentales **“A LA IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUIERA”**, al exigir para la convocatoria para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)”, como requisito: *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de*

Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”

7. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el legislador.

En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, *“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”*, establece lo siguiente:

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

8. CASO CONCRETO.

En solicitud de amparo constitucional, la señora **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ**, en su condición de representante legal del Consejo Comunitario de comunidades negras raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Region del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”**, pide la protección de los derechos fundamentales **“A LA IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUIERA”**, los que estima vulnerados por la accionada la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, al exigir a los consejos comunitarios de las comunidades negras ...con el fin de elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”*, lo que a su entender, vulnera los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos lo cual hace que ellos, no puedan participar en el proceso aludido.

En ese orden, pretende que la demandada les permita elegir y ser elegidos de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, con voz y voto, aunque no tengan títulos colectivos o en trámite a inscribirse y participar en la escogencia del representante de la Etnia de las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizal y Palanquera del Departamento del Cesar, ante la Junta Directiva de la Corporación – CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, por lo solicita realice una nueva convocatoria donde se incluyan tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en tramites o adjudicada.

Frente a las pretensiones planteadas por la accionante, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, ha considerado que en la elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, fue

reglamentado inicialmente a través del Decreto 1523 de 2003, cuyo artículo establece entre los requisitos aquel que exige la “*Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (Agencia Nacional del Tierras), sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en tramites*”, por lo que no es procedente, por ser contrario a la Ley, la pretensión de la accionante, en el sentido de ordenar al director de CORPOCESAR, permitir a todos los consejos comunitarios a elegir y ser elegidos, sin acreditar títulos colectivos o en trámites de inscripción, y participar en la escogencia del representante de la etnia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal palanquera del Departamento del Cesar ante la Junta Directiva de CORPOCESAR, teniendo en cuenta que los requisitos establecidos deben acreditarse en su totalidad.

Ha expuesto la Honorable Corte Constitucional, en **Sentencia T-576/14** Referencia: expediente T-3482903 Acción de tutela promovida por Moisés Pérez Casseres contra el Ministerio del Interior. **Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA**, lo siguiente:

“5.48. De conformidad con lo expuesto en las líneas anteriores, la Sala pudo establecer que la participación de las comunidades negras en la elección de los integrantes del espacio nacional que las representarían para efectos de la consulta previa de las medidas de amplio alcance que pudieran afectarlas no podía supeditarse a que contaran con un título colectivo adjudicado por el Incoder ni a ningún criterio que limitara su derecho a autodeterminarse y a reivindicar, en ejercicio de su identidad diversa, su status como titulares de derechos étnicos.

Sobre ese supuesto, decidió conceder el amparo de los derechos fundamentales que el Ministerio del Interior les vulneró a las comunidades organizadas en el Palenque Afrourbano de Tumaco, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes y del Caribe Graciela Cha-Inés, la Asociación de Consejos Comunitarios de Negritudes del Norte del Cauca, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Juan Oval Arrincón Amela, la Asociación de Organizaciones de Comunidades Negras del Cesar “Ku-Suto” y la Asociación Municipal de Consejos Comunitarios Afrodescendientes del Municipio de Suárez, Cauca, que no pudieron participar en las asambleas departamentales en las que se eligieron a los delegados del referido espacio de consulta por no acreditar que contaban con un territorio colectivo adjudicado. Dado que dicha infracción iusfundamental se estructuró por cuenta de las limitaciones impuestas por la Resolución 121 de 2012, la Sala levantará la medida cautelar que impuso sobre dicho acto administrativo en diciembre de 2012 y lo dejará sin efectos. Lo propio dispondrá respecto de los actos administrativos que se expidieron a su amparo, en particular, el Decreto 2163 de 2012.

Ahora bien, la Sala fue enfática al precisar que su decisión no se limitaría al caso concreto, sino a solucionar la problemática estructural relacionada con la ausencia de una instancia nacional de consulta previa de las medidas de amplio alcance que puedan representar una afectación directa para las comunidades negras, raizales y palenqueras del país. Fue en ese contexto que dio cuenta de los parámetros que pueden contribuir a dilucidar los dilemas asociados a la atribución de la titularidad de derechos étnicos y que destacó las disposiciones normativas y las reglas jurisprudenciales que deben guiar el desarrollo de los procesos consultivos, para asegurar la garantía plena de este derecho fundamental que, como se dijo, es esencial para la salvaguarda de la integridad cultural y la subsistencia de los pueblos étnica y culturalmente diversos.

En ese orden de ideas, advirtió la necesidad de impartir unas órdenes de protección que permitan superar los efectos que comporta, para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el hecho de no haber contado con esa instancia de consulta. Esa circunstancia tiene unas implicaciones concretas.

(...)

Lo verificado en este trámite constitucional acerca de los distintos factores que han impedido constituir una instancia nacional de consulta previa de las comunidades negras exige, además, formular una solución que impida incurrir, nuevamente, en los errores que en el pasado bloquearon las iniciativas para integrar ese espacio. Dado que, para la Sala, la problemática que se ha

suscitado al respecto ha tenido que ver con que el Estado ha pretendido imponer su visión sobre las organizaciones que deberían representar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en ese escenario, en lugar de cumplir con el compromiso que le impone el Convenio 169 de la OIT en relación con la necesidad de facilitar un espacio para que sean las propias comunidades las que decidan cuáles son sus instituciones representativas, ordenará realizar un proceso consultivo para el efecto.

En línea con lo que aquí se ha expuesto, dicho proceso de consulta deberá permitir la participación de todas aquellas comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras que se consideren con derecho a participar en él, sean rurales o urbanas, y con independencia de la forma organizativa que hayan adoptado, siempre que, en ejercicio de su autonomía, designen a un delegado que las represente en tal escenario”.

Por otro lado, la Honorable Corte Constitucional, en **Sentencia T-681/16** Referencia: expediente: T-5.723.146 Acción de tutela interpuesta por María Dolores Lenis Hernández contra la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, ha explicado que:

“5.1. La excepción de inconstitucionalidad se erige a partir del artículo 4º de la Constitución Política que establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se emplearan las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.

Esta Corporación ha sido enfática en que se trata de una facultad-deber que tienen las autoridades para inaplicar una norma y en su lugar hacer efectiva la Constitución, consolidándose como una suerte de control de constitucionalidad difuso. Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional ha definido que *“es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”*. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”⁴.

En este sentido consiste en una eficaz herramienta jurídica-política de protección al principio de supremacía constitucional, garantizando (en el caso concreto) su jerarquía y materialidad dentro del sistema de fuentes del derecho.

5.2. Dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa⁵ o a solicitud de parte cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias:

(i) La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que *“de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado”*⁶;

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexecutable por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso⁷; o,

⁴ Sentencia SU-132 de 2013.

⁵ Sentencia T-808 de 2007.

⁶ Sentencia T-103 de 2010.

⁷ En sentencia T-669 de 1996 se desarrolló esta hipótesis, fijando que *“en tales eventos, el funcionario judicial está obligado a aplicar la excepción de inconstitucionalidad, pues la Constitución es norma de normas (CP art. 4º) o, en caso de que no lo considere pertinente, debe mostrar de manera suficiente que la disposición que, dada la situación del caso concreto, pretende aplicar tiene en realidad un contenido normativo en parte diferente a la norma declarada*

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento *iusfundamental*⁸. En otras palabras, *“puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”*⁹.

Regresando al asunto objeto de estudio, teniendo en cuenta los pronunciamientos emitidos por nuestro máximo Tribunal, relacionados con las pretensiones consignadas por la parte accionante en su escrito de tutela, evidencia esta judicatura, que la norma citada por la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.8.5.1.2.**, invocada en la convocatoria pública, para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), y que consiste en el aporte de la *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción”*, constituye una restricción que afecta los derechos de participación de las comunidades hoy reclamantes, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, por lo que se dispondrá, para el presente asunto su inaplicación.

Así las cosas, y como quiera que el requerimiento contenido en el litera b del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, impuesto a los Consejos Comunitarios de comunidades Negras Raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Región del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”** Corregimiento de PATILLAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, conculcan sus derechos fundamentales a la participación, a elegir y ser elegidos y a la igualdad, se procederá por medio de éste mecanismo constitucional a tutelar los mismos, en consecuencia se ordenará a la accionada **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, inaplicar la norma citada, dejándose sin efecto el numeral b), contenido en el título de **REQUISITOS**, de la **CONVOCATORIA PUBLICA**, mediante la cual invita a las **comunidades negras**, domiciliadas en el área de jurisdicción de CORPOCESAR, a participar, en la elección de un representante miembro principal y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, declarando la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a dicha convocatoria, trámite que deberá iniciar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, con una nueva convocatoria.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL PARA LA ADOLESCENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

R E S U E L V E:

PRIMERO: TUTÉLENSE los derechos fundamentales constitucionales a la **“IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUIERA”**, invocados por la señora **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ**, en su condición de representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Región del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”**, vulnerados por la accionada **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, implicándose el literal b del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015,

inexequible, por lo cual puede seguirse considerando constitucional. Si el funcionario aplica la norma y no justifica su distanciamiento frente al pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre el mismo tema, estaríamos en presencia de una vía de hecho, pues el funcionario judicial decide aplicar caprichosamente de preferencia las disposiciones legales a las normas constitucionales, en contravía de expresos pronunciamientos sobre el punto del tribunal constitucional, máximo intérprete y guardián de la Carta (CP arts. 4º, 241 y 243).”

⁸ Sentencia T-103 de 2010.

⁹ Sentencia T-331 de 2014. En este mismo sentido, ver sentencia C-803 de 2006.

dejándose sin efecto el numeral b) contenido en la **CONVOCATORIA PUBLICA**, acápite de **REQUISITOS**,¹⁰ de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: ORDÉNESE al Doctor **JULIO RAFAEL SUAREZ LUNA** o quien haga sus veces, Director de la **CORPORACION AUTONOMA DEL CESAR – CORPOCESAR**, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a decretar la nulidad de toda actuación al interior del proceso de **CONVOCATORIA PUBLICA**, para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), realizando una nueva convocatoria, permitiendo que los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras Raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Región del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA ARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”** Corregimiento de PATILLAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, y todas aquellas que reúna los requisitos, participen en la misma, con voz y voto, sin exigírseles, la certificación del INCODER, relacionada con la existencia de territorio colectivo adjudicado o en trámite de adjudicación¹¹, conforme se argumentó en esta providencia.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes intervinientes por el medio más expedito. Contra esta decisión procede la impugnación.

CUARTO: EN FIRME esta decisión envíese a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. Una vez devuelta archívese por el centro de servicios de este sistema.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

LAURA MAESTRE LACOUTURE
JUEZ.

¹⁰ Ver folio 80 **CONVOCATORIA PUBLICA – CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**

¹¹ literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076, que dice: "Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA

FALLO DE TUTELA No. 29

Riohacha, veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil quince (2015).

REFERENCIA: Acción de Tutela instaurada por EVARISTO DE ARMAS CORDOBA en calidad de Representante Legal del Consejo Comunitario ILARIO GOMEZ BARROS de la Comunidad Negra Los Moreneros contra CORPOGUAJIRA
RADICACION: 44 - 001 - 31 - 05 - 001 - 2015-00159-00

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL

Corresponde al Juzgado, decidir de fondo la acción presentada por el señor EVARISTO DE ARMAS CORDOBA en calidad de Representante Legal del Consejo Comunitario ILARIO GOMEZ BARROS de la Comunidad Negra Los Moreneros contra LA CORPORACION AUTONOMA Y REGIONAL DE LA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA"

I. ANTECEDENTES

El señor EVARISTO DE ARMAS CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía numero 84.080.512 expedida en Riohacha (Guajira), en su calidad de Representante Legal del Consejo Comunitario ILARIO GOMEZ BARROS de la Comunidad Negra Los Moreneros, con Resolución No. 0397 del 23 de abril de 2014, promovió acción de tutela para que se amparen los derechos a la participación, igualdad y debido proceso de las comunidades negras del Departamento de la Guajira, los cuales habrían sido vulnerados por CORPOGUAJIRA, al exigirles para participar en la convocatoria y elección de sus Representantes ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales Corpoguajira, como requisito la certificación de Incoder sobre la existencia de territorio colectivo o en trámite de adjudicación, para ser convocado y elegir o ser elegido.

La anterior solicitud la formuló con base en los hechos y en los fundamentos jurídicos que se sintetizan a continuación.

costumbres, tradiciones e instituciones, al no permitirles la participación pese a estar legalmente constituidas

Que el requisito es contrario al precedente de la Corte Constitucional contenido en la sentencia T 576 de 2014. Y que el requisito señalado, realmente afecta la participación en la medida que pocos consejos comunitarios cumplen con el requisito, lo que significa que unos pocos decidirán por la inmensa mayoría.

4. PRUEBAS Y DOCUMENTOS

Con su solicitud, el accionante acompañó fotocopia simple de los siguientes documentos:

- Derecho de petición presentado a Corpoguajira (folio 6-7)
- Resolución No. 0397 de 2014 (folio 10-12).
- Convocatoria realizada por Corpoguajira (folio 14).
- Respuesta al derecho de petición (folio 16).

INFORME SOLICITADO AL INCODER

El 16 de septiembre de 2015, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER", (folio 48 al 51) mediante el Coordinador Jurídico Oficina Asesoría Jurídica de dicha entidad, informa que de acuerdo a lo solicitado, remitió en CD archivo adjunto la matriz que contiene la relación de los consejos comunitarios que se encuentran en proceso de titulación colectiva en el Departamento de la Guajira, y que a la fecha no existen consejos comunitarios titulados en dicha zona, la cual una vez consultada se pudo constatar que se relacionan 19 consejos comunitarios que ha presentado solicitud de titulación; y verificado el estado del proceso los consejos comunitarios que se encuentran listos para visita técnica son los siguientes:

- 1) LUIS ENRIQUE MARTINEZ DE SITIO NUEVO - FONSECA
- 2) LA NUEVA ESPERANZA DE LOS NEGROS,
- 3) PREDIO EL CARMEN,
- 4) LOURDES MUÑO,
- 5) RIO TAPIA,
- 6) PALENQUES DE JUAN Y MEDIO,
- 7) LOS TRECE CRUCES DEL ARROYO EL TOTUMO,
- 8) JOSE PRUDENCIO PADILLA,

Las siguientes comunidades negras radicaron solicitud y se encuentran pendientes de presentar algún documento o cumplir requisitos:

- 1) ANCESTRAL DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS
- 2) LAUREANO GOMEZ LINDO DE DIBULLA,
- 3) CULTURAL DE LA COMUNIDAD NEGRA EL NEGRO DE MINGUEO,

- 4) COMUNIDAD NEGRA POR LA REIVINDICACION DE LOS DESCENDIENTES,
- 5) COMUNIDAD LOS ESFUERZOS DE MAICAO,
- 6) COMUNIDAD NEGRA DE MATITAS CELINDA AREVALO,
- 7) LAUREANO MOSCOTE LINDO DE RIOHACHA
- 8) LOS SANTANAS,
- 9) RAFAEL MARIA GOMEZ,
- 10) ZENOBIA OROZCO CRESPO.

En relación con el Consejo Comunitario al que pertenece el accionante señala que el documento llegó a la Oficina del Director Técnico de Asuntos Étnicos de la Ciudad de Bogotá el 1º de septiembre de 2015 y a la fecha está en proceso de inclusión en la base de datos, previa revisión de la documentación aportada.

Respecto al mismo tema, el Director Técnico de Asuntos Étnicos de INCODER, en respuesta dada a CORPOGUAJIRA el 15 de septiembre de 2015 respecto de los territorios étnicos que se encuentran en trámite y para los efectos del Decreto 1076 de 2015 (cumplir con el requisito para participar en la convocatoria para elegir representante de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de las corporaciones autónomas) certificó que solamente tres se encuentran en trámite, aclarando que en la base de datos de la entidad se encuentran un sin número de solicitudes donde algunas de ellas se les ha requerido por escrito que alleguen información necesaria para continuar con la revisión que permita iniciar los procesos y que a la fecha se ha hecho caso omiso de ese requerimiento.

RESPUESTA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

El 16 de septiembre de 2015, la doctora MARIA LOURDES PUMAREJO PUMAMREJO, en calidad de Procuradora Regional de la Guajira, (folio 51b – 75) manifestó que en virtud de las dos solicitudes elevadas antes esa procuraduría por los señores HERNANDO VEGA CORZO, KEINER SUAREZ BENJUMEA, JOFRED BRITO BRITO, JAVIER GOMEZ Y HENRY REDONDO GAMEZ, en representación de los Consejos Comunitarios, solicitan la presencia o acompañamiento de esa Procuraduría al evento a realizarse en Corpoguajira, inherente al caso en estudio, ese despacho comisiono a la doctora Yenis Coronado Gil para que asista en la fecha indicada y representa a esa Procuraduría, y cumpliendo la misión encomendada compareció al auditorio de Corpoguajira el 14 de septiembre agenda, cuyo inicio, desarrollo y terminación se dio aproximadamente a las 11:45 a.m., y rindió al despacho un informe pormenorizado, destacando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la elección del referido representante, informe que adjuntó en 3 folios. Aclaro que la asistencia a dicho evento por parte de esa Procuraduría como órgano de control, se hizo en calidad de garante, en el entendido de brindar garantías para que el proceso eleccionario se desarrollara y concluyera en el marco de la tranquilidad, que ninguno de los miembros de los consejos inconformes con los directivos y servidores de la entidad convocante, o apelara a la

violencia, se respetara el proceso diseñado y que se les permitiera las intervenciones a los miembros de los consejos comunitarios y se les diera las explicaciones debidas y fundadas en el desarrollo de dicho proceso, como en efecto se hizo.

INFORME SOLICITADO A LA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA.

El doctor JUAN MANUEL PERTUZ MENA, en calidad de Director Distrital de Afro descendientes (folio 98 al 141) en respuesta al cuestionario hecho por el despacho, anexa relación de los consejos comunitarios de comunidades negras registradas en el libro que para tal efecto lleva la Alcaldía del Distrito Especial Turístico y cultural de Riohacha, tal y como lo dispone el parágrafo 1º. Del artículo 9 del Decreto 1745 de 1995, reportando 23.

Estando en la oportunidad para resolver, se procede a ello previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN

El artículo 86 de la Carta Política, recoge la acción de tutela, a favor de toda persona, para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario por sí mismo o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o por los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave o directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión.

Determina el canon constitucional la procedencia de la acción cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; y la protección se limita a una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.

2. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION

Es procedente la presente acción puesto que está dirigida a solicitar la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, a elegir y ser elegido consagrados en nuestra Constitución Nacional.

3. LEGITIMACION

Se satisface la legitimación por activa de la parte accionante, toda vez que se trata de persona mayor de edad, que actúa en su calidad de representante

legal de una comunidad negra, personal jurídica nombre propio. Por pasiva la legitimación está asegurada puesto que la persona demandada es una entidad de derecho público del orden departamental.

4. CUESTIONES PREVIAS – COADYUVANCIA EN TUTELA

El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, señala la intervención de terceros disponiendo que *"Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud"*

La Corte Constitucional en sentencia T 259 de 2012, refiriéndose al alcance de la anterior norma señaló unos parámetros para la intervención que el juzgado concreta en las siguientes subreglas.

1. Los coadyuvantes en tutela intervienen apoyando *las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas; por regla general no lo hacen promoviendo sus propias pretensiones.*
2. Aplicando los principios de informalidad y prevalencia de la acción de tutela, es posible aceptar la intervención del tercero a favor de sus propios intereses cuando a) el tercero advierta que se ven vulnerados o amenazados sus derechos en el caso concreto b) la entidad accionada es la misma autoridad que vulnera los derechos del tercero c) la vulneración denunciada ocurre en virtud de los mismos hechos más o menos delimitados desde la instauración de la tutela – es decir se encuentra se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneración de los derechos denunciados por el accionante inicial.

Descendiendo al caso concreto, a folio 100 a 106, obra en el expediente solicitud de vinculación de terceros de los Consejos Comunitarios Cascajalito, José Prudencio Padilla, Los Moreno de Morenero, Los Palenques de Juan y Medio, Predio el Carmen, La Nueva Esperanza de los Negros, Los 13 Cruces del Arroyo el Totumo, Consejo Comunitario del Río Tapias, YOHANIS MEJIA MENDOZA (representante elegida) y MARTHA MELENDRE (representante elegida) quienes intervienen coadyuvando las razones planteadas por CORPOGUAJIRA para negar la acción de tutela, y a quienes les asiste interés legítimo en la acción de tutela, en tanto presentaron solicitudes para participar en el proceso de elección que se discute en la presente acción.

Coadyuvando al demandante, y a la vez solicitando protección de sus derechos fundamentales intervinieron los Consejos Comunitarios de SANTA RITA DE LA SIERRA, "CARMELO BANQUET" comunidad negra los Hatillos; "NUMA BENJUMEA EL CACHACO NEGRO" comunidad negra el Totumo, "GUSTAVO CASTRO" comunidad negra el Tablazo, y "MOISES VEGA PUNDE" comunidad negra la Junta (San Juan del Cesar); y "WILDER YESIS MANJARREZ", a quienes se le reconoce su condición de terceros

intervinientes con interés legítimo en el resultado, en tanto se encuentran en situación fáctica similar al del Consejo accionante y solicitan su vinculación como terceros coadyuvando sus pretensiones, y justamente por la similitud objetiva, solicitan igualmente el amparo de sus derechos, bajo los mismos parámetros de la acción inicial.

Finalmente los Consejos Comunitarios **RAFAEL MARIA GOMEZ, NEGRO ROBLES, ASOROBLISTA** y el candidato **HENRY REDONDO GAMEZ**, solicitaron su intervención como terceros con interés en el resultado del proceso por haber participado en el mismo, lo que les otorga legitimidad para actuar. Sin embargo, verifica el despacho que además de coadyuvar la acción, para lo cual están legalmente autorizados, advierten que se les vulneraron sus derechos, no con la convocatoria, que es la pretensión del accionante, sino con el proceso mismo de elección, específicamente la calificación de los requisitos de los consejos comunitarios participantes, trámite que a su juicio se hizo irregular. Advierte el despacho que los hechos narrados en esta intervención, no son similares a los delimitados desde la instauración de la tutela, y por lo tanto se encuentra en condiciones objetivas diferentes respecto de los hechos enunciados por el accionante, lo que impide realizar un pronunciamiento de fondo.

En efecto, en la acción inicial, se considera violatorio de los derechos fundamentales de las comunidades negras, exigirles para participar en la convocatoria la certificación de Incoder sobre la existencia de territorio colectivo o en trámite de adjudicación. Mientras que en esta intervención, se considera violatorio la forma como se evaluaron las certificaciones que algunos de los Consejos presentaron, es decir, no reprochan la exigencia del requisito del que si se duele el accionante, sino que consideran que ellos si cumplieron el requisito y otras comunidades no lo hicieron, siendo entonces objetivamente diferente el reclamo, lo que constituye un obstáculo para resolver de fondo las denuncias planteadas, que constituyen hechos y pretensiones nuevas.

5. PROBLEMA JURIDICO

Establecidas las anteriores precisiones, corresponde al juzgado resolver como problema jurídico principal ¿si se vulneran los derechos fundamentales de las comunidades negras a elegir y ser elegidas, al debido proceso, y a la igualdad por el hecho que CORPOGUAJIRA, convocó al proceso de elección de representante de las comunidades negras ante la Junta Directiva, permitiendo la participación con derecho a voz y voto solamente a los Consejos Comunitarios que presenten certificación que acredite título colectivo o en trámite de adjudicación?

Para resolver el problema jurídico planteado, el juzgado realizara el siguiente estudio: (i) núcleo de protección de los derechos a la igualdad y al debido proceso ii) Derecho a la participación – elegir y ser elegido. Elección de las

1. HECHOS

Señala el actor que la Ley 70 de 1993, ordenó a través de su artículo 56, que las Corporaciones Autónomas Regionales, deben tener dentro de su Junta Directiva un representante de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras donde se tenga influencia; que dicho artículo posteriormente fue reglamentado por el Decreto 1523 de 2003, el cual estableció los requisitos y condiciones sobre la elección y la participación de las Comunidades en dicho espacio.

Narra que el doce (12) de junio de 2015, presentó derecho de petición con el objeto de conocer los requisitos para que los Consejos Comunitarios Afro Colombianos asentados en el Departamento de la Guajira, puedan participar en la convocatoria y elección de sus representantes ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas "Corpoguajira", recibiendo respuesta en la cual le informan que: *"En cumplimiento de expreso mandato legal, que no como una pretensión particular, CORPOGUAJIRA, exigirá a los consejos comunitarios que aspiren participar en la elección del representante y suplente, ante su consejo directivo, los requisitos contenidos en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015 norma que demanda en su literal b) la **presentación de certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámites de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción**".*

Que de igual forma, la Dirección General de CORPOGUAJIRA convocó mediante comunicado de fecha 30 de julio de 2015, a los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras del Área de Jurisdicción de Corpoguajira, para elegir un representante principal y un suplente ante el Consejo Directivo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, que la dicha elección se piensa realizar el 14 de septiembre de 2015, conforme a lo expuesto en la convocatoria hecha por la entidad, quedando por fuera los distintos Consejos Comunitarios y las Comunidades Negras de este Departamento.

Considera que resulta evidente que al no participar la comunidad Afro Guajiros, se está frente a una clara vulneración de varios derechos fundamentales de las comunidades, ya que dicha exigencia rompe con el principio de igualdad, donde algunas personas en representación de colectividades deben tener adelantado un trámite hecho ante una entidad.

Señala además que los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, para su existencia y representación legal, no requieren de documentación expedida por ente jurídico alguno, solo basta con que la comunidad exprese su deseo de organizarse, y solo la Alcaldía y el Ministerio del Interior llevarán registro de estos.

Advierte que los requisitos exigidos por la entidad accionada sólo permiten que una minoría irrisoria elegida, rijan los destinos de las comunidades negras

en materia ambiental, eje fundamental para sus comunidades, actuación que a su juicio va en contravía con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-576 de 2014 que señaló que *"Ninguna autoridad pública, ni siquiera el juez constitucional, puede definir si un sujeto hace parte o no de una minoría étnica, pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de pertenencia, en ejercicio de su autonomía. Por eso, en este tipo de debates, no es posible exigir pruebas distintas a la compatibilidad entre los atributos de una persona y los criterios que la comunidad haya establecido en ejercicio de su autogobierno"*.

2. PRETENSIONES Y DERECHOS VULNERADOS

Reclama la protección de los derechos fundamentales a la participación, igualdad, debido proceso que considera vulnerados por el ente accionado. Como pretensión solicitó, previa suspensión de la elección en curso (medida provisional), que se ordene a la accionada permitirle a los consejos comunitarios de las comunidades negras que no tengan certificación expedida por el INCODER el derecho a postularse y tener voz y voto en dicha elección.

3. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por auto del 11 de septiembre de 2015, esta agencia judicial admitió la presente acción, y ordenó correr traslado a la parte accionada, para que ejerciera su derecho de defensa, de igual manera ordenó poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Medio Ambiente el contenido de la presente solicitud, y vincular como terceros interesados los consejos comunitarios que se encuentran participando en el proceso de selección, a quienes notificó mediante publicación en la página Web de la entidad accionada.

Con relación a la urgencia de medida provisional, se abstuvo el despacho de decretarla, debido a que el hecho de que se materialice la elección antes del fallo, no hace ilusorio el amparo solicitado.

3.1. RESPUESTA DE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA".

El 16 de septiembre de 2015, (folio 76 al 97) el doctor LUIS MANUEL MEDINA TORO, en su condición de Director General de Corpoguajira, realizó las siguientes manifestaciones:

Que el tutelante tiene una concepción errónea de la situación, que lo lleva a exigir actuaciones contrarias a la ley y a la realidad, que está confundiendo la existencia misma de los consejos comunitarios de negritudes, con los requisitos que estos deben cumplir según la ley, para tener voz y voto en la elección de su representante y suplente en el Consejo Directivo. Que los consejos comunitarios se conforman de la forma que establece la ley, es decir que esta reglado, el hecho de que participen o no en la elección de su

representante ante las Corporaciones Autónomas, ni les da, ni les quita la condición de tales, desde que estén constituidos legalmente. En ninguna parte del proceso electoral, ellos han determinado que solo son consejos comunitarios los que tenían tierras adjudicadas o haber iniciado en trámite de adjudicación.

Aduce que no es cierto que esa Corporación no haya permitido la participación de los consejos comunitarios que no tienen tierras adjudicadas o en trámite, que de hecho varios consejos comunitarios que no tienen tierra participaron. Cosa muy distinta es que, en cumplimiento de la ley, la entidad debe verificar que consejos cumplen los 3 requisitos previstos en la norma, para que puedan tener voz y voto en la elección. Pero que la participación en el consejo no le fue negada a ninguno.

Que el consejo comunitario del que hace parte el tutelante, es titular pleno de todos los derechos y prerrogativas que concede el régimen jurídico a esta etnia, no obstante en el caso específico de la elección de su representante ante las Cars, es la misma ley (Art. 2.2.8.5.1.2. D. 1076/15 la que exige el cumplimiento de unos requisitos para que los consejos puedan tener voz y voto en la elección. El cumplimiento de un mandato legal vigente, no constituye la violación a un derecho fundamental. En virtud del criterio particular de algunos consejos comunitarios, Corpoguajira no puede dejar de dar cumplimiento a una norma que goza de plena vigencia, que hace parte de un procedimiento expresamente reglado en la ley que es de obligatoria observancia.

En relación con el punto dos del cuestionario, las medidas por ella adoptadas a la participación de las comunidades negras en las decisiones de la entidad dándole cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, reglamentado por los Decretos 1745 de 1995 y 1523 de 2003, recompilado por los Decretos 1066, 1076 de 2015, abrió convocatoria para que todos los consejos comunitarios con asiento en el Departamento de la Guajira, y que reunieran los requisitos establecidos en el Decreto Ley 1076 de 2015, puedan participar.

Que el artículo 2.2.8.5.1.2 **Requisitos**. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante consejo directivo, allegaran a la Corporación con anterioridad mínima de 15 días a la fecha la elección los siguientes documentos:

- a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción en la Junta y de su representante legal.
- b) Certificación expedida por el Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.
- c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación de su miembro de la comunidad postulado como candidato.

Relativo al punto 3) informa que con fundamento a la convocatoria realizada para los consejos comunitarios, la entidad recibió un total de 17 aspirantes, anotando sus respectivos representantes legales como son IRIS RODRIGUEZ SIERRA, MARTA MELENDRE, NORELIS RODRIGUEZ MEDINA, MAGALIS OCHOA MEJIA, YOHANIS MEJIA MENDOZA, ROBERTO CARLOS MEJIA, MARIA BELEN RADILLO, RONAL RONY MELO, KEYNER SUAREZ, LUIS SUAREZ, ENELVIS CORDOBA PACHECO, JOSE SUAREZ RIVADFENEIRA, DIANA VENEGA JULIO, HERNANDO JOSE VEGA, RAFAEL PLATA MARTINEZ, YULIANIS MARIN TIRADO, de lo cual se designó una comisión de verificación de documentos compuesta por funcionarios de Corpogujira, la que informó mediante acta de fecha 11 de septiembre, cuales consejos no reunían los requisitos establecidos en la norma antes descrita, informando que 14 de los consejos comunitarios no cumplían con el requisito de tener título de adjudicación, o haber iniciado trámite, y para lo cual anexan acta de verificación de documentos de la convocatoria 2015 de los consejos comunitarios de fecha 11 de septiembre de 2015.

Así mismo señala que los consejos comunitarios que cumplieron los requisitos de ley, en asamblea eligieron a la señora YOHANIS MEJIA MENDOZA, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras LOS PALENQUES DE JUAN Y MEDIO, adjuntando copia de la correspondiente acta (folio 85 al 89).

Aclara que lo señalado por la Corte en sentencia T-576-14, está referido al derecho de participar en las consultas previas y en las decisiones que los afecten; que en ese caso no se negó la participación, simplemente se verificaron unos requisitos previos taxativamente por la ley; que en esa sentencia la Corte no ordena desconocer normas legales, máxime cuando el artículo que señala los requisitos no presenta una incompatibilidad evidente con un precepto constitucional, que sería el único motivo de inaplicación.

Por lo anterior solicita declarar la improcedencia de la presente acción

3.2. RESPUESTA DE LOS TERCEROS VINCULADOS COADYUVAN A CORPOGUAJIRA

A folio 100 a 106, los Consejos Comunitarios Cascajalito, José Prudencio Padilla, Los Moreno de Morenero, Los Palenques de Juan y Medio, Predio el Carmen, La Nueva Esperanza de los Negros, Los 13 Cruces del Arroyo el Totumo, Consejo Comunitario del Río Tapias, atendieron el llamado como terceros interesados, coadyuvando la posición establecida por CORPOGUAJIRA, y solicitando que se niegue el amparo solicitado.

Aclaran, que el señor Evaristo de Armas no tiene condiciones para interponer tutela en nombre del Consejo Comunitario por tener figura en papel, un nombre de un consejo comunitario conformado el año pasado por la comunidad los Moreneros donde él no vive en ella, estando ya organizado un consejo comunitario en esa comunidad inscrito en el municipio y reconocido

por el Ministerio del Interior y con titulación colectiva en trámite de los terrenos baldíos que tiene; que a su juicio en las comunidades no se crean dos consejos comunitarios de acuerdo a la ley 70 de 1003 y decreto 1745 de 1995.

Que el actor está equivocado en sus pretensiones y obsesionado por llegar a espacios donde no reúne los requisitos, es cierto que la sentencia T-576 les reconoce unos derechos a su forma de organización, pero señalan que también es cierto que una sentencia no está por encima de las leyes, normas, decretos vigentes, y esa convocatoria está enmarcada en el decreto 1076 de 2015, que trae unas exigencias que no se pueden obviar, ni desconocer, ya que traerían más problemas jurídicos a quien la desconozca y no se puede cumplir un derecho violando otros derechos.

Que la función de Corpoguajira en el proceso es verificar cuantos son y si cumplen o no con los requisitos por los que se inscribieron ante su corporación a través de la convocatoria que se hizo. Esclarecen que la ley 70/93 y el Decreto 1745/95 con claros donde se puede conformar organizaciones de base, que aunque ambos son de comunidades negras y tienen derechos nos dice donde y cuando debemos de operar y exigir derecho porque las funciones son diferentes.

La región Caribe tiene debilidades para la conformación de consejos comunitarios porque carece de tierras baldías o adjudicadas por el Incoder; para conformar titulación colectiva. Y la Guajira no es uno de esos departamentos que no tiene muchas tierras para el proceso de titulación colectiva, es por eso que aquí en la Guajira solo hay 8 consejos comunitarios en proceso de titulación colectiva, tres con tierras adjudicadas por el Incoder y que son: Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Predio el Carmen Corregimiento Juan y Medio del Municipio de Riohacha; Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Rio Tapias corregimiento de Juan y Medio del Municipio de Riohacha Departamento de la Guajira, y cinco son territorios baldíos.

Que existe en la Guajira un grupo de personas que pertenecían a la Asociación Roblista que con el afán y la obsesión de llegar al espacio del representantes de las Negritudes ante Corpoguajira sin el lleno de los requisitos el año pasado conformaron en tiempo record de 30 a 40 consejos comunitarios desconociendo la ley 70 y el Decreto 1745; porque no tienen tierras que es a lo que se le llama territorio y si no hay territorio no hay consejos comunitarios, sino organizaciones de base.

3.3. REPRESENTANTES LEGALES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS RAFAEL MARIA GOMEZ, LA CIMARRONA, LOS SANTANAS, EL NEGRO ROBLES Y LOURDES MUÑOZ, SOLICITAN PROTECCION POR OTROS DERECHOS QUE CONSIDERAN LES FUERON VULNERADOS EN EL ACTO DE ELECCION.

Señalan estos consejos (folio 142 - 158), que como representantes de las comunidades ante el Consejo Directivo y atendiendo lo establecido en el artículo 3 del decreto 1523 de 2003 revisión de documentos, el informe leído por el Director de Corpoguajira, pueden determinar que dicho informe vulnera el derecho a elegir y ser elegido a su comunidad, impidiéndole participar en la elección, con el argumento según su criterio que las certificaciones del Incoder no cumplieran con las exigencias de los decretos reglamentarios, extralimitándose una vez más en sus funciones el comité en referencia, en el sentido de que las certificaciones no cumplieran con los requisitos por no tener expresa la anotación de la palabra TRAMITE, pero en la referida certificación establece que los consejos se encuentren en la base de datos del Incoder. Anotan que las solicitudes que se hicieron de los consejos ante el Incoder Regional fueron en fecha y tiempo suficiente, para demostrar que los consejos LAS SANTANAS, EL NEGRO ROBLES DE CAMARONES, RAFAEL MARIA GOMEZ, LA CIMARRONA, Y LOURDES MUÑOZ, están en proceso de trámite ante las oficinas del Incoder - Bogotá.

Señalan que con las anteriores explicaciones y argumentos queda demostrado que en el Informe del Comité de Corpoguajira de revisión y verificación de documentos ante los consejos se configura la vulneración de derecho a participar, elegir y ser elegido, igualdad, debido proceso, derecho al trabajo, de las instituciones y reconocimiento tradicionales de los pueblos trivales, que de acuerdo al informe y a las anomalías e irregularidades presentadas por el informe rendido por el Director de Corpoguajira, solicitaron la revocatoria directa del acto de elección de las comunidades negras por las las irregularidades presentadas que a su juicio se presentaron.

3.4. INTERVENCION DE CONSEJOS COMUNITARIOS QUE COADYUVAN AL DEMANDANTE

A folio 159 el Consejo Comunitario de SANTA RITA DE LA SIERRA de la Sierra y a folio 260 a 263 los Consejos Comunitarios "CARMELO BANQUET" comunidad negra los Haticos; "NUMA BENJUMEA EL CACHACO NEGRO" comunidad negra el Totumo, "GUSTAVO CASTRO" comunidad negra el Tablazo, y "MOISES VEGA PUNDE" comunidad negra la Junta (San Juan del Cesar); "WILDER YESIS MANJARREZ", solicitan su vinculación como terceros coadyuvando las pretensiones del accionante.

Señalan que se ha limitado su participación al no poder postularse para ser electos para dicho cargo por no tener un certificado expedido por el Incoder o en su defecto en trámite. Advierten que el requisito en concreto limita la participación a los consejos comunitarios que tienen título de adjudicación o en trámite, considerando discriminatoria esta exigencia porque les limita el derecho a participar en las decisiones que los afectan, el derecho a elegir y ser elegido en los espacios de toma de decisión para el tema ambiental, que puede afectar a sus poblaciones ancestrales en sus territorios y se les niega a los consejos comunitarios la oportunidad de pronunciarse sobre aquellos proyectos o decisiones que puedan alterar sus formas de vida, e incidir en sus procesos de desarrollo o impactar, de cualquier manera en sus

comunidades negras ante las Juntas Directivas de las Corporaciones Autónomas emanación del derecho a la participación – requisitos (iii) *ratio decidendi* de la sentencia T 576 de 2014 – (iv) a la luz de las anteriores premisas, se analizara el caso concreto

6. TESIS

El despacho sostendrá la tesis que se vulneran los derechos fundamentales de las comunidades negras a la participación y a elegir y ser elegidas, toda vez que si bien CORPOGUAJIRA, al exigir certificación que acredite título colectivo o en trámite de adjudicación de los Consejo Comunitario, está amparada en Derecho Presidencial 1523 de 2003 compilado en el Decreto 1076 de 2015, al aplicar este requisito al caso concreto de la Guajira se evidencia inconstitucional, limitando derechos fundamentales de la comunidad accionante y de las comunidades negras que coadyuvaron la solicitud. Finalmente precisa el juzgado que la *ratio decidendi* expuesta en la sentencia T 576 de 2014, determina unas subreglas que se aplican a

7. ARGUMENTOS DE LA DECISION

7. 1. Derecho a la Igualdad

El derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, consagra múltiples ámbitos de protección en el sentido de reconocer que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, y ordenando al Estado que promueva las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y a personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

De modo que el derecho a la igualdad otorga una garantía a las personas para que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias¹, es decir igualdad para los iguales; siendo válido entonces, un trato diferenciado para aquellos que no se encuentren en similitud objetiva.

7.2. Derecho al Debido Proceso

El Art. 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso como un derecho fundamental susceptible de protección por vía de tutela el

cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y se traduce en conjunto de derechos de las personas para preservar un orden justo que implica un respeto de garantías mínimas defensa y se traduce en asegurar que los poderes públicos legalmente constituidos sujeten sus actos, no solo a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos que es el objeto de la jurisdicción constitucional a que se refiere la tutela.

7.3. Derecho a la participación – elegir y ser elegido

El artículo 40 Constitucional, consagra el derecho a la participación de todos los ciudadanos, en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede, entre otras facultades, elegir y ser elegido, y tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, y otras formas de participación democrática.

La Corte Constitucional en la sentencia T 576 DE 2014, estableció *“que de lo que se trata, respecto de este derecho en relación con los pueblos indígenas y tribales, es que cuenten con la oportunidad de pronunciarse sobre aquellos proyectos o decisiones que puedan alterar sus formas de vida, incidir en su propio proceso de desarrollo o impactar, de cualquier manera, en sus costumbres, tradiciones e instituciones.*

Ahora bien, justamente la elección de representante de las comunidades negras ante la Junta Directiva de las Corporaciones Autónomas es una clara emanación del derecho constitucional de participación ciudadana, en sus aspectos de elegir y ser elegido, y hace parte de una de las formas de participación democrática. Elección que se fundamenta en las siguientes normas constitucionales y legales:

El Artículo transitorio 55 de la Constitución, reconoce el derecho a la propiedad colectiva como un derecho fundamental de las comunidades negras en los siguientes términos:

“Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento

cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y se traduce en conjunto de derechos de las personas para preservar un orden justo que implica un respeto de garantías mínimas defensa y se traduce en asegurar que los poderes públicos legalmente constituidos sujeten sus actos, no solo a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos que es el objeto de la jurisdicción constitucional a que se refiere la tutela.

7.3. Derecho a la participación – elegir y ser elegido

El artículo 40 Constitucional, consagra el derecho a la participación de todos los ciudadanos, en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede, entre otras facultades, elegir y ser elegido, y tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, y otras formas de participación democrática.

La Corte Constitucional en la sentencia T 576 DE 2014, estableció *“que de lo que se trata, respecto de este derecho en relación con los pueblos indígenas y tribales, es que cuenten con la oportunidad de pronunciarse sobre aquellos proyectos o decisiones que puedan alterar sus formas de vida, incidir en su propio proceso de desarrollo o impactar, de cualquier manera, en sus costumbres, tradiciones e instituciones.*

Ahora bien, justamente la elección de representante de las comunidades negras ante la Junta Directiva de las Corporaciones Autónomas es una clara emanación del derecho constitucional de participación ciudadana, en sus aspectos de elegir y ser elegido, y hace parte de una de las formas de participación democrática. Elección que se fundamenta en las siguientes normas constitucionales y legales:

El Artículo transitorio 55 de la Constitución, reconoce el derecho a la propiedad colectiva como un derecho fundamental de las comunidades negras en los siguientes términos:

“Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento

de su desarrollo económico y social.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.

PARÁGRAFO 2o. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley.

En desarrollo de la norma constitucional se expidió la **Ley 70 de 1993**, cuyo objeto, es reconocer el derecho a la propiedad colectiva a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y también se aplicará a zonas baldías, rurales y ribereñas de otras zonas del país que han venido siendo ocupadas por comunidades negras. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

El **artículo 56** de la mencionada ley, reglamentado por el Decreto Nacional 1523 de 2003 estableció, que Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

Para garantizar el derecho fundamental reconocido en el artículo 55 transitorio de la Constitución, se expidió el **Decreto Presidencial 1745 de 1995**, por el cual se reglamenta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras", el cual consagra (artículo 3) que el Consejo Comunitario es una persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad, estipulando en este decreto el procedimiento a seguir para obtener la titulación de las tierras ocupadas por las comunidades negras en la zona rural, pues se consideran inadjudicables los terrenos urbanos de los municipios.

Posteriormente el Gobierno Nacional expidió el **Decreto Nacional 1523 de 2003**, que reglamenta el artículo 56 de la Ley 70 de 1993 y consagra en su artículo 2 lo siguiente:

Artículo 2º. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos:

- a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal;
- b) **Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;**
- c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.

7.4 ratio decidendi de la sentencia T 576 de 2014

La Corte Constitucional en la sentencia T 576 DE 2014 señala que la función del juez constitucional consiste en establecer y aplicar unos criterios para resolver las disputas sobre la adjudicación de los derechos vinculados a la identidad étnica, no en definir dicha identidad, estableciendo las siguientes subreglas generales, que contrario a lo expresado por CORPOGUAJIRA, no se aplican exclusivamente a discusiones sobre consulta previa, pues fue voluntad de la Corte Constitucional, establecer unos criterios generales de interpretación aplicables por los jueces a todos los procesos en que se discutan derechos relacionados con la identidad étnica:

i) Los derechos étnicos, como la consulta previa, no se predicán de individuos, sino de sujetos colectivos

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que las comunidades étnicas, en tanto grupos humanos diversos, son titulares de derechos fundamentales -como los derechos a la subsistencia, a la propiedad colectiva de la tierra, a la integridad cultural y a la consulta previa, que son esencialmente distintos a aquellos que se predicán de sus integrantes individualmente considerados.

ii) La presencia de determinados factores raciales, espaciales o formales es un factor relevante, pero no esencial a la existencia de una comunidad étnica.

Las comunidades, y no los individuos, son los titulares de los derechos colectivos consagrados en la Carta Política y en el bloque de constitucionalidad. Para determinar cuando un determinado grupo puede ser considerado titular de derechos étnicos se han de tener en cuenta los criterios objetivos y subjetivos que menciona el Convenio 169.

- Desde el punto de vista objetivo la nota característica de la condición de pueblo tribal, está dada por un modo de vida específico que contrasta con el de la sociedad mayoritaria (lengua, religión, cultura)
- criterio subjetivo de autoidentificación, siempre que esté respaldado con pruebas históricas y antropológicas sobre la relación de la respectiva comunidad con su territorio, sobre sus actividades tradicionales, modos de producción y, en general, sobre la presencia de aquellos factores que indican que tales colectividades mantienen formas de vida distintas.
- Factor racial: relevancia del criterio racial como factor indicativo de diversidad étnica, pero descarta que pueda valorarse como un criterio determinante o excluyente de la misma
- El territorio: la relación del grupo que se autoproclama como comunidad étnica con un territorio específico es sumamente relevante para determinar su identidad diferenciada, pero la ausencia de este factor no puede conducir a denegar, deliberadamente, que el grupo respectivo sea titular de derechos étnicos.
- *El reconocimiento formal por parte del Estado:* No es posible, en ese orden de ideas, pretender que un registro, un censo o un título confirmen de forma suficiente la identidad étnica de un grupo específico ni, mucho menos, que su ausencia denote que dicha colectividad no existe como grupo étnico.

iii) La definición de comunidad negra de la Ley 70 de 1993.

Apoyada en ese régimen jurídico supranacional, la Corte ha optado por vincular la condición de comunidad negra a la acreditación de los criterios objetivos y subjetivo contemplados en la declaración de cobertura del Convenio, en lugar de restringirla a las exigencias contempladas en el artículo 55 transitorio y en la Ley 70.

La definición incorporada por la Ley 70 de 1993 ha sido sumamente valiosa para efectos de los procesos de titulación colectiva y, ciertamente, debe ser valorada al momento de determinar, en un caso concreto, si cierto grupo está legitimado para invocar el amparo de sus derechos étnicos. Lo que no puede ocurrir, como insistentemente se ha expuesto, es que se descarte el carácter diverso de quienes no cumplan con alguno de los parámetros incorporados por la definición legal.

- i) no existe una definición estricta acerca de lo que puede entenderse por pueblo tribal o indígena, sino unos criterios descriptivos de los sujetos a los que ese marco internacional de protección pretende proteger; ii) el criterio

más relevante para determinar si un pueblo o individuo puede ser considerado indígena o tribal es el de autoidentificación. La identidad diversa, en consecuencia, es aquella que definen las propias comunidades en ejercicio de su derecho de autodeterminación; iii) como colectividades humanas, los pueblos indígenas y tribales tienen una trayectoria social propia que se adapta a los cambios históricos y se reconfigura continuamente; iv) finalmente, es necesario considerar que los derechos concedidos a las colectividades étnicamente diferenciadas no se pierden por el hecho de que algunos de sus integrantes vivan con menos apego que otros a sus tradiciones culturales.

Son esas pautas las que deben valorar las autoridades administrativas y judiciales cuando tengan que adoptar decisiones que impacten sobre los derechos colectivos de aquellos grupos que se proclamen étnicamente diversos.

5. Estudio del Caso Concreto.

La tutela discute que el derecho a participar en la elección del representante de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de Corpoguaajira se haya supeditado a la acreditación de un título de dominio, o en trámite pues tal decisión, a juicio del accionante, limita la participación de las comunidades negras de la Guajira, discriminando a las organizaciones que no han adelantado ese trámite.

Por su parte CORPOGUAJIRA se opone a la prosperidad de la acción argumentando que su actuar se ha amparado en la ley, específicamente Decreto 1076 de 2015. Que la sentencia T. 576 de 2014, se aplica a casos diferentes, específicamente a la consulta previa.

Luego del recuento normativo, se puede apreciar, que el derecho a la propiedad colectiva es su derecho fundamental de las comunidades negras. Desde la expedición de la Constitución se hizo necesario instar al legislador para expedir normas de discriminación positiva a favor de éstas comunidades ya que tenían grandes dificultades en el reconocimiento y protección estatal de sus territorios, identidad cultural y participación.

Luego entonces, todas las normas expedidas y que se citaron en precedencia tienen como propósito hacer efectivos esos derechos constitucionales de las comunidades negras, y deben ser interpretadas de manera que se garantice el fin constitucional que justificó su expedición.

Tratándose de las Leyes 70 de 1993 y Decretos Nacionales 1745 de 1995, se esperaba que luego de 20 años de vigencia, se hubiese logrado su fin, es decir, que las comunidades negras estén organizadas, reconocidas y sus territorios adjudicados. Bajo el anterior propósito, la exigencia dispuesta en el Decreto Presidencial 1523 de 2003 y compilada por el Ministerio del Medio ambiente en el Decreto 1076 de 2015, que fue aplicada por

CORPOGUAJIRA en el sentido de requerir certificación de adjudicación de territorio o en trámite resulta en principio, ajustada a la ley, y no se evidencia caprichosa, ni menos desproporcionada.

Sin embargo, al realizar un análisis conjunto, tanto de la normatividad aplicable al caso concreto, como de la realidad de los procesos de adjudicación de los territorios colectivos, la conclusión es diferente. Veamos la justificación:

INCODER certificó al Juzgado que en la GUAJIRA, ninguna comunidad negra tiene territorio adjudicado. Respecto del trámite, INCODER envió al juzgado una base de datos de las solicitudes recibidas en las cuales se verificó que 8 consejos comunitarios se encuentran listos para visitas técnicas, y 10 se encuentran pendientes por algún requisito. Respecto del Consejo Comunitario accionante ILARIO GOMEZ BARROS INCODER certificó presentó solicitud pero aún no ha sido estudiada, razón por la cual no se incluye en la base de datos.

Por otro lado, el mismo INCODER, a través del Director Técnico de Asuntos Étnicos certificó ante CORPOGUAJIRA, que de las solicitudes presentadas, solo 3 se consideran válidamente en trámite.

Por su parte, CORPOGUAJIRA, al dar respuesta al cuestionario solicitado por el Juzgado manifestó que de los Consejos Comunitarios que presentaron intención de participar en la convocatoria, solo 3 cumplen los requisitos del Decreto 1076 de 2015; luego solo esos tres Consejos tuvieron participación con voz y voto en el proceso de elección de Representante, eligiendo a las candidatas que previamente habían postulado.

Dentro del estudio que alcanzó realizar el despacho, en el límite temporal de la acción de tutela, se logró identificar que en el Municipio de Riohacha se encuentran registrados 23 consejos comunitarios; que al proceso de tutela, se hicieron parte consejos comunitarios de San Juan del Cesar (4), de Dibulla (1); que en la base de datos de INCODER, se reportan adicionalmente 3 consejos comunitarios de Dibulla, 1 de Fonseca, 1 de Maicao; que adicionalmente en la convocatoria participaron otros 4 consejos comunitarios de San Juan del Cesar, es decir, sin contar con un dato que corresponda a la totalidad de los Consejos Comunitarios de la Guajira, al menos en el trámite de la tutela se logró reconocer a 36 Consejos Comunitarios.

CONCLUSIONES

- La restricción establecida en el Decreto Presidencial 1523 de 2003 y compilada por el Ministerio del Medio ambiente en el Decreto 1076 de 2015, que supone limitar los derechos de participación de las comunidades negras en el Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA a la exhibición de título de adjudicación deben ser interpretada a la luz de la Constitución y de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas - comunidades negras.

- Al aplicar el Decreto al caso concreto de la Guajira, solamente 3 consejos comunitarios cumplen los requisitos para poder participar el proceso elección de representante de la Junta Directiva de la Guajira, muy a pesar, al menos en el trámite de la tutela se reconocieron 36 Consejos Comunitarios, exigencia entonces, que muestra desproporcionada, restringiendo derechos fundamentales de las comunidades negras organizadas como Consejos Comunitarios.
- Teniendo en cuenta la realidad del Departamento de la Guajira, se evidencia que CORPOGUAJIRA al exigir el requisito contemplado en el Decreto 1523 de 2003 compilado por el Ministerio del Medio Ambiente en el Decreto 1076 de 2015, se vulneran derechos fundamentales de las Comunidades Negras a la participación, a elegir y ser elegidos y a la igualdad, porque a pesar de estar organizadas como Consejos Comunitarios², no pueden participar en el proceso de elección por no tener título de adjudicación, ni en trámite, permitiendo la participación solamente a 3 de ellos.
- Que la protección se hace extensiva, al Consejo Comunitario accionante, a los Consejos Comunitarios que coadyuvaron al demandante alegando el mismo hecho vulnerador, y lógicamente beneficia a todos los Consejos Comunitarios, que sin haberse hecho parte en el trámite se encuentren en las mismas condiciones, habida cuenta que el amparo implica forzosamente repetir la elección, desde la etapa de convocatoria.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha, en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la participación, a elegir y ser elegido, a la igualdad del Consejo Comunitario ILARIO GOMEZ BARROS, de la Comunidad Negra los Moreneros representado por EVARISTO DE ARMA CORDOBA, y de los coadyuvantes Consejo Comunitario de SANTA RITA DE LA SIERRA, "CARMELO BANQUET" comunidad negra los Haticos; "NUMA BENJUMEA EL CACHACO NEGRO" comunidad negra el Totumo, "GUSTAVO CASTRO" comunidad negra el Tablazo, y "MOISES VEGA PUNDE" comunidad negra la Junta (San Juan del Cesar), vulnerados por CORPOGUAJIRA representada por el doctor LUIS MANUEL MEDINA TORO.

² Forma de organización que supone asentamiento actual o ancestral en territorios rurales.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el requisito b. de la Convocatoria realizada por los CORPOGUAJIRA a la Consejos Comunitarios de las Comunidades negras a elegir representante ante la Junta Directiva de Corpoguajira, esto es, exigir para la participación con voz y voto, certificación del INCODER de la existencia de territorio colectivo adjudicado, o en trámite de adjudicación. Como consecuencia de de lo anterior, declarar la nulidad todo lo actuado por CORPOGUAJIRA, con posterioridad a la convocatoria, incluida la elección de representante que se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2015.


TERCERO: ORDENAR al Doctor LUIS MANUEL MEDINA TORO, Director de Corpoguajira, para que en el término de 48 horas contados a a partir de la notificación de la presente acción inicie los trámites, para que en un término no mayor a 5 días realice una nueva convocatoria a la Consejos Comunitarios de las Comunidades negras a elegir representante ante la Junta Directiva de Corpoguajira, sin exigir para la participación con voz y voto, certificación del INCODER de la existencia de territorio colectivo adjudicado, o en trámite de adjudicación.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes e intervinientes, por el medio más expedito.

QUINTO: ORDENAR a Corpoguajira, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, publique el contenido de esta sentencia en su página WEB.

SEXTO: En el evento de que esta decisión no sea impugnada, remítase a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


GLORIA PATRICIA RUANO BOLAÑOS
La Juez

CONVOCATORIA PUBLICA

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR" invita a las **comunidades negras** domiciliadas en el área de jurisdicción de CORPOCESAR, que lo es todo el territorio del departamento del César a participar en la elección de un (1) representante miembro principal y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR" para el periodo comprendido del 1 de enero del 2.024 al día 31 de diciembre del año 2.027.

REQUISITOS:

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección de sus representantes ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional del César "CORPOCESAR" con anterioridad mínima de 15 días a la fecha establecida para la reunión de elección los siguientes documentos:

- a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.
- b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.
- c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.

Nota: El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER fue suprimido mediante Decreto 2365 de 2015, en esta norma se advierte que las funciones serán asumidas por la **Agencia Nacional de Tierras**.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:

La anterior documentación deberá ser entregada de manera física y foliada ante la Secretaría General de CORPOCESAR, en los días hábiles comprendidos entre el 2 agosto de 2.023 hasta el 25 de agosto de 2.023, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., con la debida suscripción y/o firma de la planilla del cuadro de inscripciones, suministrada por la Secretaría General en el cual consta la hora, fecha, Consejo Comunitario, nombre del postulado, numero de folios e identificación de quien radica la documentación. La Secretaría General está ubicada en el segundo piso de la sede de Corpocesar, Km 2 Vía a la Paz Lote 1 U.I.C casa Campo, frente a la Feria Ganadera.

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

El Comité constituido para la revisión y evaluación de los documentos presentados por las comunidades negras, elaborará un informe de verificación de requisitos, que será publicado en las sedes de CORPOCESAR y en la página web de esta entidad el día 8 de septiembre de 2.023.

FECHA DE ELECCIÓN:

La elección de un representante miembro principal y su suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directo de CORPOCESAR se celebrará el día **15 de septiembre de 2.023 a las 8:30 a.m.** en el auditorio de CORPOCESAR ubicada en Km 2 Vía a la Paz Lote 1 U.I.C casa Campo, frente a la Feria Ganadera.

Solo tendrán voz y voto en la reunión, los representantes legales de las comunidades negras que hayan cumplido los requisitos consignados en la presente convocatoria pública.

Cualquier información adicional al respecto será atendida con el mayor gusto en la Secretaría General de la entidad en los teléfonos 5748960 Extensión 104.



JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO
Director General

www.corpocesar.gov.co

Km 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C Casa e' Campo. Frente a la feria ganadera
Valledupar-Cesar

Teléfonos +57- 605 5748960 - 018000915306



Código: F - SGC - 007
Versión: 5 / 02-03-2016

25
Folio

CERTIFICACION

LA SUSCRITA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

CERTIFICA

Que la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades negras, raizales y palanqueras **CONSEJO COMUNITARIO "LOS NEGRITOS"**, de la Vereda Manizales Bajo, del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, fue registrada el 29 de octubre de 2019 en el folio 27 del libro de Registro de Asociaciones, Organizaciones, Consejos Comunitarios y Cooperativas del Municipio de la Jagua de Ibirico, que reposa en este Despacho.


La cual se encuentra conformada de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	N° DE IDENTIFICACION
Presidente	Jaime Luis Cuadro Vásquez	12.524.475
Vicepresidente	Juana Francisca Vásquez M	26.737.888
Secretario	Astrid Carolina Cuadro Vásquez	36.572.079
Tesorero	Ketty Mercedes	1.093.741.746
Fiscal	Jaime de Jesús Cuadro Pallares	12.520.190
Vocal 1	Moisés Xavier Paternina Vásquez	1.007.027.860
Vocal 2	Alicia Vásquez Mendoza	36.570.021

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado en el Municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, a los 16 días del mes de diciembre de 2019


YARELY LEONOR RANGEL RESTREPO
Alcaldeza Municipal

Proyectó:  **WANDIS CAAMANO RODRIGUEZ**
Secretaria Ejecutiva Gobierno

Revisó:  **KEVIN CLARO MARTINEZ**
Jefe Oficina Jurídica

DESARROLLO SOSTENIBLE CON MÁS OPORTUNIDADES
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5768375 - 5769024 - Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a - 23





**LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
ORINOQUIA – CORPORINOQUIA,**

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, Decreto 1523 de 2003, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y demás normas concordantes.

CONVOCA:

A los representantes de los diferentes **CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS** asentadas en el área de jurisdicción de CORPORINOQUIA, a participar en la Elección de los Representantes (principal y suplente) de las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - CORPORINOQUIA, para el periodo institucional **2024 - 2027**.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN:

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015 **"Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"**, los Consejos Comunitarios asentados en el territorio de jurisdicción de CORPORINOQUIA, que aspiren a participar en la elección de sus representantes al Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - CORPORINOQUIA, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos:

- a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal;
- b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER-, hoy Agencia Nacional de Tierras –ANT-, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;
- c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.

La documentación deberá ser presentada de forma física, desde el día **02 al 25 DE AGOSTO DE 2023**, de Lunes a Viernes en horario de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 2:00 P.M a 5:00 P.M, en las instalaciones de Corporinoquia, en la Carrera 23 No. 18-31 sede principal Yopal – Casanare o en las Subsedes ubicadas en la Carrera 25 N°15-69 de Arauca – Arauca; en la Calle 13A N°6-82 de La Primavera – Vichada y en la Calle 5 N° 5A-07 de la Unidad Ambiental de Cáqueza – Cundinamarca.

NO se recibirán inscripciones por correo electrónico, sin excepción.



La Corporación revisará los documentos presentados por los Consejos Comunitarios de comunidades negras, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, compilatorio del artículo 2° del Decreto 1523 de 2003. Realizada la revisión, la Corporación elaborará el respectivo informe, el cual será presentado el día de la reunión de la elección.

FECHA DE ELECCIÓN:

La elección de los Representantes (Principal y suplente) de las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA, se celebrará el día **VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 a las 2:00 P.M.**, en el Auditorio de CORPORINOQUIA, de la sede principal ubicada en la Carrera 23 No. 18 – 31 Yopal – Casanare.

En la página web de la Corporación www.corporinoquia.gov.co y en las carteleras de la sede principal y subse-des, podrá consultarse la totalidad del cronograma y documentos relacionados con la presente elección.

Yopal, 2 de Agosto de 2023,

DORIS BERNAL CÁRDENAS
Directora General

Proyectó: ^{KTF} Lida Katherine Mora Fúquene / CPS 120-12-13-23-446SG

Revisó: Eliana Muñoz Paredes / Secretaria General



Inicio

>CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTE Y SUPLENTE DE LAS COMUNIDADES NEGRAS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE CODECHOCÓ

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTE Y SUPLENTE DE LAS COMUNIDADES NEGRAS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE CODECHOCÓ



CONVOCATORIA

Elección de Representante y Suplente de las Comunidades Negras

El Director General de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó **CODECHOCÓ**, convoca a todas las Comunidades Negras a participar en la **Elección del Representante y suplente, ante el Consejo Directivo de la Corporación**, para el periodo comprendido entre el **2024 - 2027**.



Este sitio web usa cookies propias y de terceros para analizar el tráfico, mejorar nuestros servicio y conocer el comportamiento del usuario [política de privacidad](#).

ENTENDIDO

Se permite invitar a todos los **CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS**, asentados en la jurisdicción territorial de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO, para que el día **08 de septiembre de 2023, a las 9:00 a.m.**, se hagan presente en el Salón Social del Hotel Samanti, ubicado en el casco urbano del Municipio de Nuevo Belén de Bajirá, con el propósito de llevar a cabo elección de Representante Principal y Suplente ante el Consejo Directivo, para el periodo institucional 2024-2027.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.2, del decreto 1076 de 2015, Los Consejos Comunitarios asentados en el territorio de jurisdicción de CODECHOCO, que aspiren a participar en la elección de sus representantes al Consejo directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -CODECHOCO, con anterioridad mínima de quince (15) días hábiles a la fecha establecida para la reunión de elección, es decir, desde el 12 de julio hasta el 17 de agosto de 2023, los siguientes documentos:

Certificación expedida por el Alcalde Municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal;

Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;

Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.



RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. Los documentos se presentarán de acuerdo con la normatividad aplicable en sobre cerrado, en las instalaciones de la sede principal de la Corporación ubicada en la carrera 1ª N° 22 -96 de la ciudad de Quibdó, en la oficina de la Secretaría General, en horarios de oficina (8:00 AM a 11:00 M y 2:00 PM a 5:00 PM), con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Realizada la revisión, la Corporación elaborará el respectivo informe, el cual será presentado el día de elección.

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ

Director General CODECHOCO

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para analizar el tráfico, mejorar nuestro servicio y conocer el comportamiento del usuario [política de privacidad](#).

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Sede Principal

Dirección: Cra 1 N° 22 – 96, Quibdó, Chocó, Colombia

Código postal: 270002

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p.m.

Teléfono conmutador: 604-6711510

Línea Gratuita: 01 8000 963626

Línea anticorrupción: 604-6711510 ext 1017 y 1004

Correo Institucional: contacto@codechoco.gov.co

Correo de notificaciones judiciales: defensajudicial@codechoco.gov.co



Regional Atrato

Dirección: Carrera 1 # 22 – 96, Quibdó – Choco – Colombia

Coordinador: Luis Armando Cuesta

Correo: lacuesta@codechoco.gov.co

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p.m.

Regional San Juan

Dirección: Carrera 9 # 32 – 99 B/Cubis, Istmina – Choco – Colombia

Teléfono: 60(4) 6703116

Coordinador: Mario Alberto Lozano Gutierrez

Correo: malozano@codechoco.gov.co

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p.m.

Regional Costa Pacífica

Dirección: B/ La Floresta, vía al aeropuerto – Bahía Solano – Chocó – Colombia

Coordinador: Robinson Mosquera Prado

Correo: rmosquera@codechoco.gov.co

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p.m.

Regional

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para analizar el tráfico, mejorar nuestros servicio y conocer el comportamiento del usuario [política de privacidad](#).



Dirección:B/El Centro, **Riosucio** - Choco - Colombia

Coordinador: Germán Córdoba Machado

Correo: gcordova@codechoco.gov.co

Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p.m.



@codechococar



@codechococar



@CodechocoPrensa

[Políticas](#) [Mapa del sitio](#)



GOV.CO



Este sitio web usa cookies propias y de terceros para analizar el tráfico, mejorar nuestros servicio y conocer el comportamiento del usuario [política de privacidad](#).



**LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
ORINOQUIA – CORPORINOQUIA,**

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, Decreto 1523 de 2003, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y demás normas concordantes.

CONVOCA:

A los representantes de los diferentes **CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS** asentadas en el área de jurisdicción de CORPORINOQUIA, a participar en la Elección de los Representantes (principal y suplente) de las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - CORPORINOQUIA, para el periodo institucional **2024 - 2027**.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN:

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015 "**Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible**", los Consejos Comunitarios asentados en el territorio de jurisdicción de CORPORINOQUIA, que aspiren a participar en la elección de sus representantes al Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - CORPORINOQUIA, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos:

- a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal;
- b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER-, hoy Agencia Nacional de Tierras –ANT-, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;
- c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.

La documentación deberá ser presentada de forma física, desde el día **02 al 25 DE AGOSTO DE 2023**, de Lunes a Viernes en horario de 8:00 A.M. a 12:00 M y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M, en las instalaciones de Corporinoquia, en la Carrera 23 No. 18-31 sede principal Yopal – Casanare o en las Subsedes ubicadas en la Carrera 25 N°15-69 de Arauca – Arauca; en la Calle 13A N°6-82 de La Primavera – Vichada y en la Calle 5 N° 5A-07 de la Unidad Ambiental de Cáqueza – Cundinamarca.

NO se recibirán inscripciones por correo electrónico, sin excepción.



La Corporación revisará los documentos presentados por los Consejos Comunitarios de comunidades negras, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, compilatorio del artículo 2° del Decreto 1523 de 2003. Realizada la revisión, la Corporación elaborará el respectivo informe, el cual será presentado el día de la reunión de la elección.

FECHA DE ELECCIÓN:

La elección de los Representantes (Principal y suplente) de las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de CORPORINOQUIA, se celebrará el día **VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 a las 2:00 P.M.**, en el Auditorio de CORPORINOQUIA, de la sede principal ubicada en la Carrera 23 No. 18 – 31 Yopal – Casanare.

En la página web de la Corporación www.corporinoquia.gov.co y en las carteleras de la sede principal y subse-des, podrá consultarse la totalidad del cronograma y documentos relacionados con la presente elección.

Yopal, 2 de Agosto de 2023,

DORIS BERNAL CÁRDENAS
Directora General

Proyectó: ^{KTF} Lida Katherine Mora Fúquene / CPS 120-12-13-23-446SG

Revisó: Eliana Muñoz Paredes / Secretaria General



**EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA**

CONVOCA

A los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras del área de jurisdicción de CORPOGUAJIRA, a la reunión que se llevará a cabo día 15 de septiembre de 2023, de 8:00 a.m. a 12:00 M, en el auditorio de la Corporación ubicado en la Carrera 7 No. 12-15, municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, para elegir un (1) representante principal y un (1) suplente ante el Consejo Directivo de CORPOGUAJIRA, para el periodo comprendido entre el 1° de Enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027

Los candidatos deberán entregar en la Ventanilla Única de la Corporación, con fecha límite el 25 de Agosto de 2023, hasta las 12:00 M. los siguientes documentos de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.8.5.1.2. Del Decreto 1076 de 2015:

- a) Certificación expedida por el Alcalde Municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.
- b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER" hoy Agencia Nacional de Tierras, sobre la existencia de Territorio Colectivo legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.
- c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.

La Corporación revisará los documentos presentados por las comunidades negras con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Realizada la revisión, la Corporación elaborará el respectivo informe, el cual será presentado el día de la reunión de elección.

Únicamente las comunidades negras que hayan cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, tendrán voz y voto en la reunión de elección.

ORIGINAL FIRMADO
SAMUEL SANTANDER LANA O ROBLES
Director General

Proyectó: E. Ibarra
Revisó: A. Gnecco
Aprobó: M. Echeverry

[Ayuda](#)[Correo Institucional](#)

CONVOCATORIA ELECCIÓN COMUNIDADES NEGRAS 2024-2027

08 August 2023 Last Updated: 14 August 2023

Calificación ★ ★ ★ ★ ★ (1)

Compartir en :



CONVOCATORIA PÚBLICA

POR MEDIO DE LA CUAL SE INVITA A LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE SU REPRESENTANTE PRINCIPAL Y SUPLENTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único

reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, invita públicamente a los Consejos Comunitarios que tengan asiento en la jurisdicción del Departamento del Magdalena, para que

participen en el proceso elección del representante principal y suplente de las Comunidades Negras ante el Consejo Directivo de esta entidad.

Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante principal y suplente ante el Consejo Directivo, deberán allegar a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, ubicada en la Avenida del Libertador No. 32-201 Barrio Tayrona, con una anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, es decir hasta el 31 de agosto de 2023, en el horario comprendido entre las 8:00am y 12:00pm y 2:00pm y 6:00pm, los documentos que contengan los requisitos que a continuación se exigen:

REQUISITOS HABILITANTES:

1. Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.
2. Certificación expedida por la Agencia Nacional de Tierras o la entidad que haga sus veces, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a la respectiva comunidad negra.
3. Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.

La elección del representante principal y el suplente de los Consejos Comunitarios ante el Consejo Directivo, se llevará a cabo el día 21 de septiembre de 2023 a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Avenida del Libertador No. 32-201 Barrio Tayrona.

La elección se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015.

Mayores informes en la Secretaría General de la Corporación, ubicada en la Avenida El Libertador No. 32-201, de la ciudad de Santa Marta, Tel. 4380200 Ext. 169 – 170.

CARLOS FRANCISCO DÍAZ GRANADOS MARTÍNEZ

Director General





Corporación Autónoma Regional del Magdalena

Av. del Libertador # 32-201.

Santa Marta D.T.C.H, Magdalena, Colombia

Atención Presencial: 8:00 am a 12 m y 2:00 pm a 6:00 pm

Canales Virtuales: 8:00 am a 12 m y 2:00 pm a 6:00 pm

[Mapa del sitio](#), [HTML](#) - [XML](#)

[Política de privacidad y condiciones de uso](#)

[Política de Tratamiento de Datos Personales](#)

Contacto

+57 6054380200 / +57 6054380300

contactenos@corpamag.gov.co

Línea Anticorrupción: soytransparente@corpamag.gov.co

[Ayuda uso del Chat](#)

Buzón de Notificaciones Judiciales:

correojudicial@corpamag.gov.co



Facebook

Instagram

Twitter

Tik Tok

Youtube

© 2023 CORPAMAG. Todos los derechos reservados.



República de Colombia



Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril – Cesar

Radicación.	200454089001-2023-00046-00
Accionante:	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO representante legal del Consejo Comunitario Caño Candela
Accionada:	Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR y el MUNICIPIO DE BECERRIL
Derecho f/tal reclamado	Debido proceso, entre otros

Becerril, Cesar, martes veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

1. OBJETO

Valorada cada una de los elementos allegados en el trámite Constitucional procede el Despacho a dictar la sentencia que en derecho corresponda en la acción de tutela incoada por el ciudadano HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO quien actúa como representante legal del Consejo Comunitario Caño Candela contra la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR y el MUNICIPIO DE BECERRIL, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al acceso a la administración y el debido proceso.

2. HECHOS

- "1. El día 02 de Agosto del año 2023, se abrió convocatoria pública, dirigida a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras localizados en el departamento del Cesar, para participar en la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2023 - 2027.
2. Dicha convocatoria hace exigible aportar todos los requisitos y en especial el siguiente: —Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT según Decretos 2363 y 2365 de 2015), sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.
3. Mediante Fallo de Acción de Tutela de fecha 24 de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar, bajo radicado: 20001-40-71-003-2019-00259-00, decidió tutelar los derechos fundamentales a la —IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA deprecados por MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ y en consecuencia ordenó al entonces Director de CORPOCESAR, que dentro del término de 48 horas hábiles siguientes a la notificación del fallo, proceda a decretar la nulidad de toda actuación al interior del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA, para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023 y se realice una nueva garantizando la participación de los Consejos Comunitarios que cumplan con los requisitos.

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2023-00242-00
Accionante	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO
Accionado	CORPOCESAR
Decisión	SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.

En cuya decisión se estableció que con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha establecida para la reunión de elección, se deben radicar los siguientes documentos: a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal. b) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la Comunidad postulado como candidato.

Nota: Se omite el requisito establecido en el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2.015: —b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción. Lo anterior en cumplimiento del fallo de Tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal para la Adolescencia con funciones de Control de Garantías de Valledupar de fecha dos (2) de diciembre de 2.019.

4. Esto en cuanto a los argumentos tenidos en cuanto por el fallo de tutela que garantizo nuestra participación en la referida connotaría: Reitero que debido a lo anterior manifestado y la garantía de derechos fundamentales antes tutelados, Ha expuesto la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T-576/14 Referencia: expediente T- 3482903 Acción de tutela promovida por Moisés Pérez Casseres contra el Ministerio del Interior. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, lo siguiente:—5.48. De conformidad con lo expuesto en las líneas anteriores, la Sala pudo establecer que la participación de las comunidades negras en la elección de los integrantes del espacio nacional que las representarían para efectos de la consulta previa de las medidas de amplio alcance que pudieran afectarlas no podía supeditarse a que contaran con un título colectivo adjudicado por el Incoder ni a ningún criterio que limitara su derecho a autodeterminarse y a reivindicar, en ejercicio de su identidad diversa, su status como titulares de derechos étnicos.

5. En esta misma línea, mediante Sentencia, El Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018) bajo radicación número: 11001-03-28-000-2017-00031-00 y acumulado: 11001-03- 28-000-2017-00038-001100, dejo claro que: — (...) NO SE PUEDE EXIGIR UN TÍTULO COLECTIVO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.

6. Por otro lado, la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T681/16 Referencia: expediente: T-5.723.146 Acción de tutela interpuesta por María Dolores Lenis Hernández contra la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, ha explicado que: —5.1. La excepción de inconstitucionalidad se erige a partir del artículo 4º de la Constitución Política que establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se emplearan las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.

7. Así lo interpretó la Corte Constitucional en la Sentencia T-576 De 2014, Corporación que analizó la exigencia que hizo el Ministerio del Interior a las comunidades afrodescendientes, consistente en poseer un título colectivo de adjudicación para participar en la elección de los integrantes del Espacio Nacional de Delegados, en cuanto sostuvo que —PRETENDER QUE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEPENDA DE UN TÍTULO FORMAL QUE, ADEMÁS, CERTIFICA UNA RELACIÓN CON LA TIERRA, RESULTA A TODAS LUCES IRRAZONABLE, sobre todo, si se tiene en cuenta la manera en que las comunidades negras del país han sido despojadas de sus territorios y lo complejo que, en sí mismo, resulta el trámite de titulación colectiva. En el mismo sentido cito la primera edición del año 2004, del libro la diversidad étnica en Colombia de la procuraduría general de la nación expresa — (...) tramite de solicitud de titulación colectiva de las tierras de las comunidad negra, una vez que la comunidades interesadas presentan la solicitud de titulación, comienza la competencia procesal del INCORA, entidad que por mandato del artículo 11 de la ley 70 de 1993, tiene la responsabilidad institucional de adelantar el

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2023-00242-00
Accionante	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO
Accionado	CORPOCESAR
Decisión	SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.

trámite de las solicitudes de titulación colectiva de las tierras de las comunidades negras.(...).

8. De igual manera me permito referirme a una decisión judicial donde precisamente es dirigida contra la Empresa Prodeco y otros, en donde se tramita esta Acción de Tutela, sin mayores requisitos que el reconocimiento local emitido por la Alcaldía Municipal, debido que al igual que nosotros en consejo comunitario tutelante no cuenta con el reconocimiento o certificación del Ministerio del Interior, no obstante puede ejercer sus derechos en garantía de las personas afrocolombianos que agrupa, esto en consonancia con el marco jurídico antes referido, tan como se refleja en la decisión emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR SALA CIVIL – FAMILIA –LABORAL PROCESO: ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA RADICADO: 20-178- 31-05-001-2020-00146-01 ACCIONANTE: CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MENDOZA –COCONEBOL DEL CORREGIMIENTO DE BOQUERÓN, LA JAGUA DE IBIRÍCO – CESAR ACCIONADO: LA AGENCIA NACIONAL DE CONSULTA PREVIA, LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE COMUNIDADES NEGRAS Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ÓSCAR MARINO HOYOS GONZÁLEZ Valledupar, nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2.021). (...)."

3. PRETENSIONES

"PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales, de los consejos comunitarios del departamento del Cesar, al debido proceso, participación, a la igualdad, a elegir y ser elegido, a la Autodeterminación de la Etnia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenquera, a la representación que tenemos dentro del consejo directivo de CORPOCESAR.

SEGUNDO: Solicitamos se ordene a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR" JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO, dejar sin efecto convocatoria publicada el día 2 de agosto del 2023, que tiene como fin, la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2024 – 2027, eliminando el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076/15, que a su tenor dice —Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.

TERCERO: se ordene a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR" JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO, se genere una nueva convocatoria donde se incluyan todos los consejos comunitarios con voz y voto que tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en trámite o adjudicada.

CUARTO: se ordene al director de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE EL CESAR - JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO, la eliminación de la etapa y en su defecto al comité de revisión y evaluación.

QUINTO: Se ordene al MUNICIPIO DE BECERRIL – CESAR, REPRESENTADO POR RAUL MACHADO LUNA, se generen las acciones pertinentes para Garantizar la Participación en estos espacios de partición, en especial en este Municipio que tiene tantos impactos ambientales."

4. PRUEBAS

- Copia de la convocatoria pública.
- Copia de auto de fecha 11/03/2021 expedido por la Alcaldía del Municipio de becerril donde se reconoce e inscribe la Junta Directiva del Consejo Comunitarios de Comunidades Negras

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2023-00242-00
Accionante	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO
Accionado	CORPOCESAR
Decisión	SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.

- Copia del fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha el 24/09/2015
- Copia del fallo de tutela emitido por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar el 24/009/2019

5. ACTUACIONES PROCESALES

La acción de tutela fue radicada en el correo institucional del Juzgado de acuerdo a los lineamientos trazados por el CSJ y el Decreto 806 de 2020, así las cosas, pasa al Despacho con nota secretarial, donde la suscrita se decide por medio de auto de fecha lunes siete (7) de agosto de dos mil veintitrés (2023) AVOCAR conocimiento, en dicha decisión ordena la notificación de las partes para que ellas se pronuncien sobre los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela en el término perentorio de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación.

6. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA

6.1. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR: hace uso al derecho a la réplica por medio de apoderado quien indica que existe falta de legitimidad en la causa por activa del accionante, atendiendo que *"la parte convocante no cuenta con la completitud de los requisitos formales para constituirse como parte del Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base del Ministerio del Interior"*, lo anterior basado en la *"Respuesta a derecho de petición proferida por el Ministerio del Interior de radicado OFI2022-11946-DCN-2300 de fecha 07 de junio de 2022"*.

Luego se refiere sobre el carácter subsidiario de la acción de tutela, y para ello transcribe aparte de los antecedentes jurisprudenciales, considerando que no se cumple con dicho presupuesto por lo que se debe acudir a la vía administrativa, por el medio más idóneo. Aunado a lo anterior, considera que no existe un perjuicio irremediable, dado que los hechos puestos de presente no se advierte un impacto que logre afectar inminentemente y con carácter grave los derechos del accionante; por lo que deben ser negadas las pretensiones.

6.2. LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL: fue notificada en debida forma el lunes 14/08/2023 siendo las cuentas de correo alcaldia@becerril-cesar.gov.co y notificacionjudicial@becerril-cesar.gov.co y vencido el termino otorgado, no se pronunciaron sobre los hechos.

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2023-00242-00
Accionante	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO
Accionado	CORPOCESAR
Decisión	SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.



7. CONSIDERACIONES

Es de anotar que el artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela *como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual* con la cual se busca la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

- Problema jurídico.

En el asunto de la referencia le corresponde al Despacho establecer si la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por solicitar como requisito para la inscripción en la convocatoria de la escogencia del representante principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de Corpocesar, para el periodo – 2024 – 2027 el Certificado expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT según Decretos 2363 y 2365 de 2015), sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.

- Procedencia de la acción de tutela en concursos de méritos.

El carácter subsidiario de la acción de tutela obliga al interesado a desplegar todo su actuar dirigido a poner en movimiento los medios ordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, dicha obligación exige que para solicitar el amparo de un derecho fundamental, el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada en el agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de la acción de tutela.

Al respecto, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que el juez debe analizar, en cada caso concreto, si los otros mecanismos judiciales que dispone el actor le permiten ejercer la defensa de sus derechos constitucionales fundamentales, logrando su protección efectiva e integral.

En lo que atañe a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, la Corte constitucional ha sostenido que: *"si bien los afectados pueden acudir a las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo"*¹

De acuerdo con lo anterior, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa tendientes a impugnar las decisiones adoptadas dentro de un trámite de concurso de méritos, carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo debido a su duración, pues dichas controversias requieren de decisiones rápidas, que solo es posible mediante la acción de tutela.

- Finalidad de los concursos de méritos y etapas.

Sobre la finalidad de la carrera administrativa, concursos públicos de mérito y sus etapas a través de jurisprudencia nuestro máximo tribunal constitucional ha expresado lo siguiente:

"(...) La consagración constitucional del sistema de carrera como principal forma de acceso al empleo público es reflejo de la necesidad de contar con servidores públicos cuyas capacidades, experiencia, conocimiento y dedicación les permitan atender eficazmente las responsabilidades que les han sido confiadas, ya que para el Constituyente de 1991 resulta claro que el "desarrollo económico y social de un país depende, entre otras variables, de la calidad del talento humano de su burocracia. La jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que el mérito y el concurso público son los dos pilares fundamentales de la carrera administrativa dentro de la Cada Política de 1991. En virtud del mérito se pretende que las capacidades, cualidades y eficacia del aspirante sean los factores determinantes para el acceso, permanencia y retiro del empleo público." Por su parte, el concurso público es el mecanismo para establecer el mérito, ya que aquel está exclusivamente dirigido a comprobar "las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos." La Corte ha manifestado que el concurso público debe ser comprensivo

¹ Sentencia T- 180 de 2015

de "todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública"; incluidos aquellos factores en los cuales "la calificación meramente objetiva es imposible", ya que aquello garantiza la erradicación de cualquier margen de subjetividad en la escogencia del concursante. El agotamiento de las diferentes etapas del concurso — siempre y cuando se respeten las reglas inicialmente establecidas — traerá como consecuencia necesaria la designación obligatoria de aquel quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles y de aquellos que lo preceden en el orden, dependiendo del número de vacantes disponibles. La Corte ha expresado que "cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos y una vez apreciados éstos quien ocupará el cargo será quien haya obtenido mayor puntuación"; ya que justamente el nombramiento del más apto es la finalidad para la cual aquel ha sido instituido (...)²".

- Procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos que reglamentan un concurso de méritos.

Sabido es que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que quiere decir que su procedencia se encuentra supeditada a que el actor no cuente con otro medio de defensa judicial o que existiendo éste no resulte idóneo o eficaz para la defensa de sus derechos fundamentales, o cuando finalmente se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela se concede de manera transitoria.

Para determinar la idoneidad y eficacia de los mecanismos judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que se deben evaluar lo siguiente:

"Ahora bien, para establecer la idoneidad y eficacia el juez debe valorar los supuestos fácticos de cada caso concreto, analizando aspectos tales como: (i) si la utilización del medio de defensa judicial tiene la virtualidad de ofrecer la misma protección que se lograría a través de/a acción de tutela (ii) el tiempo que tarda en resolverse la controversia ante el juez natural; (iii) la vulneración del derecho fundamental durante el trámite (iv) las circunstancias que impidieron que el accionante hubiese promovido los mecanismos judiciales ordinarios; (v) la condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, entre otras."

Asimismo, se ha reconocido de manera reiterada por la Jurisprudencia Constitucional que la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, hace que quién pretenda controvertir un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, debe acudir inicialmente a las acciones previstas en la

² T-569 de 2011 de la Corte Constitucional.

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2023-00242-00
Accionante	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO
Accionado	CORPOCESAR
Decisión	SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.

jurisdicción contencioso administrativa, como lo son la pretensión de simple nulidad o la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, las cuales pueden ser acompañada con la solicitud de suspensión provisional del acto correspondiente.

- Caso concreto.

De la lectura atenta realizada a los presupuestos facticos, advierte la suscrita que la inconformidad del accionante radica en los requisitos exigidos en el numeral b del art. 2 del Decreto 1523 de 2003, que textualmente dice lo siguiente:

"Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción".

Lo anterior por considerar, que exigir dicho requisito vulnera de tajo los derechos fundamentales a la igualdad, elegir y ser elegido entre otros, dado que existen varios pronunciamientos judiciales en los cuales los Jueces han decidido conceder las pretensiones y ordenado que dentro de las convocatorias no se tenga en cuenta ese numeral.

Para decidir es necesario revisar las pretensiones del accionante, quien solicita sean amparado sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, elegir y ser elegido; además la contestación del extremo demandando quien con sus argumentos insistió en que la acción de tutela es improcedente, arguyendo su postura en que no se cumple a cabalidad con el requisito de subsidiaridad, y la carencia de legitimación en la causa por activa, dado que el Consejo Comunitario Caño Candela, no cuenta con la totalidad de los requisitos formales para constituirse como parte del Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base del Ministerio del Interior.

Frete a lo que se ha dicho, corresponde al Juzgado determinar a quien le asiste la razón, y desde ya se estima que las pretensiones deben ser negadas por existir elementos que lleven a esta funcionaria a decidir de esa manera, resulta acertado que existen otros medios judiciales por medios judiciales a los cuales se puede acudir para dirimir la litis planteada, dado que no se demostró el perjuicio irremediable que se puede causar, de donde se justifique la intervención del Juez de tutela.

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2023-00242-00
Accionante	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO
Accionado	CORPOCESAR
Decisión	SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.

El extremo demandado solicita se denegara el amparo constitucional con fundamento en que el acuerdo a lo puesto de presente en el párrafo anterior, específicamente el acto administrativo por medio del cual se realiza la convocatoria por tener un carácter impersonal, general y abstracto, por lo que puede ser controvertido a través del medio de control de nulidad simple como quiera que lo pretendido va encaminado a atacar la legalidad de dicha actuación, aunado a la falta de legitimación.

Considera el Despacho que en este caso no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, dado que la actuación que cuestiona el actor giran en torno a un acto administrativo de carácter general y por ello el accionante tiene a su alcance otros mecanismos de defensa judicial a los cuales puede acudir para reclamar el daño que considera se le ha causado por parte de la entidad accionada como es el medio de control de nulidad simple ante la jurisdicción contencioso administrativa, en la que incluso puede solicitar la implementación de medidas cautelares, para que de inmediato sean salvaguardo los derechos presuntamente conculcados y se suspenda el proceso.

- Perjuicio irremediable

En lo que respecta a la configuración de un perjuicio irremediable, se tiene que se deben reunir unas características, como son: *(i) que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho fundamental; (ii) que de ocurrir no exista forma de reparar el daño producido al mismo; (iii) que su ocurrencia sea inminente; (iv) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.*

Pero no solo ese sería el argumento, sino que es necesario demostrar que existe un perjuicio irremediable lo cual no sucedió y mucho menos se aportaron elementos que lo indiquen y de esa manera implique la inminente afectación de los derechos fundamentales deprecados por el actor, por lo que el despacho negará el amparo tutelar invocado por HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO contra la Corporación Autónoma Regional Del Cesar "CORPOCESAR", por improcedente.

Respecto a la falta de legitimación por activa planteada en la defensa, se considera que no resulta exacto dicho argumento, bajo el entendido que dentro de

Asunto	Tutela de primera instancia
Radicado	200454089001-2023-00242-00
Accionante	HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO
Accionado	CORPOCESAR
Decisión	SE NIEGAN LAS PRETENSIONES.

los requisitos pedidos en la convocatoria no se refiere sobre la necesidad de quienes aspiren a participar en dicho proceso deban permanecer en el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base del Ministerio del Interior.

En mérito de lo anterior el Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril - Cesar administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados por el ciudadano HERMES LEONIDAS MLINA OSORIO quien se identifican con la 12.565619, de acuerdo con las consideraciones.

SEGUNDO: Por Secretaría notificar la decisión a las partes conforme a los lineamientos del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 806 de 2020, haciéndoles saber que respecto de esta procede el recurso de impugnación.

TERCERO: En caso de ser impugnada la presente decisión en los términos de ley, se ordena que por Secretaría de manera inmediata se envíe al Centro de Servicios de los Juzgados del Circuito de Valledupar para el reparto respectivo.

CUARTO: Si no es impugnado el presente fallo, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ELAINE ONATE FUENTES
JUEZA

Se suscribe con firma escaneada, por salubridad pública
(Art. 11, decreto 491 de 2020)



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pcto-chiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

Chiriguana- Cesar Veinticuatro (24) de Agosto de Dos
Mil Veintitrés (2023).

ACCIÓN CONSITUCIONAL	TUTELA
ASUNTO	Sentencia en Primera Instancia
ACCIONANTE (S)	JAIME LUIS CUADRO VÁSQUEZ
ACCIONADO (s):	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR Y MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR.
RADICACIÓN	2017831040022023000010-00

ASUNTO A DECIDIR

El Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento del municipio de Chiriguana- Cesar, en primera instancia, decide la *Acción de tutela* interpuesta por el señor JAIME LUIS CUADRO VÁSQUEZ, ciudadano colombiano mayor de edad e identificado con cedula de ciudadanía Número. 12.524.475 presidente y representante legal del consejo comunitario – Los Negritos- ubicados en el municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar en cuanto a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la autodeterminación de la etnia de comunidades negras, afrocolombianas y raizales, vulneración al derecho de igualdad, a elegir y ser elegido.

Actuando en nombre propio y en representación de algunas organizaciones sociales interpone este actor, la presente acción de tutela ante lo que considera es la

vulneración a sus derechos fundamentales y de la población afrocolombiana del departamento del Cesar, en contra del municipio de la Jagua ibirico departamento del Cesar, representada por el Doctor Ovelio Jiménez Machado; como también la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR- CORPOCESAR- en representación de *Jorge Luis Fernández Ospino*. Para que se reconozca el derecho de participación a convocatorias publicas dirigidas a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras localizados en este departamento.

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES Y PRETENSIONES.

PRIMERO: El día 02 de agosto de 2023, la Corporación regional autónoma del Cesar – Corpocesar- **abre** convocatoria pública en la página web de esta entidad, abierta todos los consejos comunitarios de las comunidades negras que tienen localidad en el departamento del cesar.

SEGUNDO: Se pretende a través de dicha convocatoria pública el nombramiento participativo de un representante principal de estas comunidades y (1) un suplente; de acuerdo a la estipulado en la Ley, que adoptó el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras (Ley 70 de 1993).

TERCERO: Como es de saber El acuerdo de Convocatoria reúne una serie de Requisitos y Condiciones que caracterizan al Proceso de Selección de cada uno de los exigidos del cumplimiento de los mismos. Este Acuerdo es consignado en un documento de dominio público, en el cual se determinan los Requisitos Generales de Participación, así como las indicaciones generales sobre el Proceso de Selección.

CUARTO: La corporación autónoma regional del cesar exige al accionante, aportar todos los requisitos de certificaciones expedidas por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER- que es la actual agencia nacional de tierras – ANT-.

QUINTO: La agencia Nacional de tierras ANT- vinculada a la demanda de tutela de referencia explica de manera detallada acerca de la existencia de territorio colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras haciendo claridad sobre los hechos deprecados.



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

SEXTO: El accionante JAIME LUIS CUADRO VÁSQUEZ anexa a esta demanda tutelar algunos fallos de tutela de otras instancias judiciales en las cuales otros miembros de consejos comunitarios han presentado para garantizar su participación en estas convocatorias.

SEPTIMO: El accionante pretende que la participación de las comunidades negras dependa de un titulo formal , como también explica que en la relación digital presentada dentro de la acción (Visible a folio 3) manifiesta que “ Ninguno de los consejos comunitarios del Departamento del Cesar posee un territorios colectivos, que son 12 Consejos y son solo ellos los que tienen certificación del ministerio” según a criterio del señor Cuadro Vásquez tienen titulación en tramite lo cual ha de verificar con un informe la agencia nacional de tierras.

OCTAVO: El peticionario de esta acción considera la acción de tutela procedente por el cumplimiento de fallos que leído y consignado dentro del presente tramite; quien también ve de manera factible realizar un estudio minucioso para determinar los derechos de las minorías negras.

NOVENO: En cuanto a la medida cautelar interpuesta dentro de la acción de tutela; para proteger un derecho Invocado, el señor JAIME LUIS CUADRO VASQUEZ solicita que se decrete la suspensión de la convocatoria publicada el día 2 de agosto de 2023 que tiene como finalidad la elección de un representante principal y un suplente de las comunidades negras a las que hace referencia el articulo 56 de la ley 70 de 1993, ante el consejo Directivo de Corpocesar para el periodo comprendido del 2024 al 2027.

Este despacho Judicial, a través de auto admisorio fechado el 11 de agosto de 2023 no encuentra sustento en los hechos narrados que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional preventivamente, adicionalmente de acuerdo a los anexos aportados la elección del miembro principal ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR tendrá lugar el 15 de septiembre de 2023, contando este despacho

con término prudencial entre la notificación de la presente acción a las entidades convocadas y la fecha en mención, para tomar la decisión que en Derecho corresponda. En consecuencia, se negó la medida provisional solicitada por no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991.

DECÍMO: El accionante solicita de manera colectiva el amparo de Derechos fundamentales de los consejos comunitarios del departamento del Cesar, al debido proceso, elegir y ser elegido, a la igualdad, autodeterminación de las comunidades negras y exige representación dentro del Consejo directivo en la Corporación regional autónoma del Cesar- *Corpocesar*. Como a su vez que se ordene generar una nueva convocatoria donde se incluyan todos los consejos comunitarios con voz y voto que tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en tramite o adjudicada.

Al municipio de la Jagua de Ibirico se le pretende generar espacios de participación a estas comunidades y garantizar espacios de participación en este municipio.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN.

Las pretensiones que anteceden la acción de tutela se fundamentan en los siguientes preceptos:

- Artículo 231 del C.P.C.A Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en l demanda o en la solicitud que se *realice en escrito separado, cuando t violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación a las n o r m a s superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (...)* Según lo allí dispuesto, existe l posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los efectos jurídicos de los actos administrativos de naturaleza electoral, cuando se cumpla las siguientes exigencias:
 - Que así lo pida la parte actora en la demanda o con escrito anexo a la misma;
 - Que la infracción ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar acto con las normas invocadas por el actor; y,
 - Que para ello puede emplearse los medios de prueba aportados por el interesado.

El actor también fundamenta su acción tutelar en el DECRETO 2591 DE 1991. **ARTICULO 7º-(...)** *Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud,*



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible (...).

La acción de tutela referenciada es un conjunto de pretensiones que hacen parte de en la formación del juicio que formula la autoridad judicial , que evidencia el conocimiento cierto de los hechos y de las demás circunstancias relevantes del conflicto y la determinación de las normas válidas para la solución del mismo; de carácter valorativo, que consiste en la evaluación de tales hechos a la luz de las normas que se juzgan pertinentes para ello, pues precisamente se refieren, en abstracto, a las conductas que el Juez ha identificado en concreto; y el decisorio, que se manifiesta en la parte resolutive del fallo cuya finalidad es resolver la controversia que originó esta acción , o hacer las declaraciones que se pretenden tutelar.

La sentencia en primera instancia es una decisión que implica, en primer término, un juicio de la razón, el cual se expresa en la motivación del fallo y, en segundo orden, una expresión de la voluntad, que se consigna en la parte resolutive del mismo de manera pertinente en el caso concreto.

ACTUACION PROCESAL REALIZADA.

La acción de tutela presente dentro del trámite de referencia fue recibida bajo la creación de documento el día 11 de agosto de la presente anualidad, por medio del acta de reparto y teniendo una constancia secretarial de la misma fecha; en el auto admisorio de la tutela se aprecia el efecto sustancial del juez teniendo en cuenta que la presente demanda reúne los requisitos exigidos por el decreto 2591 de 1991 y

procedimos a admitirla y darle el trámite preferencial y sumario así como ordenar la notificación personal a cada representante de las entidades tuteladas y al interesado. La actuación procesal también comprendió admitir la presente acción de tutela instaurada por el ciudadano *Jaime Luis cuadro Vázquez* y notificar a la parte accionada para que en un término de dos días se pronunciará acerca de los hechos que han dado fundamento a la presente demanda de tutela y conforme a los términos del artículo 19 del decreto 2591 de 1991 para ejercer de esta manera el derecho a contradicción y defensa. Se le solicitó a las partes accionadas que remitan en ese mismo lapso de tiempo copia digital de las piezas procesales que se consideren pertinentes en relación con los hechos de la misma.

Dentro de todo este conjunto procesal de actuaciones también se vinculó al trámite constitucional a la Agencia Nacional de tierras a fin de que se pronunciara sobre los hechos que componen la presente acción contestando de manera satisfactoria dentro del término estipulado, al igual que la Corporación autónoma regional del César Corpocesar y el municipio de la Jagua de ibirico actuando a través de su representante legal respondieron a la notificación prescrita y dando como resultado la contestación para la convocatoria estudiada. De lo anterior, se le solicitó remitir al Despacho constancias del cumplimiento del ordenado, como ya se explicó anteriormente, en cuanto a la solicitud de medida provisional o de medida cautelar que contiene la presente acción de tutela no se encontró sustento de los hechos narrados que hacen necesaria la intervención del juez constitucional preventivamente es por eso; que se procedió a negar la medida solicitada ya que no se cumplió lo establecido en el artículo 7 del decreto 2591 de 19 91 y lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional.

CONTESTACIÓN DE LAS PARTES ACCIONADAS Y VINCULADAS.

1. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL

CESAR CORPOCESAR:

El apoderado judicial de la corporación autónoma regional del César Corpocesar conforme al poder entregado Al Doctor ALMES JOSE GRANADOS CUELLO por el director general de manera atenta y respetuosamente se permite dar respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes preceptos:

“ EN CUANTO A LOS HECHOS PLANTEADOS EN LA ACCIÓN DE TUTELA:

- 1. Es cierto, la convocatoria se realizó el día 02 de agosto del año 2023, la cual fue publicada en la página de la Corporación.*



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. *Los requisitos exigidos en dicha convocatoria son los establecidos en el artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, a saber:*
 - a) *Certificación expedida por el Alcalde Municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.*
 - b) *Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural "INCODER" hoy Agencia Nacional de Tierras, sobre la existencia de Territorio Colectivo legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.*
 - c) *Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.*
3. *Efectivamente, mediante fallo de acción de tutela de fecha 24 de septiembre de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar, en forma extraña y desbordada, ordenó al entonces Director, inaplicar el requisito señalado en literal, frente a lo cual, la entidad, impugnó el fallo, pero fue considerado extemporáneo.*
4. *Dichos argumentos esbozados en el mencionado fallo de tutela, son abiertamente contrarios a la norma, además porque existe jurisprudencia de las altas cortes al respecto.*
5. *No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por los accionantes.*
6. *No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por los accionantes.*
7. *No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por los accionantes.*
8. *No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por los accionantes.*
9. *No es un hecho, es una afirmación que en todo caso debe ser probada por los accionantes.*

En primer lugar, me permito manifestar al despacho, que CORPOCESAR en el ejercicio de sus funciones, como autoridad ambiental en la jurisdicción del Departamento del Cesar, siempre ha actuado con observancia de los preceptos legales y constitucionales que rigen la materia para cada caso específico. En el presente caso tenemos que, a través de convocatoria pública, se realizó invitación a las comunidades negras, domiciliadas en el área de jurisdicción de CORPOCESAR, que lo es todo el territorio del departamento del Cesar, a participar en la elección de un (1) representante miembro principal y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", para el periodo comprendido del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre del año 2027.

En dicha convocatoria, se estableció que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2.015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección de su representante ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha establecida para la reunión de elección, los siguientes documentos:

- a) *Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal.*

- b) *Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (Agencia Nacional de Tierras), sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción. e) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato. Es de anotar que el procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales fue reglamentado inicialmente a través del Decreto 1523 de 2003, cuyo artículo establece los mismos requisitos antes descritos.*

Lo anterior no es procedente, puesto que sería contrario a la ley, teniendo en cuenta que los requisitos establecidos en la norma deben acreditarse en su totalidad; y, por ende, con la exigencia de los mismos en la convocatoria para la elección del representante principal y suplente, no se vulnera ningún derecho fundamental. Tan es así, que todas las Corporaciones Autónomas Regionales del país, realizaron la convocatoria para el periodo 2024 – 2027, en los mismos términos, conforme a la norma. En este punto, conviene señalar, que la protección general del derecho a la participación de las comunidades étnicas, se orientan a obtener que se garanticen a los pueblos interesados unas oportunidades de participación que sean, al menos, equivalentes a las que están a disposición de otros sectores de la población, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.

Dicha garantía busca suprimir la discriminación, en la medida en que proscribe toda acción u omisión que, de alguna manera, recorte, en relación con estas comunidades, los espacios de participación que, de manera general, se han previsto para todos los colombianos. Ello impone, también, la adopción de acciones positivas encaminadas a asegurar que el derecho de participación sea real y efectivo en relación con comunidades que han sido tradicionalmente discriminadas y marginadas y que han estado por fuera de los circuitos de la participación política.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, las condiciones dispuestas en la Convocatoria Pública realizada por la Corporación Autónoma Del Cesar no vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y la participación de la parte accionante, ni mucho menos, configuran discriminación étnico racial y territorial, en tanto en la referida convocatoria se establecieron unos mismos requisitos para todos los Consejos Comunitarios del Departamento del Cesar, los cuales se encuentra debidamente soportados en el ordenamiento legal.

Tenemos entonces que, es la misma ley la que reglamenta el proceso de elección, estableciendo los requisitos que se deben acreditar, y no es capricho de la Corporación, la exigencia del cumplimiento de los mismos. Ahora, conviene indicar que, en fecha 12 de julio de 2023, el señor JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO, en calidad de Alto Consultivo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras del Departamento del Cesar, y amparado en el numeral 5° del artículo 2.5.1.1.3 decreto 1640 del 2020, aportando certificación expedida por el Director de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, pone en conocimiento de la Corporación lo siguiente: “En el Departamento del Cesar, se ha estado constituyendo consejos comunitarios de comunidades negras, con la única finalidad de participar en la convocatoria, donde se elige al representante de las comunidades negras del departamento del cesar, ante el consejo directivo de la corporación autónoma del cesar Corpocesar, sin el lleno de los requisitos legales establecido en el artículo 20 del decreto 1745 de 1995, y mucho menos del decreto 1523 de 2003 Artículo 2.

Dentro de la contestación también solicita la accionada que se Sirva solicitarle a la Agencia Nacional de Tierra como entidad competente, el listado de oficial de los consejos comunitarios que, a la fecha tienen Títulos Colectivos o se encuentran en trámite de adjudicación en el Departamento del Cesar.



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

Solicito señor director, que en la Comisión Evaluadora de la documentación aportadas por los Consejos Comunitarios que llenen los requisitos de Ley, se hace necesario que dicha comisión, esté acompañada o integrada por un funcionario de la Defensoría del Pueblo y dos delegados de la Consultiva Departamental del Cesar, en aras de garantizar la participación legítima de los consejos comunitarios que pretendan participar.”

2. MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR.

La suscrita Jefe de la Oficina jurídica del municipio de la jagua de ibirico, Doctora ISBELYS SIRIANA RIOS RAMOS encontrándose legitimada para actuar en nombre de esta dependencia y en representación de los derechos e intereses del municipio de la Jagua de Ibirico, responde a la acción de la siguiente manera:

“En relación con las solicitudes deprecadas por el accionantes su señoría, me permito oponerme a la pretensión que relaciona al municipio de la jagua de ibirico, cesar y a nuestro alcalde Ovelio Enrique Jiménez Machado, la cual es la pretensión por las siguientes razones:

Que una vez revisado el libro de REGISTRO DE ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES Y CONSEJOS COMUNITARIOS Y COOPERATIVAS del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, se evidencia que en calidad de Presidente y Representante Legal, el señor Jaime Luis Cuadro Vásquez, inscribió en el libro el día 13 de Diciembre de 2019, en la Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad un consejo comunitario que no es posible evidenciar el nombre, pues goza de una enmendadura, y carece de firma por parte de quien reposa como Presidente y Representante Legal y que dicho consejo comunitario pertenece a la vereda caño adentro del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Seguido a lo anterior, debemos manifestar que, la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” goza de autonomía a la hora de realizar la apertura de dicha convocatoria, seguido a esto, es deber nuestro informar que no hacemos parte de dicha convocatoria ni su selección, así como tampoco somos responsables de que cada Consejo Comunitario lleve consigo registro, y requisitos esenciales para participar a la misma,

Señoría, de manera respetuosa y responsable solicitamos a su criterio, DESVINCULAR al Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, al evidenciarse que no hemos violado y mucho menos amenazado los derechos fundamentales del accionante, por tal motivo es esencial que la decisión tomada por su criterio no afecte a esta entidad, por tratarse de asuntos ajenos a nuestra responsabilidad.

3. AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. En calidad de vinculada a esta acción.

El apoderado judicial de esta entidad Doctor ÁLVARO ALEJANDRO RUANO RUÍZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.224.698 y Tarjeta Profesional No. 314.955 del C. S. de la J responde al requerimiento de tutela de la siguiente forma:

1. SOBRE LA APARENTE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA Su Señoría, como primera medida, respetuosamente se informa que, la Agencia Nacional de Tierras no tiene facultades para determinar si las comunidades étnicas pueden participar o no en convocatorias públicas relacionadas con la elección de representantes. Sin embargo, debido a que el accionante requiere la vinculación de la Entidad en el hecho 9 del escrito de tutela, así: “(...) que ningún consejo comunitario en el cesar tiene territorio colectivos hay 12 que tiene certificación del ministerio, lo cual posiblemente signifique que estos tienen titulación en trámite lo cual hay que verificar con un informe que presente la agencia de tierras (...)”, la Oficina Jurídica procedió a requerir a la Dirección de Asuntos Étnicos para que se pronunciara al respecto.

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS: En respuesta, la misional remitió un memorando del 17 de agosto de 2023, en el que se informa: “(...) En atención al memorando referido en el asunto, y a la admisión de Tutela emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito De Chiriguaná, en el cual ordena a la Entidad pronunciarse sobre los hechos expuestos por el señor Jaime Luis Cuadro Vásquez, se brinda respuesta en los siguientes términos:

En primer lugar, resulta relevante aclarar que mediante el Decreto 2363 de 2015 se crea la Agencia Nacional de Tierras, para ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación. Ahora bien, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia, en el marco de las competencias asignadas en el Decreto 2363 de 2015 adelanta procedimientos en beneficio de las Comunidades Negras e Indígenas del país, en lo referente a programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de tierras y mejoras para dotar de tierras a tales comunidades. Así las cosas, una vez consultadas las bases de datos alfanuméricas y geográficas que reposan en esta Dirección, las cuales están en constante actualización y depuración, **a la fecha, se pudo establecer que, en el departamento del Cesar no se evidenciaron Comunidades Negras tituladas colectivamente.**

Por su parte, las maneras de obtener la certificación que trata el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2.015 la cual es otorgada a los consejos comunitarios son:

a) que se encuentran con solicitud “en trámite” de adjudicación, es decir, que cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 20 del Decreto 1745 de 1995, compilado en el Decreto 1066 de 2015 (artículo 2.5.1.2.20) y que cuenten con el auto de aceptación;

b) que la Comunidad solicitante cuente con Acto administrativo de titulación colectiva. Toda vez que, cuando se hace referencia a "Solicitudes en trámite", son aquellas que cuentan con auto de aceptación emitido por de la Subdirección de Asuntos Étnicos de esta Entidad, una vez verificada que la documentación aportada por la comunidad cumple con la



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

totalidad de requisitos establecidos para iniciar con las actuaciones administrativas conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1745 de 1995, compilado en el Decreto 1066 de 20151.

Por otro lado, se relaciona a continuación el registro de las solicitudes de titulación colectiva de los consejos comunitarios de comunidades negras en el departamento del Cesar, que a la fecha se encuentran en trámite de titulación colectiva, de conformidad con la información aportada por la Subdirección de Asuntos Étnicos.

- A la fecha, existen Nueve (9) consejos comunitarios de comunidades negras que cuentan con auto de aceptación proferido por la Agencia Nacional de Tierras en los términos descritos en el artículo 21 del Decreto 1745 de 1995, y por tanto se encuentran “en trámite” de titulación colectiva al estar priorizados en el plan de atención de la presente vigencia fiscal:

CONSEJO COMUNITARIO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
Juana Oyaga de Miranda	Cesar	Pelaya
Modesta Guzmán	Cesar	Chiriguana
La Palmita - COAFROPAL	Cesar	La Jagua De Ibirico
De la Jagua de Ibirico (COACNEJA)	Cesar	La Jagua De Ibirico
Los Cardonales	Cesar	Valledupar
La Sierra, El Cruce y La Estacion	Cesar	Chiriguana /Valledupar
Consejo Comunitario Marcelino Ochoa Alvarez “CTELO”	Cesar	Valledupar
Consejo comunitario Julio Cesar Altamar Muñoz	Cesar	El Paso
Consejo Comunitario Arcilla, Cardón Y Tuna	Cesar	Valledupar

En consecuencia, frente a los hechos expuestos por la parte accionante, se colige que la Entidad no ha realizado actuación alguna u omisión que violente los derechos en mención, así las cosas, no cuenta con legitimación por pasiva para amparar los presuntos derechos referidos, toda vez que, de conformidad con lo solicitado en el escrito de tutela, recae en la Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar.

Por último, el llamado a dar el reconocimiento a reconocer los derechos al debido proceso administrativo, autodeterminación de la etnia de comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera, a la igualdad, a elegir y ser elegido, al acceso a representación públicas en conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial es la Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar en virtud del ámbito misional que le asiste (...) alegando también falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por lo Observado, Además, consideran que los correctivos adoptados por el las partes accionadas, a manera de *estimaciones estadísticas e informativas*, no subsanan completamente los yerros observados y su impacto en los derechos fundamentales de los afrocolombianos y/o negritudes. Es por los anteriores análisis que Consideró que no se satisface el criterio de subsidiariedad, en tanto que el accionante cuentan con otros mecanismos de protección a los derechos invocados, los cuales además son derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio cultural de la nación o las comunidades aborígenes o negritudes descendientes.

PRUEBAS

El accionante:

1. Documento que demuestra la existencia del consejo comunitario en el que Cuadro Vásquez Funje como presentante legal.
2. Fotocopia de la convocatoria publica de fecha 02 de agosto de 2023.
3. Acciones de tutela de otras dependencias

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

Teniendo en cuenta las pruebas que obran en este expediente y su respectivo estudio de admisibilidad ingresa este Despacho judicial a hacer un estudio



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

pormenorizado de las actuaciones presentes dentro del caso que nos ocupa, teniendo en cuenta los siguientes contextos:

1. Procedencia de la acción de tutela.
2. Hechos presuntamente vulnerados y perjuicios irremediables vulnerados.
3. Ley 70 de 1993.
4. Nombramientos participativos en Consejos comunitarios y asuntos étnicos.

COMPETENCIA.

Primeramente, La Acción de Tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales establecido por el artículo 86 de la Constitución de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de la misma anualidad, en cuyo Art. 1º dice: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto¹. Es este juzgado competente para resolver la presente acción.

Los derechos que presuntamente se vulneran hacen parte de un conjunto de situaciones que decidirá dentro de la presente acción La acción de tutela que ha sido concebida para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos y omisiones de cualquier autoridad pública o de particulares que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de los cuales el sistema jurídico

¹ 1 Corte Constitucional. Sentencia T-430 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

no tiene otro mecanismo susceptible de ser invocado para lograr la protección del derecho.

El despacho analiza si los derechos fundamentales son vulnerados de las comunidades negras a la participación y a elegir sus representantes al exigir certificación que acredite título colectivo o en trámite de adjudicación de los consejos comunitarios, esta tesis está amparada en el decreto 1076 de 2015 al aplicar este requisito al caso concreto

DERECHO A LA IGUALDAD

Consagrado en el artículo 13 de la carta política estipula múltiples ámbitos de protección en el sentido que pretende reconocer las personas que nacen libres ante la ley recibirán la misma protección y trato de las autoridades por lo tanto gozarán de los mismos derechos libertades oportunidades sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo raza origen nacionalidad familiar lengua o religión opinión política o filosófica ordenando al Estado que promueva toda una serie de condiciones para que la igualdad sea real y efectiva adoptando medidas en favor de los grupos discriminados o marginados y personas que por su condición económica mental o física se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos contra ellas.

El derecho a la igualdad principalmente otorga una garantía a las personas para que no se instauren contra ellas excepciones que se les concede a otros en idéntica circunstancias es decir la igualdad es un derecho válido en la constitución política nacional que no permite tratos diferenciados para aquellos que se encuentren en una similitud de carácter objetivo.

Presuntamente también se encuentra vulnerado el derecho al debido proceso consagrado en la constitución política nacional artículo 29 ². El cual debe aplicarse a toda la serie de actuaciones judiciales y administrativas que se traducen como un conjunto de derechos que tienen las personas para preservar un orden justo esto implica una serie de respetos y acogimientos a las garantías mínimas que tiene cada persona en cuanto a los poderes públicos que se encuentra legalmente constituidos sujetos a actos de carácter judicial político o de entidades estatales no solo a las normas orgánicas constitucionales contienen estos valores principios y derechos sino que el objetivo también debe ser respetado por las autoridades privadas que es el

² Constitución política Nacional. Art 29



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

objeto de la jurisdicción constitucional a que se refiere la tutela.

En cuanto al derecho a la participación a elegir y ser elegido que se considera presuntamente vulnerado dentro de la presente acción el artículo 40 de la constitución política nacional estipula que el derecho de participación de todos los ciudadanos en ejercicio y control del poder político se hace efectivo cuando entre otras facultades se tiene la capacidad de elegir y ser elegido y tomar parte en elecciones referendos plebiscitos y consultas populares en otras formas de participación democrática la Constitución nacional en sentencia 576 de 2014 establece con respecto al derecho en relación a los pueblos indígenas y tribales que cuenten con las oportunidades de pronunciamiento sobre los proyectos y decisiones que puedan alterar sus formas de vida incidir en su propio proceso o desarrollo que los impacte de manera significativa desde todo punto de vista en sus costumbres instituciones y tradiciones.

Como puede verse, la asamblea es de delegados de las comunidades y sus diferentes formas organizativas, quienes por cada una de ellas designan un delegado para que integre la asamblea y el llamado a lista debió hacerse de los delegados designados por las organizaciones y comunidades que estaban presente en dicha asamblea.

En atención a lo anterior y conforme lo dispuesto en las pretensiones presuntamente se Vulnero el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, toda vez que no realizó la convocatoria en forma correcta por la corporación autónoma regional del cesar – Corpocesar ello hace referencia a un caso específico, por lo cual la convocatoria denota transparencia establece una hoja de ruta para que entienda la forma como debe tratar a nuestras comunidades garantizando sus derechos fundamentales; a tal punto que la misma corporación la cita textualmente en la circular de la convocatoria. El reconocimiento del Derecho a la propiedad colectiva en el marco de la Ley 70 de 1993 se

fundamenta en El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.

En cuanto a Carácter subsidiario y residual de la acción de tutela.

La Corte Constitucional en sentencia T-177 de 2011 ha sostenido que en armonía con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta Política y 6º del Decreto 2591 de 1992, la acción de tutela es un mecanismo judicial, para la protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter *subsidiario*. Ésta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos.

Esta Corporación ha reiterado que no siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es subsidiaria y residual, es decir procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración. Sobre el particular, en la sentencia T-753 de 2006 esta Corte precisó:

“(...) Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse

⁶ Decreto 2591. Art 1.

oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.” (...)

Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales. Al respecto, en la sentencia T-406 de 2005⁷, la Corte indicó:

“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales. De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales,



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría laíndole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo.”

Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley.

Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: *(i)* los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; *(ii)* se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, *(iii)* el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional.

La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el perjuicio ha de ser *inminente*, esto es, que amenaza o está por suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser *urgentes*; no basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea *grave*, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea *impostergable*, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

En cuanto El derecho fundamental al debido proceso incoado en esta presente, se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, disposición según la cual este *“se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”*. Esta garantía

constitucional ha sido entendida como el deber de las autoridades, tanto judiciales como administrativas, de respetar el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y ha sido definida por esta Corporación como “un principio inherente al Estado de Derecho que posee una estructura compleja y se compone por un plexo de garantías que operan como defensa de la autonomía y libertad del ciudadano, límites al ejercicio del poder público y barrera de contención a la arbitrariedad.

Considerando lo expuesto por las partes en la protección efectiva de los mismos Derechos presuntamente vulnerados, es claro manifestar que dichas pretensiones se extralimitan del amparo constitucional, por presentar un contenido netamente electivo y administrativo, y que por consideraciones deben ser resueltas en otro de instancias jurídicas muy diferentes a la acción de tutela.

Análisis del caso en concreto:

Le corresponde a este Despacho Judicial decidir la acción de tutela presentada por Jaime Luis Cuadro Vásquez en cuanto a la consideración de violatorio de los derechos fundamentales de las comunidades negras no se vislumbra en la presente actuación y no se reprochan las exigencias del requisito que alega el accionante, sino que se considera que ellos o las entidades accionadas han dado estricto cumplimiento a el trámite en disputa lo que constituye principalmente una vía libre para resolver de fondo las denuncias planteadas que constituyen hechos y pretensiones nuevas dentro de la presente demanda tampoco se avisa vulneración de derechos algunos porque las comunidades que se encuentran destacadas en el documento que anexa la agencia nacional de tierras lo muestra de manera fehaciente.

En cuanto al cumplimiento de requisitos para las convocatorias y sus controversias derivadas por las partes se observa que existen comportamientos ajustados a derecho, pero de carácter netamente administrativo que no tienen en cuenta la acción de tutela como mecanismo subsidiario y residual Como quiera que las convocatorias se han realizado dentro del marco legal sumado al análisis de los hechos y a la contestación de las partes accionadas no aplicables para esta cuestión.

La acción de tutela puede interponerse en todo momento y lugar, sin embargo, se puede establecer que su naturaleza es de protección inmediata de los derechos fundamentales por su carácter urgente a las situaciones que tienen potencialidad de generar una



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
CHIRIGUANÁ, CESAR
Celular: 317 651 5252
j02pctochiriguana@cendoj.ramajudicial.gov.co

vulneración o amenaza a derechos fundamentales. Pudiendo el actor emplear otros medios judiciales como la acción popular o la justicia administrativa para el derecho de postulación a convocatorias de comunidades negras Y/o raizales. Ahora bien, la Constitución Política de 1.991 en el último inciso de su artículo 86, establece la posibilidad de dirigir acciones de tutela contra particulares, al señalar: *“La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra los encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”*.. Que, de acuerdo a los principios de razonabilidad se toman las circunstancias y consideraciones del caso concreto.

Suficientes las razones expuestas, para que este operador NIEGUE los derechos incoados Ya que como muestra la contestación de las partes accionadas no se precisa vulneración de derechos fundamentales de las comunidades negras a elegir y ser elegidas el debido proceso y a la igualdad por el hecho de que la corporación autónoma regional del César convocó a procesos de elección de la presente; ante su junta directiva y que se les está permitiendo la participación con derecho a voz y voto solamente a los consejos comunitarios que presenten o acrediten títulos colectivos ello también se fundamenta en saber que no se materializa violaciones en los derechos fundamentales que alega el actor ya que la convocatoria que se realiza por el director general de comportar para la elección de un representante titular y suplente de las comunidades negras ante el consejo directivo de la corporación se está haciendo conforme a las normas y a la ley reglamentaria de dicho procedimiento exigiendo el lleno de requisitos legales.

En cuanto a la adjudicación de títulos de propiedad queda claro cada consejo comunitario que se encuentra distribuido en el departamento del César para una participación equitativa y justa. A pesar de existir otro mecanismo de defensa, las condiciones que rodean el asunto, hacen que existan otras herramientas a la intervención del juez

constitucional en aras de impedir oportunamente la vulneración de los derechos fundamentales, y así evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediables

En razón de lo anteriormente expuesto el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ- CESAR** administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA DE COLOMBIA y por autoridad de la Constitución y de la Ley.

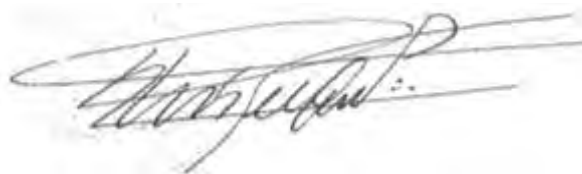
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE Y NEGAR EL AMPARO TUTELAR al señor **JAIME LUIS CUADRO VASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía 12.524.475 presidente y representante legal del consejo comunitario – Los Negritos- ubicados en el municipio de la Jagua de Ibirico – Cesar por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por secretaría, notifíquese la presente decisión a las partes de manera expedita.

TERCERO: Si esta providencia no fuere impugnada dentro del término de tres (3) días, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS FELIPE MAESTRE BELLO

JUEZ



**DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ**

TIPO DE PROCESO	Acción de Tutela – Primera Instancia
RADICADO No.	20178-31-04001-2023-00059-00
ACCIONANTE (S)	JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO
ACCIONADO (S)	Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” y Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar
VINCULADO (S)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras

Chiriguaná, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

1. – OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a decidir la tutela presentada por **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO en representación legal de Consejo Comunitario San Isidro Labrador del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar¹** contra Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” y Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, ante la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, autodeterminación de la etnia de comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera, a la igualdad, a elegir y ser elegido y al acceso a representación pública en conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial.

2. – HECHOS Y PRETENSIÓN

Expuso que pudo participar en el último proceso de elección del representante principal y suplente de las comunidades negras ante la mesa directiva de CORPOCESAR, por lo que se garantizó sus derechos a elegir y ser elegidos, mediante la sentencia de tutela de 24 de septiembre de 2019² proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de

¹ Folio 41 del PDF 02DemandaTutela_Anexos
² Folios 9 al 17 del PDF 02DemandaTutela_Anexos



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Valledupar, Cesar, bajo el radicado No. 20001- 40-71-003-2019-00259-00, toda vez que decretó la nulidad de toda actuación al interior del proceso de convocatoria pública para elegir un representante principal y un representante suplente ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2023 y ordenó que se realizara una nueva garantizando la participación de los consejos comunitarios que cumplan con los requisitos.

También, que en la providencia referida, el Juez constitucional estableció que con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha fijada para la reunión de elección se debían radicar la certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del consejo comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal y allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato, debiendo omitirse, según él, el requisito establecido en el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, correspondiente a la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.

Que el 2 de agosto de 2023 la entidad accionada CORPOCESAR³ abrió convocatoria pública dirigida a todos los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizadas en el departamento del Cesar para participar en la elección del representante principal y suplente de ellas, de acuerdo con el artículo 56, de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo 2023 - 2027, haciendo exigible aportar todos los requisitos, en especial la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.

³ Folio 40 del PDF 02DemandaTutela_Anexos



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Refirió que en garantía de los derechos fundamentales invocados, la Corte Constitucional, en sentencia T - 576 de 2014, estableció que *“la participación de las comunidades negras en la elección de los integrantes del espacio nacional que las representarían para efectos de la consulta previa de las medidas de amplio alcance que pudieran afectarlas no podía supeditarse a que contaran con un título colectivo adjudicado por el Incoder ni a ningún criterio que limitara su derecho a autodeterminarse y a reivindicar, en ejercicio de su identidad diversa, su status como titulares de derechos étnicos”*. Así mismo, que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, el 17 de mayo de 2018 dejó claro que *“(…) no se puede exigir un título colectivo para el ejercicio de los derechos fundamentales de participación de los consejos comunitarios.”*

Además, que la Corte Constitucional en la sentencia T-681 de 2016, M.P. explicó que: *“5.1. La excepción de inconstitucionalidad se erige a partir del artículo 4º de la Constitución Política que establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se emplearan las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.”*. Así lo interpretó la misma Corporación en la sentencia T- 576 de 2014 que analizó la exigencia que hizo el ministerio del interior a las comunidades afrodescendientes, consistente en poseer un título colectivo de adjudicación para participar en la elección de los integrantes del Espacio Nacional de Delegados, en cuanto sostuvo que *“pretender que el derecho a la participación de las comunidades negras dependa de un título formal que, además, certifica una relación con la tierra, resulta a todas luces irrazonable, sobre todo, si se tiene en cuenta la manera en que las comunidades negras del país han sido despojadas de sus territorios y lo complejo que, en sí mismo, resulta el trámite de titulación colectiva...”*.

Consideró importante lo anterior porque ningún Consejo Comunitario en el Cesar tiene territorio colectivos, debido a que en todo el departamento hay alrededor de 100 Consejos Comunitarios de los cuales 12 tienen certificación del Ministerio, lo que significa que posiblemente estos tienen titulación en trámite que se puede verificar con un informe de la Agencia nacional de Tierras, lo que indica que solo una minoría representaría o tendría la posibilidad de tener voz y voto, por lo que derivado de dicha situación no se recogería el sentir de los Consejos Comunitarios del departamento del Cesar, máxime en este departamento que tiene *“varios espejos de agua, cenagosos y minería voraz que impacta el medio ambiente”*.



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Por lo informado, solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y se ordene a CORPOCESAR dejar sin efecto la convocatoria publicada el 2 de agosto de 2023, con el fin de elegir representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR para el periodo 2024 - 2027, eliminando el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del decreto 1076 de 2015.

Igualmente, se ordene a CORPOCESAR se genere una nueva convocatoria donde se incluyan todos los consejos comunitarios que tengan o no certificación de la Agencia Nacional de Tierras en trámite o adjudicada.

3. - ACTUACIÓN PROCESAL Y RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS

3.1. – En auto de 18 de agosto de 2023 este Juzgado admitió la acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” y Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, Cesar, dándoles traslado de la tutela para que se pronunciaran sobre ella. Además, se vinculó oficiosamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras.

3.2. – Dentro del término otorgado, la **Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar**, informó que una vez revisado el libro de registro de Asociaciones, Organizaciones y Consejos Comunitarios y Cooperativas, evidenció que en condición de presidente y representante legal, el señor **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO** inscribió en el libro, el 29 de octubre de 2019, en la Secretaría de Gobierno de esa municipalidad, un Consejo Comunitario de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras Afrocolombianas “SAN ISIDRO LABRADOR”, que pertenece al municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.

Así mismo, que la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” goza de autonomía a la hora de realizar la apertura de dicha convocatoria, por lo que ese ente territorial



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

no hace parte de esta, ni en su selección, además, no es responsables de que cada consejo comunitario lleve consigo registro y requisitos esenciales para participar en la convocatoria.

Por lo anterior, solicitó que la alcaldía que representa sea desvinculada, dado que no ha amenazado los derechos fundamentales del accionante y se trata de asuntos ajenos a sus responsabilidades.

3.3. – El Apoderado de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR se refirió a cada uno de los hechos de la demanda y manifestó que es menester tener en cuenta que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y que para el caso concreto el accionante debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, teniendo incluso la posibilidad de solicitar medidas cautelares y utilizar los demás mecanismos procesales orientados a la satisfacción de sus intereses. También, que resulta improcedente la acción constitucional toda vez que no se está ante la presencia de un perjuicio irremediable y tampoco aportó ningún tipo de material probatorio que permita establecer con certeza y claridad la existencia de dicho perjuicio.

Así mismo, que las actuaciones de esa entidad, en el marco de la convocatoria pública en mención, no restringen de manera alguna la participación de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizados en el departamento del Cesar, pues obedece a los principios orientadores en la medida que garantiza la libre concurrencia e igualdad en el ingreso al cerciorarse de que aquellos que deseen participar en la convocatoria acrediten los requisitos determinados en la misma.

En línea con lo anterior, CORPOCESAR atiende a lo consignado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.2.8.5.1.2.5, tan es así que diversas convocatorias públicas⁴ relativas a la participación de las Comunidades Negras en la participación de la elección de un representante principal y su respectivo suplente ante los Consejos Directivos las

⁴ Folios 93 al 105 del PDF 09ContestaciónCorpocesar_23Agosto2023



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Corporaciones Autónomas Regionales de diversos departamentos exigen como requisito el aquí demandado por el accionante, pues precisamente éste es ordenado en cumplimiento al artículo 2.2.8.5.1.2. del precitado Decreto.

Además, que esa Corporación ha obrado con apego al marco normativo que regula la materia y a los principios orientadores de las convocatorias públicas, incluso ha coordinado con el señor José Armando Mendoza Sarmiento, en su condición de Consultivo del Nivel del Cesar de la Comisión de Alto Nivel de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, como representante del departamento del Cesar⁵ y da cuenta de ello el derecho de petición de 12 de julio de 2023⁶ interpuesto por el señor Mendoza Sarmiento, en el cual solicitó convocar únicamente a los Consejos Comunitarios que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en el artículo No. 2 del decreto 1523 de 2003.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó que se declare improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados, en razón a que en lo que corresponde a las disposiciones tomadas y actuaciones ejecutadas por CORPOCESAR se circunscriben a: i) decisiones que se encuentran debidamente soportadas en las normas aplicables al caso, ii) no comportan una vulneración a derecho fundamental alguno, iii) no causan perjuicio irremediable que merezca ser objeto de protección por medio del presente amparo constitucional.

3.4. – La Apoderada Judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se opuso a la tutela de los derechos invocados por el accionante frente a esa Cartera, por cuanto esa entidad no ha dado lugar a la presunta vulneración de los derechos alegados y por ello constituye para su representada la falta de legitimación por pasiva, dado que la protección que se persigue la acción de tutela escapa de las competencias de ella.

Alegó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es un órgano de gestión encargado de fijar las políticas ambientales a nivel nacional, para que estas sean ejecutadas

⁵ Folios 23-24 del PDF 09ContestaciónCorpocesar_23Agosto2023

⁶ Folios 25 al 29 del PDF 09ContestaciónCorpocesar_23Agosto2023



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

por las autoridades ambientales de acuerdo con el área de jurisdicción y sus respectivas competencias, tales como las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, así mismo, desarrolló los objetivos y las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales conforme al artículo 31 de la ley 99 de 1993, resaltando que ese Ministerio no funge de ninguna manera como superior jerárquico de las autoridades ambientales, las cuales ejercen y cumplen sus funciones con autonomía.

Por todo lo expuesto, no es viable ni legal ni técnicamente exigir a esa entidad el cumplimiento de las funciones legales que no le fueron asignadas por ley e imputar responsabilidad por un hecho presuntamente atribuible a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, o exigirle a esta cartera ministerial ordenar actuación alguna a la respectiva Corporación Autónoma Regional, toda vez que dichas funciones escaparían ampliamente de las potestades y facultades atribuidas a ese ente.

Así las cosas, solicitó que se desvincule al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.5. – La Apoderada de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras – ANT mencionó que de la lectura de la acción impetrada no se pudo inferir en qué consiste la vulneración a los derechos del actor por parte de esta entidad, ya que narra unos hechos relacionados con actuaciones ejecutadas presuntamente vulnerados por la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” y Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, Cesar.

Sin embargo, requirió a la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, para que informara si a la fecha se encuentra adelantado alguna actuación administrativa respecto del Consejo Comunitario San Isidro Labrador del municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar, obteniendo



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

como respuesta que revisados los archivos y aplicativos, a la fecha no encontraron petición alguna pendiente por dar respuesta al accionante.

Igualmente, solicitó la improcedencia de la acción de tutela y que se declare a favor de la Agencia Nacional de Tierras – ANT la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción u omisión por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

3.6. – El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior solicitó que se declare en favor de ese ministerio la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no existe un nexo de casualidad entre la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y la acción u omisión por parte de ese ente, incluyendo la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y que en consecuencia se proceda a la desvinculación inmediata.

Destacó que en lo relativo al proceso de designación o elección del representante de las Comunidades Negras en las Corporaciones Autónomas Regionales, es conveniente tener como referente el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, el cual dice: “Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional”. Así, el reglamento expedido por el Gobierno Nacional en la materia, dice que la manera que los miembros de las comunidades harán la elección de su representante y suplente ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015.



**DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ**

4. - CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el numeral 4º del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, este Despacho es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO**⁷.

Establecido lo anterior, lo primero que habrá de precisarse, es que la acción de tutela es un mecanismo que permite demandar ante los jueces, mediante un procedimiento preferencial y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares encargados de la prestación de un servicio público o frente a los cuales el accionante se encuentre en condiciones de subordinación o indefensión.

Según el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia la acción de tutela “...sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dicho aparte de la norma Constitucional encuentra su desarrollo en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que literalmente expresa: “La acción de tutela no procederá: 1) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (...)”

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha establecido reiteradamente⁸: **“El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela** ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en

⁷ Folio 41 del PDF 02DemandaTutela_Anexos

⁸ Ver, entre otras, las siguientes providencias: S.V. [T-070/97](#), [T-167/05](#), [T-642/07](#), [T-807/07](#), A.V. [T-864/07](#), [T-213/08](#), [T-363/08](#), [T-404/08](#), [T-413/08](#), [T-421/08](#), [T-609/08](#), [T-773/08](#), [T-809/08](#), [T-297/09](#), [T-530/09](#), [T-598/09](#), [T-624/09](#), [T-632/09](#), [T-629/09](#)



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos” (Sentencia T-629-2009).

La Corte también ha reconocido que la subsidiariedad implica la improcedencia del amparo cuando el actor no haya ejercitado la jurisdicción conforme a los mecanismos jurídicos de los que dispone, y los pretenda sustituir con la acción constitucional de tutela:

“La Corte ha sostenido y reiterado que la acción de tutela es improcedente (i) cuando a través de la misma se pretendan reemplazar los mecanismos judiciales ordinarios que hayan caducado o vencido y (ii) cuando mediante su ejercicio se pretenda reabrir un asunto litigioso que, por la negligencia, desidia e incuria del demandante, se encuentra debidamente resuelto a través de una sentencia ordinaria legalmente ejecutoriada”

(...) Sin duda alguna la naturaleza subsidiaria del amparo constitucional ante los diferentes mecanismos judiciales ordinarios dispuestos en nuestro Estado de Derecho ha sido resaltada y desarrollada en la jurisprudencia constitucional desde el primer año de vigencia de la Constitución Política de 1991⁹. En la sentencia T-007 de 1992, la Corte advirtió que de ninguna manera la acción de tutela puede constituirse en un ‘remedio’ para quienes interponen la acción ordinaria por fuera de término o -peor aún- para quienes -sin justificación- evitan acudir sistemáticamente a los mecanismos judiciales ordinarios. En dicho fallo se dijo textualmente lo que sigue: “Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir el accionante” (Sentencia T-179 de 2009).

⁹ De hecho, en la sentencia T-001 de 1992 la Sala Tercera de Revisión de ese entonces previno lo siguiente: “(...) la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce”.



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Para el caso en concreto, el señor **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO** en representación legal de Consejo Comunitario San Isidro Labrador del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar¹⁰, solicitó la protección de los derechos constitucionales al considerar que la exigencia del requisito establecido en el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015 para que los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizados en el departamento del Cesar puedan participar en la convocatoria pública hecha por CORPOCESAR el 2 de agosto de 2023, para la elección de un (1) representante principal y suplente ante el Consejo Directivo de esa entidad para el periodo 2024 - 2027, pues bajo dicha exigencia no se recogería el sentir de los Consejos Comunitarios del departamento del Cesar, pues sólo la minoría representaría o tendría la posibilidad de tener voz y voto; así, pretende que en sede de tutela se le ordene a la accionada Corporación que deje sin efecto la convocatoria publicada el 2 de agosto de 2023 y genere una nueva donde se incluyan todos los Consejos Comunitarios que tengan o no certificación de la Agencia Nacional de Tierras en trámite o adjudicada.

Como se advirtió al inicio, la Corte Constitucional ha indicado pacíficamente que, sin excluir la posibilidad de acudir a la vía excepcional de la tutela para la protección de derechos fundamentales en estos casos presentó dos escenarios bajo los cuales se puede acudir a este mecanismo constitucional: i) cuando a pesar de existir un mecanismo idóneo, el mismo no goza de la suficiente efectividad, o ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Un perjuicio es irremediable, cuando: “(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”¹¹.

¹⁰ Folio 41 del PDF 02DemandaTutela_Anexos

¹¹ Sentencia T-132 de 2006. Sobre los mismos requisitos se pueden consultar las sentencias T-629 de 2008 y T-1266 de 2008.



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

De acuerdo con lo anterior, el Despacho ha de advertir desde ahora que el amparo pretendido por el accionante resulta improcedente, en tanto que su pretensión apunta a que se deje sin efecto, parcialmente, un Acto Administrativo de carácter general y se ordene a un ente administrativo autónomo como lo es CORPOCESAR que genere una nueva convocatoria con el fin de elegir representante principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de esa corporación, donde se incluyan todos los consejos comunitarios que tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en trámite o adjudicada, exigencia que debe ser sometida a la jurisdicción contencioso administrativa.

Sobre la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales la Corte Constitucional en la sentencia C – 152 – 2023 M.P. Alejandro Linares Cantillo ha dicho lo siguiente:

“42. El artículo 23 de la ley 99 de 1993 precisa la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales, al señalar que se trata de “entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del [MADS]”

También, el Consejo de Estado en auto de 19 de agosto de 2020 señaló sobre el control inmediato de legalidad de los actos proferidos por las Corporaciones Autónomas Regionales, lo siguiente:

“CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CRITERIO DE COMPETENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / ENTIDAD TERRITORIAL / APLICACIÓN DEL FACTOR DE COMPETENCIA TERRITORIAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / AUTORIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL / DECISIÓN ADMINISTRATIVA



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Para definir a quién corresponde el conocimiento de los actos proferidos por las Corporaciones Autónomas Regionales en el marco del control inmediato de legalidad, se impone armonizar los criterios legales que definen las competencias entre los Tribunales Administrativos -art. 151.14 del CPACA- y el Consejo de Estado -art. 136 ibídem- en relación con ese medio de control, de donde emergen dos premisas centrales en la definición de la competencia: i) si el acto emana de entidades territoriales, el competente será el tribunal administrativo del lugar donde fue expedido el acto, pues la regla procesal se acompasa con la jurisdicción donde éste proyecta sus efectos y ii) cuando se trate de actos que no se inscriben en un ámbito territorial definido, se entiende que provienen de una autoridad del orden nacional y, en estos casos, el control judicial estará a cargo del Consejo de Estado.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CRITERIO DE COMPETENCIA / FACTOR DE COMPETENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / CRITERIO MATERIAL / CRITERIO FORMAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Lugar de expedición / ENTIDAD TERRITORIAL / ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL FACTOR DE COMPETENCIA TERRITORIAL / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / AUTORIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVA

El factor de competencia de este medio de control, recibe las notas distintivas del criterio material y formal de los actos administrativos, de manera que el lugar de expedición del acto se corresponde con el nivel que ocupa la respectiva entidad en la estructura del Estado, ya sea en el orden territorial o en el nacional; al paso que dichos actos, materialmente, sólo producen decisiones con efectos jurídicos en el ámbito de la jurisdicción donde la entidad pública que lo emite ejerza sus competencias, ya sea en la esfera local o nacional, completando de esta manera un silogismo basado en la plena coincidencia de estos factores y criterios, a partir del cual la determinación del juez competente no debería revestir mayor discusión.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - Autoridades sui generis / ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - No hacen parte de la organización territorial del Estado / FACULTADES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL ...

Las Corporaciones Autónomas Regionales, (...) en su acción administrativa, no encajan en los niveles tradicionales de la organización territorial -local o nacional-, pues dada su especial naturaleza, estructura y finalidades, corresponden a autoridades sui generis, “sin que sea posible encuadrarlas como otro organismo superior de la administración central (ministerios, departamentos administrativos, etc.), o descentralizado de este mismo orden, ni como una entidad territorial”, siendo entonces consideradas como eslabones intermedios entre la Nación y las entidades locales (departamentales y municipales), sin perder por ello la jurisdicción en el territorio que por ley les ha sido atribuida. (...) la especial connotación que tienen las Corporaciones Autónomas Regionales en la estructura del Estado Colombiano permite afirmar que “por su estructura y finalidades, corresponden a formas u organismos administrativos, reconocidos por la Constitución Política, orientados a la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, que responden a un criterio de



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

organización funcional para la gestión de ecosistemas comunes, cuyas atribuciones se aplican a un espacio territorial plenamente identificado. Esta noción, supera los niveles fijados en la división política del territorio, pues las CAR tienen su propia jurisdicción de orden estrictamente funcional, de la que emerge su carácter autónomo y especial”

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CRITERIO DE COMPETENCIA / FACTOR DE COMPETENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / APLICACIÓN DEL FACTOR DE COMPETENCIA TERRITORIAL / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Lugar de expedición

Es posible, para efectos del control inmediato de legalidad, aplicar a los actos que expidan las Corporaciones Autónomas Regionales la regla de competencia prevista en el artículo 136 del CPACA, que corresponde al lugar de expedición de los actos, sin que sea necesario ubicar a tales organismos en el orden local o nacional, de cara a la suficiencia de una regla aplicable al factor de competencia que, además, concuerda con el ámbito en que se proyectan tales decisiones y se ciñe a la jurisdicción fijada en la Ley 99 de 1993.”

De igual forma, el Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 26 de mayo de 2022, Rad. 11001- 03-28-000-2021-00063-00, sobre el procedimiento para la elección de los representantes de las Comunidades negras ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, expresó lo siguiente:

“La Ley 70 de 1993 consagró en su artículo 56 que “Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional.”

Dicho reglamento se concretó a través del Decreto 1523 de 2003, cuyas fases y etapas se compilaron en el capítulo 5° del Decreto 1076 de 2015.

La forma de la convocatoria se reglamentó de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2.2.8.5.1.1. Convocatoria. Para la elección del representante y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Director General de la respectiva Corporación formulará invitación pública a los respectivos Consejos Comunitarios, en la cual se indicarán los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, fecha y hora para la celebración de la



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

reunión en la cual se hará la elección. La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia circulación regional o nacional con treinta (30) días de anterioridad a la fecha de realización de la elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o televisivo.”

En lo relacionado con los requisitos de los consejos comunitarios interesados en participar en la elección y postular candidatos, se establecieron los siguientes:

“ARTÍCULO 2.2.8.5.1.2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos: a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal; b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción; c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.”

Posterior a las postulaciones, la Corporación procede a la revisión de los documentos para acreditar los referidos requisitos, que comprende la elaboración de un informe que se presenta el día de la reunión de la elección:

“ARTÍCULO 2.2.8.5.1.3. Revisión de la documentación. La Corporación Autónoma Regional revisará los documentos presentados y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Posteriormente, elaborará un informe al respecto, el cual será presentado el día de la reunión de elección.”

Conviene poner de presente el procedimiento para llevar a cabo la reunión de elección, de la cual es pertinente destacar que la misma se realiza con los representantes legales de los consejos comunitarios quienes tienen a su cargo establecer la forma de elección de su representante principal y su suplente.”

En la sentencia antes citada, también se pronunció sobre el requisito del literal b) establecido en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, de la siguiente forma:



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

*“... Como bien se observa, la Sección consideró que para el cumplimiento del requisito del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, **bastaba con haber radicado la solicitud de titulación colectiva ante la Agencia Nacional de Tierras**¹², por lo que las comunidades que acreditaron tal circunstancia, aún con el hecho de no contar con una admisión formal del trámite, sí estaban habilitadas para participar en el proceso de elección y, por ende, no se les debió excluir de este.”*

De acuerdo a los anteriores parámetros, lo primero que el Juzgado concluye es que si la parte accionante considera que la exigencia del literal b), del artículo 2.2.8.5.1.2, del Decreto 1076 de 2015, para que los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizados en el departamento del Cesar puedan participar en la convocatoria pública de CORPOCESAR, aplicada por esa entidad el pasado 2 de agosto de 2023, referida a la elección de un (1) representante principal y suplente ante el consejo directivo de CORPOCESAR para el periodo 2024 - 2027, lo correspondiente es que acuda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, incluso, pudiendo solicitar como medida cautelar la suspensión provisional del acto administrativo que hizo la convocatoria.

Por tanto, resulta improcedente que para dejar sin efecto un acto administrativo de carácter general y se ordene a un ente administrativo autónomo como lo es CORPOCESAR a que genere una nueva convocatoria con el fin de elegir representante principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de esa Corporación donde se incluyan todos los Consejos Comunitarios que tengan o no certificación de la Agencia Nacional de Tierras en trámite o adjudicada, se acuda a la acción de tutela cuando el legislador tiene instituido mecanismos a partir del cual se genera alternativas judiciales de reclamación, que son las llamadas a utilizarse preferentemente, salvo que se esté frente a la posible configuración de un perjuicio irremediable, que de alguna manera justifique la intervención de la jurisdicción constitucional, lo cual no aparece acreditado dentro de la presente tramitación, pues como se observó en su demanda el accionante no mencionó nada al respecto que siquiera suponga una amenaza a los derechos fundamentales invocados, como tampoco aportó una prueba sumaria que demostrara que las exigencias de los requisitos para que el Consejo Comunitario que representa participe en la convocatoria pública convocada por CORPOCESAR el 2 de

¹² Resaltado por el Despacho



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

agosto de 2023 son contrarias a lo exigido por la normatividad vigente y hayan sido una vía de hecho de dicha entidad.

Además, observó el Despacho que la convocatoria pública invocada por CORPOCESAR el 2 de agosto de 2023 fue dirigida a todas las Comunidades Negras domiciliadas en todo el territorio del departamento del Cesar para que participaran en la elección de un (1) representante miembro principal y suplente ante el Consejo Directivo de dicha Corporación para el periodo 2024 - 2017 y en la misma se informó a los Consejos Comunitarios que aspirarían a participar que allegaran a dicha corporación con anterioridad de 15 días a la fecha establecida para la elección los requisitos previstos en el artículo 2.2.8.5.1.2 del decreto 1076 de 2015 incluyendo el del literal b) que se refiere a la *certificación expedida por el INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción*¹³, otorgándoles como plazo para la presentación de los documentos los días hábiles comprendidos entre el 2 de agosto de 2023 hasta el 25 de agosto de 2023.

No obstante, el accionante presentó acción de tutela 18 de agosto de 2023, es decir, dentro del término otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar para que se allegaron los documentos requeridos, sin haber al menos intentado ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT la solicitud correspondiente con el fin de obtener la certificación que acreditara que está en trámite la adjudicación a la comunidad negra que representa, pues, en la respuesta dada por la ANT dentro del presente trámite constitucional, informaron que requirieron a la Dirección de Asuntos Étnicos de esa entidad para que informara si a la fecha se encuentra adelantado alguna actuación administrativa respecto del Consejo Comunitario San Isidro Labrador del municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar; a lo que respondió que revisados los archivos y aplicativos, a la fecha no encontraron petición alguna pendiente por dar respuesta al accionante, lo que refuerza la tesis de que el actor no agotó todos los mecanismos jurídicos que dispone para lograr lo que pretende mediante la presente acción de tutela.

¹³ Resaltado por el Despacho



**DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ**

Por consiguiente, sin haber agotado los medios ordinarios judiciales con que cuenta para controvertir la decisión de la entidad que considera trasgresora de sus derechos fundamentales, no resulta procedente la acción de tutela como mecanismo extraordinario de protección, por lo que se reitera, se declarará improcedente el amparo reclamado.

Con fundamento en las aludidas consideraciones, el **JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ - CESAR**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política y la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO**, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Notificar la decisión a las partes conforme a los lineamientos del decreto 2591 de 1991, haciéndoles saber que respecto de esta procede impugnación.

TERCERO: En el caso que la presente sentencia no sea impugnada, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GIOVANNY TAPIAS URREGO

JUEZ